

CCB-645
ej. 1

JURISPRUDENCIAS Y DOCTRINAS SOBRE TITULOS VALORES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Centro de Información Económico - Social de Bogotá
C I E B

BIBLIOTECA

TITULOS EN BLANCO



OMERCIO
TA



COLEGIO MAYOR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

CCB 643

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Centro de Información Económico - Social de Bogotá

CIEB

BIBLIOTECA

Biblioteca - CIEB -

No. Inventario 7710

Fecha Ingreso 21/10/96
DIA MES AÑO

Precio \$ 5000 No. Ejemplares 10



Cámara de Comercio de Bogotá



Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Facultad de Jurisprudencia

CÁMARA DE COMERCIO
DE BOGOTÁ
Top: CCB0648



Jurisprudencias y Doctrinas sobre Títulos Valores

Títulos en Blanco

Trabajo de investigación institucional realizado por Felipe Alfonso Díaz Guzmán, bajo la dirección del doctor Alvaro Mendoza Ramírez y la coordinación de la doctora Claudia Díaz Granados.

Santafé de Bogotá, D. C., 1993
ISBN - 958-9113-49-4
Lic. Mingobierno 00314/85
Tarifa Reducida 340 Adpostal

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Centro de Información Económica - Societal de Bogotá

C I E B

BIBLIOTECA

Cámara de Comercio de Bogotá

Presidente (e.)

Luis Fernando Rodríguez Naranjo

Vicepresidenta Jurídica (e.)

Jeannette Vélez Ramírez

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Rector

Mario Suárez Melo

Decana Facultad de Jurisprudencia

Lucy Cruz de Quiñones

INFORMATIVO JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA SOBRE TÍTULOS VALORES

Nº 4

Títulos en blanco

Abril de 1993

Director:

Alvaro Mendoza Ramírez

Investigadores:

Felipe Alfonso Díaz Guzmán

Claudia Díaz Granados Ortiz

Luis Miguel Viana G.

Departamento promotor:

Centro de Investigaciones Jurídicas

INDICE

	Pág.
1. IMPORTANCIA DEL TEMA	11
2. CONCEPTO	14
2.1 Diversas definiciones de títulos en blanco	14
2.2 Diferencia entre título incompleto, título con espacios en blanco y título absolutamente en blanco	20
3. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE LOS TITULOS EN BLANCO	33
3.1. Cuando hay títulos en blanco	33
3.2. Requisitos mínimos del título en blanco	37
4. VALIDEZ DE LOS TITULOS EN BLANCO	43
5. FUNDAMENTO JURIDICO EN VIRTUD DEL CUAL EL TENEDOR TIENE EL DERECHO DE LLENAR EL TITULO EN BLANCO	46
5.1 Teoría del mandato	46
5.2 Teoría que supone que se ha conferido un poder al tomador	50
5.3 Teoría que considera al título en blanco como un negocio cambiario bajo condición suspensiva	50
5.4 Teoría del hecho ilícito	51
5.5 Teoría del contrato preliminar	52
5.6 Teoría de la declaración unilateral de voluntad	52
5.7 Teoría ex-título	53
5.8 Teoría mixta	54
5.9 Teoría de los derechos potestativos constitutivos	54
5.10 Teoría del portador de buena fe de una cosa mueble	54
5.11 Teoría del contrato de integración	55
5.12 Teoría legal, ex lege	56

6.	INSTRUCCIONES	57
6.1	Requisitos de las instrucciones	61
6.2	Término para completar el título	65
6.3	Prueba de las instrucciones	71
6.4	¿Quién puede dar las instrucciones?	77
6.5	¿Quién puede llenar el título en blanco?	78
7.	CIRCULACION DE LOS TITULOS EN BLANCO	82
8.	EFFECTOS JURIDICOS	91
9.	EXCEPCIONES	93
9.1	Frente al primer tomador o beneficiario	94
9.2	Frente al tenedor legítimo diferente del primer tomador o beneficiario	95
10.	ASPECTOS PENALES DE LOS TITULOS EN BLANCO	97
11.	ENDOSO EN BLANCO	103
12.	CONCEPTOS DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA	107
12.1	Nociones preliminares	107
12.2	Documentos jurídicos	108
12.2.1	Documento No. 1	108
12.2.2	Documento No. 2	110
12.2.3	Documento No. 3	110
12.2.4	Documento No. 4	112
12.2.5	Documento No. 5	113
13.	JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PAIS	117
13.1	Nociones preliminares	117
13.2	Documentos jurídicos	121
13.2.1	Documento jurídico No. 1	121
13.2.2	Documento jurídico No. 2	122
13.2.3	Documento jurídico No. 3	123

13.2.4	Documento jurídico No. 4	126
13.2.5	Documento jurídico No. 5	127
13.2.6	Documento jurídico No. 6	128
13.2.7	Documento jurídico No. 7	129
13.2.8	Documento jurídico No. 8	132
13.2.9	Documento jurídico No. 9	133
13.2.10	Documento jurídico No. 10	134
13.2.11	Documento jurídico No. 11	136
13.2.12	Documento jurídico No. 12	137
13.2.13	Documento jurídico No. 13	139
13.2.14	Documento jurídico No. 14	141
13.2.15	Documento jurídico No. 15	141
13.2.16	Documento jurídico No. 16	142
13.2.17	Documento jurídico No. 17	144
13.2.18	Documento jurídico No. 18	145
13.2.19	Documento jurídico No. 19	147
13.2.20	Documento jurídico No. 20	148
13.2.21	Documento jurídico No. 21	150
13.2.22	Documento jurídico No. 22	151
13.2.23	Documento jurídico No. 23	152
13.2.24	Documento jurídico No. 24	154
13.2.25	Documento jurídico No. 25	155
13.2.26	Documento jurídico No. 26	158
13.2.27	Documento jurídico No. 27	159
13.2.28	Documento jurídico No. 28	161

BIBLIOGRAFIA 163

1. DOCTRINA 163

2. LEGISLACION 165

3. CONCEPTOS 165

4. JURISPRUDENCIA 166

1. IMPORTANCIA DEL TEMA

El tema que nos proponemos tratar reviste una especial importancia en el mundo actual del comercio, por cuanto, en primer término y muy principalmente, apunta a proteger a los terceros tenedores de buena fe que, por ser extraños a la forma de creación del documento, no deben sufrir ninguna consecuencia de la misma. En segundo lugar, por cuanto se observa un creciente uso de esta clase de documentos, en razón de su utilidad práctica, en la medida en que suministran la posibilidad de ser complementados posteriormente con base en elementos y en datos indeterminados en el momento de su firma, pero cuya precisión se producirá más adelante, una vez se tengan todos los datos necesarios para que se forme un título completo que debe producir los efectos jurídicos que emanan de los derechos en él contenidos. A lo anterior conviene añadir que la naturaleza misma de los documentos así creados se presta a la presencia de conductas abusivas, con connotaciones claramente penales, a la par que ofrece a la doctrina una serie de incógnitas de muy difícil dilucidación, como adelante se verá.

En nuestro medio, el título en blanco generalmente cumple una tarea de documentación de un crédito principal, que emana de un acto jurídico concomitante con la emisión del título, anterior a este momento o aun posterior pero, en este último caso, previsto en la fecha de la suscripción.

En este sentido el doctor Sergio Rodríguez Azuero, en su obra "Contratos Bancarios", nos trae una de las formas como en la práctica son utilizados los títulos en blanco:

"Es posible que el deudor firme un documento obligándose a responder ante el Banco hasta por cierta cuantía, pero incluso en ese evento la determinación del saldo a su cargo no surgirá ya de un documento en que figuren los abonos realizados, sino del corte de la cuenta que habrá sido efectuado, de ordinario, por sucesivos depósitos y retiros. Si no se prevé que la certificación del banco o de una autoridad resulten suficientes, será necesario acudir a los medios de prueba ordinarios para establecer la cuantía de la obligación.

"No se descarta tampoco que el deudor firme garantías en blanco con instrucciones de ser llenadas por el monto que resulte a su cargo, para dotar a la institución de un instrumento idóneo y ágil

para intentar el cobro judicial de la deuda en caso de que no sea satisfecha en forma oportuna”¹.

En estos títulos hay algunos elementos que no se pueden determinar en la fecha de su firma, por lo cual se otorga la posibilidad de ser completados posteriormente, sobre la base de datos que se precisarán más adelante. El hecho de que existan tales elementos indeterminados, en nada impide que sea creado el título con los datos ya ciertos, mientras los demás se complementan posteriormente, teniendo en cuenta las instrucciones de su suscriptor.

Un ejemplo puede servirnos de ilustración para que se entienda lo anterior. Dos personas celebran un contrato de suministro de cierto producto, pero quien recibe las mercancías no puede determinar cuántas unidades necesita para terminar una obra cualquiera. Para garantizar el pago del precio del contrato libra una letra de cambio, en la cual no existe un valor en ella incluido. Este se determinará posteriormente, mediante la autorización al beneficiario para que llene su valor según un comprobante de suministro.

Sin embargo, la expedición de títulos en blanco, como documento de una obligación, ha sido fuertemente criticada por algunos autores, quienes consideran que la voluntad de quien los suscribe se ve coaccionada por las circunstancias que rodean su creación.

En este sentido, el doctor Gustavo Adolfo Restrepo Navarro opina que:

“Quien emite un título en las condiciones anotadas (en blanco) es cierto que generalmente lo hace presionado por diversas circunstancias, como son, por ejemplo tener acceso a una tarjeta de crédito, lograr la emisión de una carta de crédito, alquilar un automóvil, obtener una garantía o póliza de cumplimiento o hasta lograr un alojamiento en un hotel, sin dejar de incluir el caso más corriente de la simple celebración de un contrato de cuenta corriente bancaria;...”².

-
1. RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. "Contratos Bancarios y su Significación en América Latina": Segunda edición. Bogotá: Felaban, 1979. Pág. 311.
 2. RESTREPO NAVARRO, Gustavo Adolfo. "Del Pagaré en Blanco". En: Revista Derecho Colombiano No. 296. Bogotá: Editorial Librería El Profesional. Pág. 177.

Así mismo, el doctor Gustavo de Greiff Restrepo manifiesta su discrepancia con la práctica de expedir pagarés en blanco, corriente en nuestro medio, en los siguientes términos:

“Ha hecho carrera en Colombia la suscripción de pagarés, o sea de promesas incondicionales de pago de una suma de dinero en donde, en formularios preimpresos, se deja en blanco tanto la cantidad a pagar, como la fecha de la suscripción y vencimiento, el lugar de suscripción así como aquel en donde haya de efectuarse el descargo; y lo que es peor, generalmente sin documento o carta de instrucciones al beneficiario, para el llenamiento de los espacios, o, en el menos censurable de los casos, con una simple autorización de llenarlos dada en términos generales, es decir, sin especificar ninguno de los citados aspectos”³.

Como podemos observar, ha existido desde siempre una cierta preocupación en la doctrina respecto de la manera como son utilizados los títulos en blanco en ciertos casos. Es más, algunas legislaciones han llegado al extremo de prohibir su uso, como es el caso de Suecia, Noruega, Dinamarca y Holanda. Sin embargo, éstos son casos aislados, por cuanto ante la realidad de su existencia, la mayoría de los países ha optado por admitir esta institución, reglamentándola estrictamente.

Centrándonos en el ámbito jurídico colombiano, es indiscutible que nuestro derecho admite la institución de los títulos en blanco, al consagrar en el artículo 622 del Código de Comercio:

“Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora.

Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título-valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello.

Si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exento de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste podrá

3. DE GREIFF RESTREPO, Gustavo. “Del Pagaré en Blanco”. En: Revista Derecho Colombiano No. 294. Bogotá: Editorial Librería El Profesional. Pág. 504.

hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas”.

Es de anotar que, si bien es cierto que en algunas oportunidades estos títulos se han prestado para cometer abusos, también lo es que los mismos se han constituido en un medio ágil y oportuno para la realización de actos de comercio, al permitir documentar cambiariamente una deuda cuyo importe no puede aún calcularse, porque ello depende de que se presenten posteriormente ciertos hechos que servirán de base para su complementación. De todo lo dicho anteriormente, salta a la vista la especial trascendencia que reviste este aspecto del derecho cambiario. Conscientes de ello, nos hemos propuesto realizar el presente estudio, con el cual pretendemos otorgar al lector una visión general y completa sobre esta problemática, máxime ante la escasa y dispersa información existente en la materia y ante la poca profundidad con la cual los tratadistas nacionales se refieren al tema, así como en consideración a la trascendencia práctica que implica el frecuente uso de los títulos en blanco.

Por tal razón, nos referiremos, no sólo a los conceptos emitidos por la Superintendencia Bancaria y por la doctrina y jurisprudencia nacionales, sino también a las teorías de autores extranjeros, que aunque generalmente limitan su análisis al estudio de la letra de cambio en blanco, sirven de base para lograr una interpretación que permita formar un criterio válido y adecuado a nuestra normatividad jurídica.

2. CONCEPTO

2.1 Diversas definiciones de título en blanco

En este capítulo analizaremos las definiciones, en nuestro sentir más importantes, que sobre el tema han expuesto los autores nacionales y extranjeros.

Como anteriormente anotamos, no todas las legislaciones aceptan la existencia de los títulos en blanco, circunstancia que nos obliga a referirnos exclusivamente a las definiciones de quienes admiten la creación de tales títulos.

En este orden de ideas, trataremos inicialmente a los autores italianos, argentinos y mexicanos, para luego estudiar a los doctrinantes nacionales, exponiendo, por último, a título de conclusión, nuestra propia definición de título en blanco, la cual creemos recoge los aspectos fundamentales de esta figura.

Los tratadistas italianos sólo aceptan como título en blanco la letra de cambio, siendo ésta definida por Vivante de la siguiente forma:

“La letra de cambio en blanco es una hoja de papel que no está todavía dotada de todos los requisitos esenciales de una letra de cambio, pero que, llevando el timbre y una firma prestada en forma cambiaria, es apta para llegar a serlo”.

“Es una forma embrionaria, transitoria, destinada a completarse con las formalidades completas de la cambial”⁴.

Consideramos que esta definición no presenta inconveniente para ser adoptada en nuestro medio, refiriéndonos a títulos en blanco, cuando se habla de letra de cambio.

Ferri no da una definición expresa de los títulos en blanco, pero hace referencia a ellos diciendo que:

“En algunos títulos de crédito, como por ejemplo, la letra de cambio, se da la posibilidad de que no todos los elementos esenciales existan al momento de su entrada en circulación; o sea, que algunos elementos estén en blanco”⁵.

Messineo, por su parte, no define la letra en blanco, pero acepta su existencia con base en el artículo 14 de la Ley Cambiaria italiana, fundamentándose en el hecho de que ellas sean libradas intencionalmente con espacios en blanco.

En Argentina, la institución de la letra en blanco se fundamenta en el artículo 11 del Decreto-Ley 5965/63 que prevé lo siguiente:

“Si una letra de cambio incompleta al tiempo de la creación hubiese sido completada en forma contraria a los acuerdos que la determinaron, la inobservancia de tales acuerdos no puede oponerse al portador, a menos que éste la hubiese adquirido de mala fe o que al adquirirla hubiese incurrido en culpa grave.

4. VIVANTE, César. “Tratado de Derecho Mercantil”. Volumen III. Primera edición. Madrid: Editorial Reus, 1936. Pág. 272.

5. FERRI, Giuseppe. “Títulos de Crédito”. Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot S. A., 1982. Pág. 220.

El derecho del portador de llenar la letra en blanco caduca a los tres años del día de la creación del título. Esta caducidad no es oponible al portador de buena fe, a quien el título le hubiese sido entregado ya completo”.

Esta norma constituye una transcripción casi textual del artículo 14 de la Ley Cambiaria italiana, por lo cual el presupuesto legal sobre el que se basan los autores de estos dos países es esencialmente el mismo. Esta circunstancia ha hecho que la doctrina argentina siga muy de cerca las interpretaciones y conceptos de los tratadistas italianos.

En verdad, los tratadistas argentinos han sido quienes han estudiado con mayor profundidad este tema a nivel latinoamericano, sirviéndose para ello de la norma antes transcrita, cuyo texto, a nuestro modo de ver, es completo y muy claro en su redacción.

En concepto del doctor Fernando Legón,

“Existirá letra de cambio incompleta cuando el título haya sido emitido y aun haya circulado con ausencia de algunos de los requisitos dispositivos”.

Para entender esta definición se debe tener en cuenta que los llamados por el autor requisitos dispositivos, son aquellos que deben figurar ineludiblemente en la redacción del título, ya que forman parte de su literalidad, de sus menciones necesarias, en los términos de nuestro artículo 620 del Código de Comercio. Esto no ocurre con los requisitos naturales, por cuanto su falta es suplida automáticamente por la ley, excepto en el caso de que sobre tales requisitos exista un acuerdo entre el suscriptor y el tenedor. Esto manifiesta que para el autor el elemento intencional es indispensable en la emisión de los títulos en blanco.

En el mismo sentido, el doctor Jorge N. Williams opina que:

“La letra en blanco es aquella que al momento de su creación o emisión no contiene todos los requisitos considerados esenciales por la ley (cláusulas dispositivas) y que, incluso, ha circulado sin

6. LEGON, Fernando A. “La Letra de Cambio y el Pagaré”. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot S. A., 1984. Pág. 70.

los mismos, pero que ha sido completada y aparece formalmente perfecta, al momento del vencimiento de la prestación”⁷.

Para el tratadista Luis Muñoz, la letra de cambio en blanco es aquella que no se encuentra integrada *ab initio*, en razón a que pueden faltar algunos de sus requisitos formales, los cuales pueden incorporarse ulteriormente, antes de hacer valer el derecho, excepto la firma del girador.

De la anterior definición se llega a deducir que el único elemento que no puede dejar de contener la letra de cambio en blanco es la firma del librador, siendo en este sentido el concepto de Luis Muñoz menos exigente que el de los autores anteriores.

El profesor Ignacio A. Escutti define los títulos en blanco así:

“Título incompleto es el que nace careciendo de alguno de los requisitos formales esenciales que no se suplen por los artículos 2o. y 102 del Decreto-Ley 5965/63”⁸.

Es de anotar que para Escutti la distinción entre título en blanco y título incompleto sólo tiene un interés académico. Por ende, cuando él habla de título incompleto, se debe entender que esta expresión cobija el título en blanco.

Al analizar las definiciones expuestas por los autores extranjeros anteriormente citados, vemos que casi siempre las refieren a letra en blanco, ya que sus legislaciones, según opinión de algunos de ellos, sólo consagran expresamente esta posibilidad para la letra de cambio. Esto, en nuestro concepto, no es óbice para que a través de la doctrina extranjera podamos *analizar y estudiar* el tema de los títulos en blanco en general, teniendo en cuenta que el estudio de los títulos-valores está basado en la letra de cambio. Además, consideramos que la redacción de las normas extranjeras no pugna con la fórmula empleada en el artículo 622 de nuestro Código de Comercio.

Si bien es cierto lo anterior, no está de más anotar que algunos tratadistas argentinos han esgrimido la tesis de la extensión de los principios de la letra de

7. WILLIAMS, Jorge N. “La Letra de Cambio y el Pagaré”. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot S. A., 1981. Pág. 430.

8. ESCUTTI, Ignacio A. “Títulos de Crédito”. Segunda edición. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1988. Pág. 76.

cambio en blanco al pagaré, por aplicación del artículo 103 del Decreto-Ley 5965/63 a cuyas voces:

“Son aplicables al vale o pagaré, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de este título, las disposiciones de la letra de cambio relativas... a la letra de cambio en blanco (artículo 11)”.

Siguiendo el orden propuesto, pasaremos a analizar a los tratadistas mexicanos.

El artículo 15 de la Ley Cambiaria mexicana manifiesta:

“Las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto en él consignado necesitan para su eficacia, podrán ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del título para su aceptación o para su pago”.

El artículo transcrito no presenta claridad sobre el tema. No habla de acuerdos entre el suscriptor y el tenedor del título, ni de si tales omisiones son voluntarias o involuntarias, circunstancia que ha hecho que la doctrina no tenga unidad de criterio en la aceptación de los títulos emitidos con espacios en blanco.

Habiendo aclarado lo anterior, a continuación expondremos los conceptos de los autores mexicanos que aceptan los títulos en blanco.

Felipe de J. Tena, para facilitar la comprensión de este problema, limita su análisis a la letra de cambio, por considerarla el título más importante y al respecto indica:

“La letra de cambio en blanco es, pues, una letra en embrión (en oposición a lo que ocurre tratándose del endoso en blanco), tal condición de embrionaria puede subsistir aun por todo el período de la circulación del título, mas ello no impedirá que éste adquiera su total plenitud de letra de cambio al completarse en el momento de reclamarse su pago”⁹.

Para Joaquín Rodríguez este problema plantea una cuestión de interés, que está resuelta en la normatividad mexicana por dos tipos de preceptos. Por un lado, se

9. TENA, Felipe de J. "Títulos de Crédito". Tercera edición. México: Editorial Porrúa, S. A., 1956. Pág. 182.

suple la voluntad de quienes intervinieron en la emisión de la letra de cambio, consagrando normas supletorias para aquellos eventos en los cuales se omiten ciertos requisitos, como cuando se pretermite el lugar en el cual debe pagarse, (artículo 77) o la fórmula de giro (artículo 79 parágrafo final). Otras normas se refieren a la subsanación de los espacios en blanco, respecto de ciertas menciones que pueden ser satisfechas por aquellas personas que en su oportunidad debieron llenarlas, siempre que sea antes de la presentación del título para su pago o su aceptación, siendo éste el caso de los títulos en blanco de nuestra legislación.

A su turno, el doctrinante López de Goicoechea entiende la letra en blanco como "aquel documento que se entrega sin que en él se llenen los requisitos formales exigidos por la ley"¹⁰.

Roberto Mantilla considera que se debe hablar de cambial incoada y no de cambial en blanco, afirmando al respecto:

"Suele llamarse cambial en blanco, o, con más generalidad, título en blanco, al documento que carece de algunos de los requisitos legalmente necesarios para tipificarlo, porque al extenderlo deliberadamente se pospone el satisfacerlos"¹¹.

Como ya fue advertido en el capítulo precedente, nuestro ordenamiento jurídico acepta la institución de los títulos en blanco, figura expresamente consagrada por el legislador en el artículo 622 del actual estatuto mercantil, no existiendo discusión alguna en cuanto a su existencia a nivel de la doctrina y de la jurisprudencia de los tribunales superiores del Distrito Judicial del país.

Sin embargo, ninguno de nuestros tratadistas ha logrado una definición satisfactoria de los títulos en blanco, limitándose en la mayoría de los casos a exigir para la formación de este tipo de documentos una serie de requisitos y elementos, sin precisar el concepto del título en blanco.

En cuanto a la opinión de nuestros tribunales, no haremos mención expresa de ella en este capítulo, remitiéndonos para tal efecto al acápite No.13 relativo a la jurisprudencia.

10. LOPEZ DE GOICOECHEA, Francisco. "La Letra de Cambio". Cuarta edición. México: Editorial Porrúa S. A., 1979. Pág. 125.

11. MANTILLA MOLINA, Roberto L. "Títulos de Crédito". Segunda edición. México: Editorial Porrúa S. A., MCMLXXXIII. Pág. 133.

Al realizar el análisis anterior, encontramos que no existe ni en la doctrina nacional ni en la extranjera una definición completa y precisa del título en blanco.

Por ello nos parece pertinente intentar nuestra propia definición, la cual recoge las características más sobresalientes de esta institución, con el propósito de llenar el vacío existente en la materia y de aclarar las perplejidades que suscita el tema.

En nuestro concepto, título en blanco es aquel instrumento que, conteniendo una firma dada cambiariamente, al menos en su apariencia, se encuentra o bien con espacios en blanco, de aquellos exigidos por la normatividad propia de los títulos-valores, o bien absolutamente en blanco, debiendo ser completado por el tenedor legítimo antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora, de conformidad estricta con las instrucciones otorgadas por el creador del mismo.

De esta definición se desprenden cuatro elementos esenciales:

1. Existencia de un documento con una firma dada cambiariamente, por lo menos en cuanto corresponde a su apariencia.
2. Carencia de uno o más de los elementos que denominamos dispositivos, es decir, necesarios para la existencia de un título-valor y no suplidos por la ley.
3. Intención o voluntad en el suscriptor de crear un instrumento en blanco para ser completado posteriormente.
4. Existencia de instrucciones precisas del creador sobre la forma como debe ser llenado el título en blanco.

Sobre estos dos últimos aspectos conviene precisar desde ahora que la intención de dicho creador y la existencia de instrucciones pueden ser elementos esenciales en la relación jurídica entre el creador y el tenedor que las desarrolle, pero no necesariamente relevantes para un tenedor de buena fe exenta de culpa, circunstancia que se tratará en profundidad más adelante.

2.2 Diferencias entre título incompleto, título con espacios en blanco y título absolutamente en blanco

Iniciaremos este aparte del estudio analizando la distinción entre título incompleto y título en blanco, para posteriormente estudiar la diferencia entre título con espacios en blanco y título absolutamente en blanco.

La mayoría de los autores extranjeros que tratan el tema de los títulos en blanco han establecido una diferencia radical entre título en blanco y título incompleto. Para otros, este tema no tiene mayor relevancia o simplemente consideran que no existe tal diferencia.

Para los italianos De Supino y De Semo, estudiosos del tema de los títulos-valores, en su obra "De la Letra de Cambio", la diferencia entre la letra en blanco y la letra incompleta consiste en que mientras a la letra incompleta le falta algún requisito independiente de la voluntad del emisor, debido a una simple omisión, la letra en blanco requiere un elemento intencional, o sea, la voluntad del emitente de librarla con espacios en blanco. Pero aún así, para estos autores no existe desde el punto de vista jurídico una distinción entre letra incompleta y letra en blanco. Para explicar tal afirmación los tratadistas expresan:

"En efecto, en las relaciones entre emitente y tomador, o terceros que se presentan con la letra de cambio todavía en blanco, pueden darse estas dos situaciones: la integración de la letra es conforme a la voluntad del emitente y éste ninguna excepción podrá oponer; o no lo es y, entonces, podrá hacer valer las propias excepciones como excepciones personales. Al tercer poseedor de buena fe, al cual la letra de cambio le ha llegado después de haber sido completada, ninguna excepción se le podrá oponer, como veremos en seguida. No puede admitirse, por tanto, la opinión de quienes niegan al tomador, bajo pena de incurrir en falsedad, la facultad de completar una letra de cambio emitida sin voluntad de obligarse en blanco"¹².

Los autores manifiestan que, desde el punto de vista jurídico, no existe ninguna diferencia entre título incompleto y título en blanco, ya que respecto del tenedor de buena fe a quien le ha llegado completo el título, no se podrá oponer ninguna excepción. No obstante, incurren en un error de interpretación, en la medida en que respecto de tenedores anteriores y especialmente del primer tenedor, sí se producen efectos jurídicos que pueden diferenciarse claramente, en tratándose de un título incompleto o de uno blanco. Así, en un título en blanco, se podrá oponer al primer tenedor la excepción de indebida cobertura del título, cuando viole las instrucciones a él impartidas, mientras que en el título incompleto no hay intención de dejar blancos, ni instrucciones, por lo cual no podríamos hablar

12. SUPINO, David y DE SEMO, Jorge. "La Letra de Cambio y del Pagaré Cambiario". Ediciones Ediar. Pág. 154.

de violación de un pacto que nunca existió, presentándose un fenómeno distinto como sería una falsedad material. En toda obligación jurídica válida, en la cual esté incluido un elemento intencional, debe existir una manifestación de voluntad, que para el caso de los títulos en blanco es la entrega a conciencia de un documento con espacios en blanco, facultándose a quien lo recibe para llenarlos, de acuerdo en el pacto de integración. Por esta razón consideramos importante la distinción, pues como vimos, sus alcances y efectos son diferentes tratándose de una o de otra clase de títulos.

Una cosa es la existencia de un título con vacíos que no se completaron, bien por olvido o bien porque en el momento de extenderlo no se quiso crear un título-valor, y otra muy distinta la creación voluntaria e intencional de un título con espacios en blanco, para ser integrado posteriormente por su tenedor en su totalidad. En este segundo caso existe la intención de facultar a un tercero para crear cambiariamente una obligación, la cual está ausente en el primer caso.

Bonelli sostiene la tesis de que se trata de dos partes de una misma ecuación, en el sentido de que no existe diferencia desde el punto de vista jurídico entre estos dos instrumentos, de tal forma que la letra en blanco no deja de ser una letra incompleta, que puede completarse por cualquier tenedor sucesivo. Quienes defienden esta tesis afirman que las dos clases de títulos están sujetas a la misma normatividad y que la facultad de completar los espacios en blanco proviene de la ley y no de la voluntad del suscriptor, sin que sea necesario que los requisitos formales del instrumento existan al momento de su emisión, sino en la oportunidad en que se hace valer el derecho en él incorporado.

Otros autores como Ferrara, citado por Williams, manifiestan lo siguiente sobre el tema:

"De la letra de cambio incompleta en el sentido indicado se distingue la letra en blanco. También en ella faltan los requisitos esenciales, pero el firmante ha querido obligarse en relación con un contenido preestablecido dejado en blanco, otorgando a otros el poder de determinarlo sobre el título, confiriendo el derecho de integración. La diferencia está en esto: que en la letra en blanco el poseedor tiene el derecho de llenar lagunas y está destinada a llegar a ser una letra válida, mientras en la incompleta falta este derecho desde su origen, la letra no puede ser integrada y puede llegar a ser un aborto.

"Se aclara este carácter en razón de que la letra en blanco sólo está temporalmente privada de algún requisito porque está destinada

a la integración por obra del poseedor y por ello es una letra en embrión, en potencia, que se perfeccionará por el ejercicio del derecho de integración"¹³.

Otros distinguen entre título en blanco y título incompleto, basándose en la existencia o no de la voluntad de perfeccionar o llevar a término la obligación cambiaria. Así, quien crea un título en blanco, realiza un acto destinado, según su querer, a perfeccionarse. Por el contrario, quien crea un título incompleto, realiza un acto que no debe llegar a perfeccionarse, ya que la voluntad del emitente queda agotada en el acto incompleto o imperfecto. De ahí concluyen que la creación de un título incompleto configura un acto nulo y un título nulo, mientras que la creación de un título en blanco implica un acto en formación que, debidamente ejecutado, constituye un título completo, generador de obligaciones cambiarias totalmente válidas. Entre nosotros es obvio que no podría hablarse de nulidad en el título incompleto, sino de ineficacia cambiaria (artículo 620 del Código de Comercio).

En relación con lo anterior expresan Bonfanti y Garrone:

"Debe distinguirse entre lo que constituye el documento como cosa y el hecho como constitutivo de la obligación, de tal forma que pueda aceptarse la hipótesis de que exista el documento sin que exista el acto cambiario constitutivo de la obligación cambiaria. Así podemos considerar el hecho de que el título sea formalmente perfecto como documento en un momento dado, ya que contiene todos los requisitos, pero que no sea válido para producir los efectos sustanciales por defecto del acto cambiario del firmante en razón a que no existe una manifestación de voluntad, ya que el signatario no firmó con la intención de que tal documento se complementara posteriormente"¹⁴.

Oppo, citado por Bonfanti y Garrone, sostiene que:

13. WILLIAMS, Jorge N. "La Letra de Cambio y el Pagaré". Tomo I. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot, S. A., 1981. Pág. 442.

14. BONFANTI, Mario y GARRONE, José Alberto. "De los Títulos de Crédito". Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot S. A., 1976. Pág. 284.

“Más que referirse a documento incompleto y documento en blanco, corresponde expresarse con los conceptos de creación cambiaria incompleta y creación cambiaria en blanco”¹⁵.

El autor fundamenta su tesis en que en la creación cambiaria incompleta existe un acto nulo, en tanto que en la creación cambiaria en blanco hay un acto en formación. Esta opinión es compartida por Carnelutti, quien afirma que el acto de creación de un documento en blanco es un acto destinado a ser fuente de obligación cambiaria, mientras que el acto de creación de un documento incompleto no tiene ningún efecto, siendo por ende un acto nulo.

Autores como el venezolano Roberto Goldschmidt defienden la diferencia que existe entre título incompleto y título en blanco manifestando que:

“La letra en blanco es una letra incompleta, que el tenedor puede llenar autorizado por el signatario. En otros términos se trata de una letra dejada incompleta intencionalmente, a diferencia de la letra incompleta por descuido que es nula en caso de que falte uno de los requisitos esenciales, constituyendo su eventual complemento una falsificación”¹⁶.

Este autor fundamenta la diferencia entre letra incompleta y letra en blanco por sus implicaciones penales. Así, frente a la letra incompleta, se configuraría el delito de falsedad en el evento en que se completaran sus claros con posterioridad, mientras que tal circunstancia no se presentaría en el caso de la letra en blanco, que fuera integrada de acuerdo con las instrucciones precisas de su creador.

No estimamos posible sostener que el título incompleto sea necesariamente nulo, ni tampoco el acto mismo de creación. El primero sería ineficaz como título-valor, en función de las exigencias del artículo 620 del Código de Comercio, y el segundo inexistente, por carecer de uno de sus elementos esenciales, a saber: objeto determinado o determinable, si es que los espacios en blanco afectan dicha determinación. Podría también suceder que el título fuera ineficaz cambiariamente, pero que el acto de creación produjera otros efectos jurídicos.

15. OPPO, Citado en: BONFANTI, Mario y GARRONE, José Alberto. Ob. cit. Pág. 285 (P).

16. GOLDSCHMIDT, Roberto. "La Letra de Cambio y el Cheque". Caracas: Editorial Frabreton, 1984. Pág. 38.

En todos los autores antes analizados encontramos una constante: la exigencia de un acuerdo previo para completar el título como presupuesto de la cambial en blanco, acuerdo éste que no existe en tratándose de la letra incompleta. Este es, pues, el elemento diferencial básico entre la letra incompleta y la letra en blanco.

Los autores nacionales no ahondan mucho en el tema. Para algunos, no existe mayor diferencia entre los títulos en blanco o con espacios en blanco y los títulos incompletos. Para otros, puede existir una diferencia meramente conceptual y no una diferencia de fondo que tenga implicaciones jurídicas. No se trata esta distinción con la importancia que merece que, como vimos anteriormente, puede tener varias consecuencias jurídicas, que se manifiestan en efectos distintos entre uno y otro título.

El doctor Ramiro Rengifo, en su obra "Letra de cambio y cheque", considera:

"Al respecto hay que distinguir entre la letra incompleta que es aquella en la cual se han dejado involuntariamente algunos espacios en blanco (y hay que entender espacios que no son suplidos por la misma ley porque de ser así la letra sería completa) y la letra en blanco propiamente dicha, que es un simple papel no dotado todavía de todos los requisitos esenciales de una letra de cambio pero que llevando una firma prestada en forma cambiaria puede llegar a ser".

El autor en esta parte establece diferencias entre los dos tipos de títulos, pero a continuación agrega:

"Para ambas situaciones el Código autoriza al tenedor legítimo a llenar los espacios en blanco antes de presentar el título para hacer efectivo su crédito. La labor de completación debe ser hecha estrictamente de acuerdo con las instrucciones recibidas"¹⁷.

En nuestro criterio, el autor citado incurre en un error de interpretación al referirse a los títulos incompletos. En efecto, en la primera parte de su disertación, dice que por tales deben entenderse aquellos a los cuales se les han dejado algunos espacios en blanco de manera involuntaria. Hasta aquí su razonamiento es lógico. Sin embargo, más adelante continúa diciendo que tanto para el título

17. RENGIFO, Ramiro. "Letra de Cambio y Cheque". Bogotá: Editorial Pequeño Foro, 1979. Pág. 17.

incompleto, como para el título en blanco, la ley autoriza al tenedor legítimo para llenar los espacios en blanco, de acuerdo con las instrucciones recibidas para el efecto. Este planteamiento es a todas luces incongruente por cuanto, si esos espacios vacíos se han dejado sin voluntad del emitente, mal podríamos hablar de “*instrucciones precisas del creador*”, pues para que ellas existan es necesario un acuerdo previo entre las partes. Al utilizar el término involuntariedad, se descarta de plano la presencia del elemento volitivo, esencial para la conformación de un acuerdo.

Por otra parte, si se dejan espacios vacíos involuntariamente, significa que no existe por parte del librador manifestación expresa o intención de que el título se complemente posteriormente por otra persona: el librador no lo quiso.

Si leemos detenidamente el artículo 622 del Código de Comercio colombiano, encontramos que en su texto se hace énfasis en los términos “instrucciones” y “autorizaciones”. En uno de sus incisos reza: “podrá llenarlos, conforme a las *instrucciones* del suscriptor”, y en el otro habla que “deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la *autorización* dada para ello”. Resaltamos las palabras instrucciones y autorización, porque su utilización semántica obedece a la idea de una predeterminación del acto jurídico deseado, que en el caso de los títulos en blanco implica que quien deja los vacíos lo hace voluntariamente, para que con posterioridad se complementen según un acuerdo; según unas instrucciones o autorizaciones, que siempre conllevan una manifestación de voluntad expresa, que no puede suplirse bajo el amparo de una simple inadvertencia.

Quien autoriza algo está aprobando un determinado hecho futuro y nadie lo suficientemente razonable otorga aprobación a actos arbitrarios de otra persona, y menos si éstos se realizan en contra o al menos al margen de sus intereses. La ley no otorga facultad de aprobar actos arbitrarios que, por serlos, se cumplen a espaldas de las autorizaciones o pactos suscritos entre las partes. Lo que sí puede suceder es que posteriormente a la entrega del título incompleto éste, siendo complementado por el tenedor legítimo, reciba la aprobación de tal cobertura por parte del signatario, ya que el suscriptor puede ratificar la complementación, aunque inicialmente no hubiere otorgado tal facultad.

Para aclarar la posición anterior, es pertinente traer a colación el concepto emitido por el eminente jurista Javier Lopera Salazar:

“Se ha consolidado en la doctrina la distinción entre documentos en blanco y los incompletos, comprendiendo los primeros a

aquellos en los que el suscriptor relega, de modo voluntario, su integración en forma progresiva y señala la manera de efectuarla en un momento ulterior. Los incompletos serían aquellos dejados inadvertidamente con defectos, por negligencia, ignorancia u otra causa, sin que medie un pacto de complemento expreso o susceptible de tácito entendimiento”¹⁸.

El autor citado fundamenta la diferencia entre los dos tipos de títulos, como lo hacen la mayoría de los autores extranjeros y nacionales, en la **intención** del suscriptor de que estos documentos sean complementados posteriormente, según sus instrucciones. Es su voluntad, movida por ciertos hechos, que el documento se suscriba y emita con espacios, que se deben luego llenar de acuerdo con un pacto preestablecido. Continúa el autor citado diciendo:

“En Colombia no hay duda de que el artículo 622 sólo regula los documentos incoados “en blanco”, ya que para llenarlos es menester atender las precisas instrucciones del suscriptor que dejó los blancos.

Si no existe acuerdo autónomo que estipule cómo se ha de llenar el título, éste queda definitivamente ineficaz frente a los signatarios del documento defectuoso”¹⁹.

Quien complete un título en blanco sin tener facultad para ello, está cometiendo una falsedad documental, un abuso de firma en blanco. Un documento de tal especie carecería de eficacia en relación con el suscriptor y el primer tenedor, también respecto de otros tenedores anteriores a la integración indebida, siendo eficaz cambiariamente sólo en el supuesto de cobro por parte de un tenedor de buena fe exenta de culpa. Quien complete un documento en blanco sin ninguna instrucción para hacerlo, a su entera voluntad o arbitrariamente, incurriría en un delito, dado que en ningún momento se preocupó por informarse de las instrucciones o de la forma en que se debió hacer la cobertura del título.

El profesor Bernardo Trujillo Calle admite igualmente la diferencia entre título en blanco y título incompleto, entendiendo por el primero el título dejado en estas condiciones de manera voluntaria y por el segundo el título al cual se le han

18. LOPERA SALAZAR, Javier. “Títulos-Valores, Teoría General 1 Especial”. Medellín: Editorial Servigráficas. 1981. Pág. 48.

19. Ibídem. Pág. 49.

dejado claros sin llenar, de manera involuntaria. Este último caso, según el autor, no está cobijado por el artículo 622 del Código de Comercio.

Como fácilmente se advierte, el tratadista citado, siguiendo la postura doctrinaria más extendida, encuentra como elemento esencial del título en blanco la voluntariedad del emitente para su integración posterior.

Como habíamos dicho al iniciar este aparte de la investigación, nos corresponde analizar ahora lo concerniente a los títulos absolutamente en blanco y su diferencia con los títulos con espacios en blanco.

El artículo 622 de nuestro actual Código de Comercio habla en su primer inciso del título al cual se le dejan espacios en blanco, y en el segundo, del papel en blanco entregado por el firmante para convertirlo en título-valor.

Basados en este artículo, algunos doctrinantes han hecho la distinción entre título con espacios en blanco y título absolutamente en blanco, siendo este último aquel en el cual su creador sólo ha estampado su firma, sin que se incluya en él ni la denominación del título que se pretende crear, ni las sumas por las cuales se obliga el suscriptor, ni la fecha en la cual se crea, o aquella en la cual se pretende hacer exigible el derecho que él contiene, etc.

A primera vista, el artículo 622 del Código de Comercio antes citado podría dar lugar a pensar que, frente a los títulos absolutamente en blanco, la norma es más exigente, por cuanto al referirse a ellos especifica que los mismos *deberán ser llenados estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello*, en tanto que, para el caso de los títulos con espacios en blanco, indica: *"podrá llenarlo conforme a las instrucciones del suscriptor"*.

De la simple lectura de la norma se observa una distinción en los términos empleados por el legislador, que podría dar lugar a un primer elemento diferencial entre el título con espacios en blanco y el título absolutamente en blanco, en cuanto a la conducta que debe ser asumida por el tenedor al completar el título.

Sin embargo, en nuestro sentir, una conclusión como la anterior refiriría con principios jurídicos fundamentales, ya que mal podríamos afirmar que en uno u otro caso se exija mayor o menor diligencia, cuidado y cumplimiento de las instrucciones, porque en todo acto jurídico las personas deben actuar con la prudencia exigida a todo aquel que se encuentre en las mismas circunstancias de hecho. Para ambos instrumentos se exige que quien pretenda llenarlos lo haga cumpliendo estrictamente con las instrucciones impartidas. No es posible

concebir una interpretación diferente del artículo 622 del Código de Comercio. Pensar que en tratándose de títulos absolutamente en blanco el tenedor debe ser “estricto”, mientras en aquellos parcialmente en blanco puede apartarse en algo de la voluntad o de las instrucciones del creador, no parece lógico. Bien por el contrario, cabe suponer que este último otorgó en mayor margen de confianza al tenedor al entregarle un título absolutamente en blanco, que al ocuparse de llenar algunos de sus requisitos, evitando que pudieran ser objeto de integración por mano ajena.

La diferencia entre los dos tipos de títulos en blanco radica en el contenido del documento. El título absolutamente en blanco está enunciado en el artículo 622 del Código de Comercio, en su inciso 2o., al decir: “Una firma puesta sobre un papel en blanco entregado por el firmante para convertirlo en título valor,...”. Es, por consiguiente, solamente un documento en blanco con la firma de una persona que quiere obligarse cambiariamente.

El título con espacios en blanco, además de la firma, requiere otros requisitos propios de los títulos-valores.

Para el doctor Trujillo Calle:

“Existe aquí una diferencia cuantitativa. El primero (títulos con espacios en blanco) supone, al menos, que se haya cubierto parcialmente con algunos elementos esenciales el título, dejando simplemente espacios libres para ser llenados con cláusulas como las del capital o los intereses, lugar de pago o fecha de vencimiento, nombre del beneficiario o del girado, etc. El segundo (título absolutamente en blanco) apenas tiene una firma, la del creador, estando a cargo del tenedor llenar lo demás, bien en un solo tiempo o en tiempos sucesivos y por un solo tenedor o por los distintos tenedores durante la circulación del título”²⁰.

En concepto del doctor Luis Javier Lopera Salazar, el artículo 622 del Código de Comercio consagra dos hipótesis: a) firma de un documento con espacios en blanco y b) firma de un papel en blanco.

En el primer evento, del texto se deduce sin lugar a dudas la vocación del instrumento para convertirse en un título-valor.

20. TRUJILLO CALLE, Bernardo. “De los Títulos-Valores”. Tomo I. Sexta edición. Bogotá: Librería Editorial El Foro de la Justicia, 1985. Pág. 356.

En el segundo caso, no existe la apariencia de título-valor, siendo por tanto multívoco en su finalidad. La intención para el autor resulta fundamental en esta hipótesis, por cuanto la ley colombiana otorga validez cambiaria a la firma puesta sobre un papel en blanco *entregado por el firmante para convertirlo en un título*.

El tratadista Luis Hello Kattah opina que la diferencia entre título en blanco y título con espacios en blanco, radica en que el primero no es un título-valor, siendo simplemente una hoja de papel firmada que puede llegar a adquirir tal calidad una vez completada. En cambio, el segundo es desde el principio un título-valor.

Para entender la posición de este autor, debe tenerse en cuenta que en su entender los únicos espacios que pueden dejarse en blanco, frente a la previsión contenida en el inciso 1o. del artículo 622 del Código de Comercio, son aquellos referidos a las menciones cuya omisión suple la ley. En este sentido, el instrumento debe reunir *ab initio* los requisitos esenciales mínimos, tanto generales como particulares, exigidos por la ley para la clase de título de que se trate, configurándose como título desde su creación.

Para ilustrar la tesis sostenida por el doctor Hello Kattah, creemos conveniente citar el aparte de su obra que hace referencia a este punto:

“Los únicos espacios que se pueden dejar en blanco en el título para ser llenados se refieren a aquellos requisitos o menciones cuya omisión suple la ley. Esta afirmación tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 620 y 622 del Código de Comercio. En efecto, el último de los artículos citados se refiere, en su inciso primero, al título (título-valor) en el que se han dejado espacios en blanco y, como es obvio, para que pueda hablarse de título-valor es necesario que contenga las menciones siguiendo los requisitos que la ley señala, salvo que ella los presuma (artículo 620)”²¹.

En nuestro criterio resulta un tanto artificial la distinción efectuada por el autor, al exigir para los títulos con espacios en blanco los requisitos del artículo 621 del Código de Comercio, además de los exigidos para cada uno de los títulos en

21. HELLO KATTAH, Luis S. “De los Títulos-Valores en General”. Editorial Lito-Estudio Bogotá, 1973. Pág. 57.

particular, por cuanto entre los dos extremos planteados existen una serie de posibilidades intermedias que hacen difícil una clasificación tan rotunda. Por lo demás, la ley no exige, al reglamentar la materia, que los títulos-valores con espacios en blanco contengan los requisitos que la ley no supla, caso en el cual podría prescindirse de la integración y no sería necesaria ésta “antes de presentar el título para el ejercicio del derecho...”, como reza la norma.

Mejor estaría dividir el problema entre documentos sin ninguna leyenda adicional a la firma y documentos con leyendas adicionales.

Además, creemos oportuna la crítica que a esta argumentación hace el doctor León Posse Arboleda, la cual expone en los siguientes términos:

“...Opinar que los únicos espacios en blanco que se pueden dejar para que el tenedor legítimo los llene posteriormente, son aquellos referentes a requisitos o menciones que la ley suple, a base de presunciones, es desvirtuar totalmente el contenido del artículo 622 del Código de Comercio, que *habla precisamente de la existencia de títulos-valores incompletos en su forma*, pero lanzados por el creador a la circulación, obligándose cambiariamente...”²².

No obstante lo anterior, creemos que el doctor Luis Hello tiene razón al sostener que un título en blanco totalmente o con espacios en blanco de aquellos que la ley no suple, no es aún título-valor, en la medida en que no cumple todos los requisitos, en función de lo previsto expresamente en el artículo 620 del Código de Comercio. Precisamente, la misma norma del artículo 622 se encarga de establecer la necesidad de que el título sea previamente completado, antes de presentarlo para el ejercicio del derecho que en él se incorpora, en la medida en que antes dicho ejercicio se hace imposible por falta de eficacia cambiaria del documento. Por consiguiente, frente al título con espacios en blanco o totalmente en blanco, de la misma manera que frente al título incompleto, estaríamos en presencia de un proyecto de título-valor, que aún no se ha concretado.

Es importante anotar, ya para finalizar el presente capítulo, que en algunos sectores de la doctrina ha hecho carrera la teoría sobre los llamados títulos incoados o empezados, consistente en que el título en blanco debe contener indicaciones claras de su vocación para convertirse en título-valor, sin lo cual no sería aplicable la norma del artículo 622 del Código de Comercio.

22. POSSE ARBOLEDA, León. “Notas sobre Títulos-Valores en el Nuevo Código de Comercio”. Tercera edición. Bogotá: Editorial Temis Librería, 1980. Pág. 42.

A este respecto, el profesor Roberto L. Mantilla Molina expresa:

“Prefiero hablar de cambial incoada y no, como es frecuente de cambial en blanco...”

...No sería posible hablar de cambial en blanco, con referencia a un papel que no lleve mención alguna que lo caracterice como título de crédito, aunque en él consten varias firmas, y quizá la mención de una cantidad de dinero, o de la persona a quien debe pagarse, etc...”

“En conclusión: para que pueda hablarse de cambial incoada debe haber un papel que contenga, por lo menos, la indicación de que se trata de una letra de cambio o de un pagaré y la firma de una persona”²³.

En nuestro concepto, la teoría expuesta no sería acorde con nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto el artículo 622 del Código de Comercio permite expresamente que un título se cree sobre un papel totalmente en blanco, con la sola firma del creador.

El doctor León Posse Arboleda, fundamentándose en el criterio expuesto por el profesor Mantilla, hace una fuerte crítica a esta disposición por considerar, según sus propias palabras, que “comprende una serie de errores, confusiones e impropiedades que sólo servirán para gloria de golillas y picapleitos”.

Así se expresa el autor:

“Pensamos que, como la anota el profesor emérito de la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Roberto L. Mantilla Molina, en su obra *Títulos de crédito cambiarios*, estamos frente a un documento cambiario incoado, como lo llama el distinguido profesor, o incoactivo como bien podría denominarse, cuando nos encontramos ante un papel que contiene, por lo menos, la indicación de que se trata de una letra de cambio o de un pagaré y la firma de una persona...”

“Por ello hemos criticado desde un principio la facultad del segundo inciso del artículo 622, que autoriza, no ya llenar los blancos de un documento, por ejemplo la letra, sino suscribir un

23. MANTILLA MOLINA, Roberto L. “Títulos de Crédito”. Segunda edición. México: Editorial Porrúa S.A., MCMLXXXIII. Págs. 133, 134 y 135.

papel en blanco para convertirlo en un título-valor. El documento así llenado, según el Código, para poderlo hacer valer contra cualquiera de los que en él han intervenido, antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con las instrucciones dadas para ello, instrucciones que no podrán oponerse al tercero de buena fe, que lo ha recibido después de completarlo un tenedor (artículo 622 del Código de Comercio)"²⁴.

Otros autores, como el doctor Bernardo Trujillo Calle, tienden a asimilar la locución "títulos incoados" o "empezados", con la de "títulos en blanco", otorgándoles la misma significación, lo cual en nuestro entender resulta innecesario frente a las expresiones adoptadas por nuestro legislador de títulos en blanco o con espacios en blanco.

3. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE LOS TITULOS EN BLANCO

3.1 Cuando hay título en blanco

Para explicar desde qué momento surge la obligación cambiaria, se han esbozado dos teorías: la teoría de la creación y la teoría de la emisión. Así, quienes defienden la teoría de la creación, afirman que la obligación cambiaria nace de la simple creación del título, es decir, de la redacción y suscripción de éste. Los que abogan por la teoría de la emisión, sostienen que, además de la creación, es necesaria la entrega del título, con la intención de obligarse y hacerlo negociable conforme a su ley de circulación. Entre nosotros se acogió la segunda teoría en el artículo 625 del Código de Comercio, norma que establece en su inciso 1o. que "toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título-valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación".

En nuestro concepto, no creemos posible utilizar las teorías reseñadas para determinar cuándo hay título-valor en blanco, por cuanto éstas explican los títulos valores completos. Si el título en blanco carece de las menciones necesarias, no es todavía título-valor, aun cuando se haya producido su emisión o

24. POSSE ARBOLEDA, León. "Notas sobre Títulos Valores en el Nuevo Código de Comercio". Tercera edición. Bogotá: Editorial Temis. Librería. Págs. 105 y 106.

entrega. Por consiguiente, nos parece forzoso concluir que el título en blanco existe desde cuando, habiéndose producido la suscripción, dejándose espacios sin completar o la totalidad del texto sin utilizar, se produce la entrega al primer beneficiario, conjuntamente con las instrucciones respectivas, así estas últimas sean de carácter verbal.

El tratadista argentino, Jorge N. Williams, refiriéndose a la letra de cambio, expresa:

“Afirmamos que existirá letra de cambio en blanco cuando el título haya sido emitido y aun haya circulado con falta o ausencia u omisión de alguno de los requisitos dispositivos. Si en la emisión y ulterior circulación la falta, ausencia u omisión recae sobre los llamados requisitos naturales no existirá letra de cambio en blanco, por cuanto dicha falta es suplida por la propia ley, salvo en un supuesto: que el librador y tomador hayan concertado un convenio de complementación sobre alguno de los requisitos naturales, en cuyo caso éste dejará de ser tal para convertirse en dispositivo por la voluntad de las partes.

“Dijimos que la falta, ausencia u omisión sólo pueden recaer sobre alguno de los requisitos dispositivos, en razón de que consideramos que éstos no pueden faltar en forma indiscriminada. Deben existir en la medida en que permitan reconocer que lo que se ha querido crear es una letra de cambio, con un obligado”²⁵.

En desarrollo de esta afirmación, el autor citado hace una interpretación que creemos oportuno reproducir aquí, dada su manifiesta claridad sobre el tema:

“Primordialmente, la temática de la letra de cambio en blanco está referida a aquel título que al momento de la creación está desprovisto de alguno o algunos de los requisitos dispositivos y naturales previstos por el artículo 1o. del Decreto-Ley 5965/63.

Teniendo en cuenta las presunciones a que alude el artículo 2o., nos enfrentamos con el problema de determinar el valor de la letra de cambio que, si bien no está materialmente completa, sus elementos faltantes se encuentran completados por la ley.

25. WILLIAMS, Jorge N. “La Letra de Cambio y el Pagaré”. Tomo I. Editorial Abeledo-Perrot S. A. Buenos Aires, 1981. Pág. 432.

Hemos dicho que los recaudos que han de enunciarse taxativamente en la letra de cambio o suplidos por la ley constituyen, unos y otros, requisitos dispositivos y naturales, ambos esenciales, ya que su presencia expresa o implícita debe existir al momento del vencimiento. Lo que sucede es que algunos de ellos deben estar expresados literalmente en el título y otros pueden faltar, omisión que la ley cubre interpretando la voluntad presunta del librador.

Las normas integrativas de la declaración cambiaria previstas en el artículo 2o., serán tales mientras a su respecto no exista convenio de integración.

En efecto, toda letra de cambio que al momento de su creación carezca de alguno de los requisitos naturales que se suplen, en el mencionado artículo 2o. deberá ser considerada como letra de cambio completa. Sin embargo, si esa letra de cambio ha sido objeto de un convenio de complementación referente a los recaudos que dicho artículo 2o. suple, deberá ser considerada como la letra de cambio en blanco. Es decir, que resulta irrelevante la integración legal si con respecto a los requisitos enunciados y suplidos por la ley existe convenio de integración.

“En consecuencia, si el convenio de integración abarca alguno o todos los casos que la ley suple en el artículo 2o. —requisitos naturales— desaparecen las presunciones legales y estamos en presencia de una letra de cambio en blanco.

Idéntica solución cabe cuando el contrato de integración prevé la inserción de cláusulas facultativas con efectos cambiarios”²⁶.

Como podemos observar, esta interpretación no contraviene en nada a nuestra legislación, y es aplicable al artículo 622 del Código de Comercio, aclarando que para el caso colombiano debe ser entendido en un sentido más amplio, esto es, considerarla no sólo para la letra de cambio en blanco, sino también para otros títulos-valores.

En este sentido, no compartimos el criterio del tratadista colombiano Luis S. Hello Kattah, al cual hicimos alusión en el capítulo anterior, por cuanto entiende

26. WILLIAMS, Jorge N. Ob. cit. Págs. 444 y 445 *ibídem*.

que los únicos espacios que pueden ser dejados en blanco en un título son aquellos referentes a los requisitos que la ley suple.

En nuestro concepto, la tesis anterior no consulta el espíritu del artículo 622 del Código de Comercio, el cual admite la emisión de títulos incompletos en su forma, con la intención por parte de su creador de hacerlos negociables conforme a su ley de circulación.

Además, cuando los espacios dejados en blanco correspondan a aquellos requisitos que la ley suple, el documento se tendrá por completo, salvo que, frente a tales requisitos exista un acuerdo de integración, caso en el cual deberá considerarse como título en blanco, habida cuenta que al haber convenio respecto de dichos requisitos dejan de ser naturales y se convierten en dispositivos, es decir, es necesaria para la eficacia cambiaria del título.

Lo anterior, por supuesto, no es predicable frente a un tenedor de buena fe exenta de culpa. Para él aun si no se completan dichos espacios, existiría incuestionablemente título-valor, dado que la literalidad del documento sería su único punto de referencia, por ser ajeno al acuerdo de complementación. Este sólo podría producir efectos entre las partes que en él intervinieron o frente a terceros que hayan derivado su situación de dichas partes y hayan sido debidamente informados del acuerdo de complementación. Sin embargo, mientras no se demuestre su vinculación a dicho acuerdo, aún ellos estarían cubiertos por la literalidad del título y por las normas supletivas de la ley.

Por lo demás, en estricto rigor, mientras existan espacios en blanco, de los requeridos por la ley, no podrá hablarse de títulos-valores, toda vez que la regla de derecho positivo terminantemente establece que éstos deben contener todos los requisitos exigidos, a falta de lo cual no merecen la calificación correspondiente (artículo 620 del Código de Comercio).

De manera pues que, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 622 del Código de Comercio), podemos decir que existirá título en blanco cuando se cumplan los siguientes presupuestos:

1. Existencia de una firma dada cambiariamente.
2. Los espacios en blanco deben corresponder a requisitos dispositivos de los títulos-valores, o sea, a aquéllos que estando ausentes, la ley no suple: o corresponder a requisitos naturales, por ejemplo el establecido en el artículo 621, inciso 3o., del Código de Comercio, que se refiere al lugar de cumplimiento de la

obligación, siempre y cuando exista convenio de complemento entre el librador y el tenedor.

3. Entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a su ley de circulación.

3.2 Requisitos mínimos del título en blanco

Para desarrollar este punto, haremos un recuento de la forma como se regula este aspecto en el derecho positivo extranjero.

Las legislaciones de Argentina e Italia se ocupan tan sólo de lo referente a la letra en blanco. Estas legislaciones están inspiradas en la ley uniforme de Ginebra, especialmente en su artículo 10. Los conceptos italianos son de recibo en la doctrina argentina y, por tal motivo, nos referiremos a ello indistintamente.

En la legislación argentina, la letra en blanco está regulada por el artículo 11 de su ley cambiaria. Williams, citando a Ascarelli, considera que para que se dé la completividad de la letra en blanco es necesaria, como mínimo, una firma válida, sea del emitente o del librador o bien de un aceptante o endosante, puesta en el documento, para ser posteriormente completada con todos los requisitos cambiarios. A esta altura podemos considerar que no existe mayor diferencia respecto de nuestra legislación, como veremos más adelante. Dice el autor referido que, además de la firma en las condiciones anotadas, debe partirse también de la identificación del instrumento con algunos requisitos dispositivos al momento de su creación, bastando que tal documento constituya un formulario con la "cláusula a la orden" o la expresión "letra de cambio" y la firma precitada.

En relación con esto último, Messineo considera que:

"La letra en blanco, comporta una gradación por la cual el caso límite, es aquél en que el módulo cambiario lleva sólo la firma del librador y la denominación de "cambial" (sin lo cual, faltaría el núcleo de la futura letra completa)"²⁷.

Este autor cree que no sólo se requiere la firma del suscriptor o emitente, sino que además ésta debe estar impresa en un documento que manifieste la calidad

27. MESSINEO, Francesco. "Manual de Derecho Civil Comercial". Tomo VI, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa América, 1971. Pág. 318.

de letra de cambio. Williams, por su parte, considera que para que exista la letra de cambio en blanco es necesario que ésta contenga los siguientes requisitos:

1.) La fecha, 2.) La expresión "Letra de cambio" o la "cláusula a la orden"; 3.) El nombre del girado y 4.) La firma del librador".

Considera el autor que la fecha es un requisito dispositivo o esencial para determinar la capacidad del librador. Se refiere a que, en la fecha en que se firmó el título, el librador debió ser capaz jurídicamente, pues es a partir de aquélla cuando se determina la capacidad de acuerdo con lo establecido por la ley; es importante para determinar la norma que rige a la letra, en caso de que se presente un cambio de legislación. La fecha es también significativa para determinar el momento en el cual vence la obligación; valiosa para establecer la caducidad, cuestión que no sería aplicable en nuestro medio, ya que el artículo 622 no establece término perentorio para completar el título. En nuestro caso podría ser fundamental para determinar la prescripción del título en blanco.

En cuanto al segundo requisito, manifiesta que es indispensable para distinguir la letra en blanco de cualquier otro documento del mismo género.

El tercer requisito lo exige, en razón a que la ausencia del nombre del girado en la legislación argentina convierte a un documento tal en un simple pagaré, por lo cual se hace necesaria la existencia de un girado, eventual aceptante o no de la letra. Entre nosotros, nada se opone a que tal mención aparezca en blanco.

En cuanto a la firma, ésta resulta imprescindible, ya que de ella se deriva la eficacia de la obligación cambiaria.

Vista la anterior opinión, veamos qué exigencias dispone la legislación mexicana, la cual en concepto de algunos de sus doctrinantes no contiene una normatividad afortunada en esta materia.

El eminente jurista Roberto L. Mantilla, en su obra *Títulos de Crédito Cambiario*, considera:

"Para que pueda hablarse de una cambial incoada, debe haber un papel que contenga por lo menos la indicación de que se trata de una letra de cambio o de un pagaré, y la firma de una persona"²⁸.

28. MANTILLA MOLINA, Roberto L. "Títulos de Crédito Cambiario". México: Editorial Porrúa, 1977. Pág. 144.

Para el autor citado el elemento primordial es la firma, ya que su ausencia, así se contengan todos los demás elementos de un título, no le permite al documento así emitido llegar a constituirse en título-valor completo. Además, es necesaria la indicación de la clase de título que debe crearse, por cuanto su denominación es la manifestación externa de que la firma ha sido dada cambiariamente. Considera el autor que es erróneo hablar de letra o de pagaré incoado respecto de un papel que no tenga tal apariencia.

Tomando una posición menos rígida que la del profesor Mantilla, el también autor mexicano Felipe de J. Tena, en su obra *Títulos de Crédito*, afirma que como requisito mínimo se requiere solamente una firma, exponiendo así su teoría:

“La letra es en blanco cualquiera que sea el número e importancia de los requisitos omitidos. El mínimo exigido es una firma cambiariamente utilizable. La firma del emitente, verbigracia vale. En consecuencia la omisión del nombre del beneficiario no le quita al título su calidad de título en blanco, siendo por lo mismo un error sostener que tal omisión hace de él un título al portador. Desde ese mínimo hasta el total completamiento de la letra, puede existir el número de menciones que se quiera. Más, para el derecho ello es irrelevante, como lo es también la importancia de dichas menciones. Cualquier distinción en este respecto no tendría razón de ser, pues por el solo hecho de ser aquellas igualmente esenciales para la existencia de la letra (y no ser de las que la ley presume expresamente), tienen para el derecho idéntica importancia (artículo 14). De lo que el derecho no puede prescindir, es la firma del emitente del título y no porque sea más esencial que la denominación de letra de cambio, pongamos por ejemplo, sino porque la esencialidad del primer requisito no proviene sólo de la voluntad del legislador, injustificable para muchos, sino que deriva de razones que, por la intrínseca naturaleza de las cosas, están por encima de la voluntad de aquél, de tal suerte que no podemos imaginarnos la existencia de una letra de cambio sin la firma del girador o de la persona que lo suscriba a su ruego o en su nombre”²⁹.

Pasando ya a nuestro sistema jurídico-cambiario, encontramos que existe coincidencia con la posición asumida por el autor mexicano Tena. La forma como

29. TENA, Felipe de J. “Títulos de Crédito”. Tercera edición. Editorial Porrúa S. A., México, 1956. Págs. 183 y 184.

está redactado el inciso 2o. del artículo 622, da a entender que una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en título, da al tenedor el derecho de llenarlo. De la lectura de esta norma, se infiere en forma clara y precisa cuál es el mínimo de requisitos formales necesarios para la existencia de un título en blanco. Es así como se puede afirmar que en Colombia sólo se requiere una firma puesta sobre un papel, para que de éste pueda nacer posteriormente un título-valor en toda la extensión de la palabra. La intención del firmante al entregar el documento ("para convertirlo en un título-valor") no parece que deba constar expresamente en el título, bastando que forme parte de las instrucciones que no requieren un elemento formal.

En este sentido, el doctor Gilberto Peña Castrillón afirma que:

"Todos los sistemas cambiarios y todas las legislaciones exigen la firma del girador como requisito imprescindible de cualquier título-valor, que no puede admitir presunción bajo ninguna modalidad y cuya función es explicitar el acto jurídico unilateral en el que se origina la obligación cambiaria"³⁰.

Así mismo, el doctor Eugenio Sanín Echeverry asevera que "todo menos la firma puede entregarse en blanco"³¹.

La exigencia de la firma como requisito mínimo, proviene de la Ley 46 de 1923.

En efecto, el inciso segundo del artículo 622 del Código de Comercio constituye un rezago del artículo 18 de la Ley 46 de 1923, que decía: "Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en instrumento negociable da al poseedor el derecho de llenarlo". Como se aprecia, el inciso 2o. del artículo 622 del actual Código de Comercio, es una copia con pequeñas variaciones del citado artículo 18.

Algunos de nuestros doctrinantes han entendido que la firma, como requisito mínimo para la existencia del título en blanco, no es suficiente. En su opinión,

30. PEÑA CASTRILLÓN, Gilberto. "De los Títulos-Valores en General y de la Letra de Cambio en Particular". Bogotá: Editorial Temis Librería, 1981. Pág. 81.

31. SANÍN ECHEVERRY, Eugenio. "Títulos-Valores". Segunda edición. Medellín: Editorial Granamericana. 1975. Pág. 86.

para poder hablar de título en blanco, es necesario que el documento sobre el cual se ha estampado la firma tenga, además, la apariencia del título valor que se pretende crear.

Comparte esta teoría, el doctor Eugenio Sanín Echeverry, quien opina lo siguiente:

“Al hablar de "espacios en blanco" en el título se sugiere que él debe tener alguna forma que lo muestre como un título-valor, como podría ser uno de los esqueletos usados para letras, cheques, etc.”³².

En nuestro entender, el artículo 622 del Código de Comercio se opone a la tesis transcrita, en la medida en que admite una firma puesta sobre un papel “en blanco”, es decir sin ninguna anotación distinta.

Otros tratadistas nacionales, como el doctor Hildebrando Leal Pérez, exigen una serie de requisitos adicionales a la firma, para la configuración del título en blanco. Así se expresa el doctor Leal Pérez:

“El artículo 622 es suficientemente claro al referirse a un título ya existente, en el cual consta el derecho en él incorporado y la firma de quien lo crea (artículo 621), requisitos mínimos para su existencia, cuyos demás espacios en blanco pueden llenarse a efectos de servir como medio de prueba.

Es exigencia insustituible, a más de la firma, la expresión de la cuantía, sin los cuales el título carece de existencia, en un papel cualquiera, no cobijado por el ámbito del impuesto de timbre”³³.

A pesar del artículo 621 del Estatuto Mercantil, no creemos que sea requisito indispensable para la existencia del título en blanco la mención del derecho que en el título se incorpora, toda vez que tal interpretación no consulta el verdadero espíritu del artículo 622 del Código de Comercio, que al permitir espacios en blanco hace posible que ciertos elementos, todavía indeterminados, puedan precisarse con posterioridad a la emisión, e incluso circular así, todo en aras de

32. SANIN ECHEVERRY, Eugenio. Op. cit. Pág. 86.

33. LEAL PEREZ, Hildebrando. “Curso de Títulos Valores”. Tomo II. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá, 1989. Pág. 525.

facilitar las relaciones de comercio. Por demás, el artículo citado, como antes anotábamos, sólo exige como requisito mínimo una firma dada cambiariamente.

Nos resta por dilucidar qué títulos pueden crearse en blanco. Aunque la norma que nos gobierna en el tema propuesto se encuentra en la parte general del Código, la mayoría de los autores nacionales entienden que los únicos instrumentos que pueden emitirse en blanco son aquellos de contenido crediticio, negando esta posibilidad para los corporativos y los representativos de mercancías.

Sin embargo, ninguno de estos tratadistas fundamenta jurídicamente tal afirmación.

Eugenio Sanín Echeverry, para sustentar esta tesis, expone argumentos de índole puramente práctica, que en nuestro criterio no son suficientes para llegar a esta conclusión. Así se expresa el autor:

"Este artículo está en la parte general, aplicable a todos los títulos-valores, pero no parece que pueda entenderse un título incoado de los que por ley expresa o por costumbre sólo se crean impresos, en serie o en formatos especiales de las entidades suscriptoras, y menos en un papel cualquiera. Una emisión de bonos o de acciones está siempre en títulos seriales de un contenido previsto. No concebimos una sociedad entregando un papel firmado para que un tenedor llene en él el número de acciones, la denominación de la sociedad, su domicilio, la escritura de constitución y las demás menciones del artículo 401 del Código de Comercio. Ni creemos que unos almacenes generales de depósito entreguen un papel con una firma y en que falten la designación del almacén, del lugar del depósito, la fecha, la descripción de la mercancía, las tarifas y demás menciones del artículo 759 del Código.

Para no llegar a estos absurdos admitimos la doctrina mexicana que en igual circunstancia interpreta la ley en el sentido de que sólo se refiere ésta a documentos en blanco de los que tienen aceptación o prestación en dinero, y nunca a los de participación o representativos de mercancías"³⁴.

34. SANIN ECHEVERRY, Eugenio. "Títulos-Valores". Segunda edición. Medellín: Editorial Granamericana, 1975. Págs. 86 y 87.

Sobre este particular, no cabe duda de que la norma del artículo 622 no establece ninguna distinción. Por ende, la afirmación de que este precepto sólo es aplicable a los títulos de contenido crediticio, en nuestro entender, contraviene la regla de hermenéutica jurídica según la cual “cuando la ley no distingue no le es dable al intérprete distinguir”. Ciertamente, es inusual que se presenten en la práctica mercantil títulos corporativos o representativos de mercancías emitidos en blanco, lo cual no implica que tal circunstancia no sea admitida jurídicamente.

La cuestión suscitada por el doctor Sanín Echeverry, mejor que referida al contenido del derecho incorporado, vendría a cuento respecto de la clasificación de los títulos-valores en seriales y unitarios, según su forma de emisión. En efecto, respecto de los primeros, cabría la inquietud doctrinal tendiente a proponer un recorte a los alcances del artículo 622 que, repetimos, en todo caso no establece distinciones.

4. VALIDEZ DE LOS TÍTULOS EN BLANCO

La institución de los títulos en blanco en nuestro medio jurídico está plenamente aceptada y provista de validez legal. Desde la Ley 46 de 1923, en el artículo 18, se previó esta institución y, posteriormente, fue consagrada en el artículo 622 del actual Código de Comercio. En efecto, nuestro legislador encontró la necesidad de tipificar en la ley la institución a la cual nos venimos refiriendo, por dos razones fundamentales: a) Necesidad de proteger a los terceros tenedores de buena fe, que por no ser conocedores de las circunstancias que rodean la creación del documento, no tienen por qué soportar las consecuencias de la misma. b) Por prestar estos documentos una utilidad práctica indiscutible en el mundo de los negocios, en el cual se observa el uso cada vez más frecuente de los títulos en blanco.

Estos, según lo anota el doctor Bernardo Trujillo Calle, “son otra excepción al formalismo que preside la elaboración de los títulos-valores (artículos 620, 621)”³⁵.

En nuestro entender, los títulos en blanco no son propiamente una excepción al formalismo cambiario, toda vez que no revisten la calidad del título-valor hasta tanto no den cumplimiento a dicho formalismo.

35. TRUJILLO CALLE, Bernardo. “De los Títulos-Valores”. Sexta edición. Bogotá: Librería Editorial El Foro de la Justicia, 1985. Pág. 346.

En los títulos-valores deben distinguirse dos momentos distintos en el tiempo: la emisión, y la presentación para el ejercicio del derecho incorporado en el mismo. Es en este último momento, en el cual el documento debe cumplir el formalismo y con los requisitos exigidos por la ley. Pero antes de tal instante, el título en blanco es apto para ser completado, en cuanto exista un pacto o la autorización para llenar los vacíos en él contenidos.

El artículo 622 del Código de Comercio, exige que el título contenga todos los requisitos formales en el momento de presentarlo para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. De su texto no se puede colegir que el documento en blanco valga como título-valor antes de ser completado. Por ende, mal podría decirse que la institución de los títulos en blanco riñe con el formalismo cambiario.

Con gran acierto Felipe de J. Tena, refiriéndose a la letra de cambio en blanco, sostiene que, quienes se resisten a admitir que la cambial en blanco circule como la letra completa, por carecer de alguno o algunos de los requisitos esenciales, constitutivos de su substancia, no se han percatado que una cosa es la forma y otra el momento en que ésta debe ser observada. El mismo autor, para explicitar su posición, cita a Whitaker, quien afirma:

“No se dice que pueda existir la letra de cambio sin los requisitos cambiarios; se dice únicamente que la época en que tales requisitos deben ser mencionados en el título es indiferente para su validez formal, si éste se presenta completo al tiempo de reclamarse su aceptación o su pago”³⁶.

Y es que no otra puede ser la solución, la cual compartimos, habida consideración del espíritu que informa a la institución de los títulos-valores en blanco, a más de que nuestra reglamentación legal es perfectamente clara a este respecto, al exigir en la parte final del inciso 1o. del artículo 622 que el proceso de integración se cumpla “antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora”.

Los títulos en blanco tienen existencia y validez reconocida por ministerio de la ley, aun después de la muerte del suscriptor. Ante tal evento, el tenedor no pierde la facultad de llenar el título, pues ese derecho ingresa irrevocablemente en su patrimonio desde el momento en que el título le es entregado.

36. TENA, Felipe de J. “Títulos de Crédito”. Tercera Edición. México: Editorial Porrúa S. A., 1956. Pág. 182.

Esta apreciación resulta todavía más evidente, en la medida en que se acepte la teoría del mandato o una situación similar, para explicar la conducta de quien llena un título en blanco siguiendo instrucciones recibidas, por cuanto según el texto del artículo 1.284 del Código de Comercio, “el mandato conferido también en interés del mandatario (en este caso del tenedor que completa el contenido del título en el cual se documentan sus derechos) no terminará por la muerte o la inhabilitación del mandante”.

Es de anotar que nuestros tribunales superiores, en distintos fallos, se han pronunciado en favor de la validez de los títulos en blanco, como explicaremos en detalle más adelante.

Los títulos en blanco constituyen una evolución en el Derecho, en la medida en que la ley al admitir esta institución reconoce la gran facilidad y celeridad que ofrece la utilización de tales instrumentos para la vida del comercio, siendo tal vez la más importante la de servir como documentación de un crédito aún no existente.

Respecto de las legislaciones de otros países, que admiten la validez de la institución de títulos en blanco, se destacan las de Italia, Francia, Inglaterra, Argentina, México, EE.UU. y Perú, entre otras. Pero así como no pocos estados le reconocen plena validez a la institución, hay algunos en los cuales se ha llegado a negarles existencia y validez en forma absoluta, hasta tal punto que la prohíben expresamente, como es el caso de Suecia, Noruega, Dinamarca y Holanda. En nuestro sentir, aunque respetamos la posición asumida por estos países, no la compartimos, toda vez que directamente están atentado contra los fines que son propios de los títulos-valores, bien conocidos por todos nosotros.

Entre las legislaciones que dotan de plena validez a los títulos-valores en blanco, vale la pena hacer especial mención de la italiana, propugnadora de la letra de cambio en blanco. En efecto, César Vivante, uno de los máximos exponentes de la doctrina italiana al efecto, dice:

“La institución de la letra de cambio en blanco, hoy reconocida legalmente por la Ley de 31 de Diciembre de 1907, anexo C, artículo 2o., era reconocida desde hace largo tiempo por la doctrina y por la jurisprudencia, aunque el Código de Comercio no la mencionase. La legitimidad de la cambial en blanco es la defensa necesaria de la letra de cambio regular; sin el reconocimiento de la letra de cambio en blanco la circulación de la cambial regular estaría expuesta a continuas perturbaciones y la ejecución forzosa

resultaría una sanción irrisoria frente a las excepciones de los deudores”³⁷.

Hoy día el artículo 14 de la ley cambiaria italiana regula la materia.

Por su parte, los argentinos otorgan validez a las letras emitidas en blanco, y su legislación, así como sus doctrinantes, tienen una marcada influencia italiana. La norma pertinente del sistema argentino es el artículo 11 del Código de Comercio. A propósito de lo que venimos tratando, el doctrinante argentino, Jorge N. Williams, observa:

“Con lo expresado queda dicho que si bien el único caso de letra de cambio en blanco expresamente previsto por el Código de Comercio estaba referido al nombre del beneficiario (artículo 599, inciso 4o.), doctrinal y jurisprudencialmente se la había reconocido aun para supuestos no determinados taxativamente por la ley”³⁸.

Finalmente, en el caso de México, el artículo que gobierna la institución es el 15 del estatuto cambiario. Felipe de J. Tena, uno de sus más connotados doctrinantes, en punto a lo que nos ocupa, expresa:

“En México, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia ha reconocido en reciente ejecutoria la validez de la letra de cambio en blanco”³⁹.

5. FUNDAMENTO JURIDICO EN VIRTUD DEL CUAL EL TENEDOR TIENE EL DERECHO DE LLENAR EL TITULO EN BLANCO

5.1 Teoría del mandato

Esta teoría fue una de las más aceptadas durante largo tiempo, siendo defendida en sus comienzos por los autores italianos Sorani, Longo, Modica y Bolchini, quienes la veían como una explicación del problema que nos ocupa.

37. VIVANTE, César. “Tratado de Derecho Comercial”. VIII. Primera edición. Madrid: Editorial Reus (S.A.). 1936. Pág. 272.

38. WILLIAMS, Jorge N. Op. cit. Págs. 431 y 432.

39. TENA, Felipe de J. Op. cit. Pág. 186.

“Un punto indiscutido —señala Sorani— es que la ley no exige unidad en la formación de la letra. Como bien lo señala Bolafio, la ley no ha dicho en ninguna parte que la letra deba entregarse completa al acreedor”.

Más adelante continúa diciendo el autor:

“De ello se concluye, forzosamente, que como puede ser redactada, íntegramente por el suscriptor, puede delegarse a un tercero escribir el cuerpo, antes o después que el librador haya firmado, así podrá ser escrita de puño y letra del tomador tanto antes, como después de haberse firmado por el emitente. “Hay que reconocer —agrega— en la letra de cambio en blanco, un *mandato contractual*, tácito, ilimitado y presunto, dado por el librador al tomador para integrar el cuerpo de la letra. Esto en términos generales: no cesarán de aplicarse las reglas que gobiernan el mandato, tanto cuando el tomador de la letra sea el mismo consignatario, como cuando sea un tercero y la entrega del título se encuentre sujeta a condiciones o se indiquen los términos según los cuales se debe completar el título. Si han existido acuerdos, la integración de la letra deberá conformarse a los pactos; en caso de no existir tales convenios la voluntad del consignatario será arbitrio absoluto en la fijación de los términos necesarios para la validez formal de la letra, y no podemos comprender en qué consisten los temores o la temida ilegalidad de los que sostienen lo contrario”⁴⁰.

Posteriormente, al investigar la circunscripción dentro de la cual debe moverse el campo de las concesiones, para que no exista un exceso en los límites del mandato, dice:

“El mandato inherente a la entrega de un título en blanco se encuentra exclusivamente en las relaciones del emitente y del consignatario y se extingue en manos de éste, de manera que la complementación de la letra (ejecución del mandato) debe producirse cuando el tomador pretende usarla en el comercio, porque no puede suponerse circulación cambiaria sin una letra verdadera y completa; porque los acuerdos entre librador y consignatario son siempre extraños a los terceros poseedores;

40. SORANI citado por: WILLIAMS, Jorge N. Op. cit. Pág. 451.

contra los cuales no podrían oponerse jamás las excepciones que pudiesen corresponder al emitente contra el consignatario directo, sea por abuso de firma en blanco, sea por cualquier otra causa”⁴¹.

Bolchini, otro de los defensores de la teoría del mandato, para evadir la crítica de que para el caso del título en blanco se encuentra un mandato en interés del propio mandatario, concibe la existencia de un triple pacto que afecta la relación fundamental de la cual surge la letra en blanco:

Primero, un pacto por medio del cual el deudor otorga al acreedor la especificación de algunos datos concernientes a la ejecución de la obligación (lugar, época, etc.); segundo, un pacto por el cual el deudor se obliga a completar el texto del título en la forma prevista por el acreedor en virtud del pacto anterior, y tercero, un pacto por medio del cual el mismo acreedor es requerido por su deudor para que se ejecute la obligación.

Por otra parte, afirma Bolchini, haberse otorgado al acreedor la facultad de completar el título, estando éste en blanco, constituye un acto que facilita el cumplimiento del negocio y la realización de los fines queridos por las partes, no siendo extraño a la voluntad de ellas, ya que se presume que están interesadas “*negotium valeat*”.

Continúa Bolchini especificando las consecuencias que traería la aplicación de la teoría del mandato, de la siguiente manera:

“La no cesibilidad de la letra en blanco como tal; la revocabilidad del mandato; la no integración del título (por la cifra) en caso de muerte, quiebra, incapacidad del deudor o el acreedor; la prescripción extintiva en la forma ordinaria de la relación fundamental y que se inicia desde la fecha de ésta, salvo los efectos interruptivos de la integración en cuanto ésta, teniendo lugar en nombre y por cuenta del deudor puede significar un reconocimiento de la obligación”⁴².

A esta teoría se han opuesto varios autores y ha sido objeto de diversas críticas a saber:

41. Ibídem, pág. 452.

42. BOLCHINI, citado por: WILLIAMS, Jorge N. Op. cit. Pág. 453.

1. La primera crítica que se hace frente a esta teoría consiste en que, en tratándose de letra de cambio en blanco, no puede afirmarse que el tomador es mandatario del suscriptor, por cuanto el primero obra en su propio nombre y por cuenta propia.

En este sentido, al decir de Vivante:

“No se puede calificar el tomador como mandatario del suscriptor en blanco, porque el tomador, al cubrir la letra, lo hace en su propio nombre, obró por cuenta propia en defensa del propio interés, y razona contra la realidad de las cosas quien hace surgir una relación de confianza, cual es el mandato, de intereses de ordinario tan opuestos, como son los del dador y del tomador cambiario”⁴³.

2. El mandato, una vez aceptado, impone la obligación de cumplirlo. En cambio, en el evento del título en blanco, no existe obligación alguna por parte del tomador de llenar los claros, ya que éste adquiere más bien una facultad, de la cual puede o no hacer uso.

3. Así mismo, el mandato termina por la muerte o quiebra del mandante o del mandatario. Entretanto, la facultad del tenedor legítimo de llenar el título no se extingue por estos hechos.

4. El mandato es concluido siempre en interés del mandante. Por el contrario, en el caso objeto de estudio, lo sería en beneficio del mandatario, a quien conviene llenar el título, facultad que por demás no constituye una obligación a su cargo.

Las objeciones anteriores no tendrían fuerza frente a nuestro derecho comercial, que admite expresamente el mandato irrevocable; la posibilidad de que éste se otorgue también en interés del mandante (artículo 1279); que el mandato pueda sobrevivir al mandante (artículo 1284). También, parece posible afirmar que si el mandato puede otorgarse en interés compuesto de mandante y de mandatario, corresponde a este último determinar si hace uso o no de esta facultad, atendiendo los intereses vinculados a ella.

5.2 Teoría que supone que se ha conferido un poder al tomador

Teoría sostenida, principalmente, por Cosack Endemann, Siegely y Lehmann, quienes afirman que se confiere un poder al tomador, quien queda facultado para

43. VIVANTE, César. "Tratados de Derecho Mercantil". Volumen III. Madrid: Editorial Reus, 1932. Pág. 276.

integrar el título, representando de esta forma al librador en la formación final del instrumento, para presentarlo completo antes de su pago o aceptación. Esta constituye, según Williams, una variante de la doctrina del mandato.

La crítica la hacen Lescot y Roblot, quienes afirman:

“O bien los poderes conferidos al tomador se asemejarían a los del mandatario y serían como ellos, limitados, incesibles y revocables y la teoría sería susceptible de las mismas críticas que la del mandato, o bien se trata de un poder especial, irrevocable, ilimitado, cesible a un tercero y transmisible a los herederos, gozando el tomador o la persona que lo sustituya del derecho de obligar cambiariamente al librador respecto de terceros, aun cuando no cumpla con las indicaciones o instrucciones que le han sido dadas, pero en este caso más vale confesar que el deudor se encuentra obligado unilateralmente por la colocación de su firma en un título en blanco y así nos colocamos en el sistema de la obligación por declaración unilateral”⁴⁴.

Rocco, por su lado, fundamenta su crítica de la siguiente forma:

1. ¿Este otorgamiento de poderes a qué negocio se encontraría vinculado?, ¿cómo se explica la irrevocabilidad?
2. En la relación de representación la declaración de voluntad debe ser emitida en nombre del representado y no en nombre del representante, mientras que en el caso de la letra en blanco, el tomador que la llena no obra como representante, sino que desarrolla una voluntad propia.

Caben aquí las mismas observaciones hechas a la teoría del mandato, de la cual ésta del poder no es diferente.

5.3 Teoría que considera al título en blanco como un negocio cambiario bajo condición suspensiva

Esta tesis, defendida por Lehmann, Grünhut, Rodino y Staub-Stranz, sostiene que quien crea un título en blanco adquiere una obligación, condicionada a la circunstancia de que el título sea complementado según los acuerdos, de tal

44. LESCOT y ROBLOT. Citados por: WILLIAMS, Jorge N. Op. cit. Pág. 454.

orma que, cuando se da tal hecho, la obligación se retrotrae, es decir, la obligación cambiaria se debe considerar como conocida desde el momento de la emisión del título en blanco y válida desde tal día respecto de todas las personas que intervinieron en su emisión y circulación.

Esta teoría ha sido fuertemente criticada. Por un lado, se dice que es requisito indispensable en los títulos-valores que sean instrumentos incondicionales, y no puede hablarse de condiciones en la medida en que ellas se refieran a elementos o requisitos esenciales de los títulos.

Respecto de esta objeción, en nuestro parecer no se trata de un condicionamiento que afecte las obligaciones incorporadas en el título. La condición se refiere al negocio jurídico causal y no a su posterior reflejo en el título.

También se afirma que la condición como modalidad en las obligaciones sólo puede afectar un acto jurídicamente perfecto y en razón a esto se le atribuye la facultad de retrotraerse en el tiempo. Para el caso de la letra en blanco, mientras ésta está incompleta, no es considerada como jurídicamente perfecta, o sea, no es título-valor, sino un embrión de título.

Por último, se critica que en este evento se estaría frente a una condición potestativa, cuya realización depende exclusivamente de la voluntad del acreedor, la cual es considerada nula.

5.4 Teoría del hecho ilícito

Esta teoría, sostenida principalmente por Thaller, es aquella en virtud de la cual el librador queda obligado, en razón a la responsabilidad en que incurre por haber puesto en circulación un título incompleto. Por este hecho el emisor se compromete y debe responder por todos los efectos jurídicos que se llegaren a presentar como consecuencia de su acto riesgoso.

Las críticas más frecuentes que se hacen a esta teoría son las siguientes:

- a) No justifica la obligación cambiaria del firmante respecto del primer tomador, cuando éste no viola ningún derecho y no participa en el hecho ilícito.
- b) Porque, respecto de terceros, cuando se causa un daño por un hecho ilícito, éste genera una obligación de reparar y no obligaciones cambiarias, derivadas no del daño producido, sino del texto del título.

5.5 Teoría del contrato preliminar

La teoría del contrato preliminar, sostenida por Staub, Giannini, Rocco, Bruschetti y Messineo, se refiere a que el derecho que el tomador tiene de integrar el título en blanco deriva de un contrato preliminar, existente entre signatario y tomador, cuyo objeto se traduce en una declaración escrita de voluntad de un contenido determinado, para cuya ejecución, quien se ha obligado a emitir la declaración, en lugar de formularla completamente, se limita a firmar y entregar un documento en blanco, dejando al tomador la facultad de integrarlo, facultad que se convierte en un derecho irrevocable en el momento de su entrega.

En este sentido, Williams expresa lo siguiente:

“El firmante del módulo firmado en blanco se ha obligado, mediante un contrato preliminar, a entregar al adquiriente una letra, de manera que la firma de aquél y su entrega, constituyen una ejecución de tal contrato. El tomador tiene en consecuencia un derecho a integrar la letra de acuerdo con los convenios existentes, derecho que se vuelve irrevocable con la entrega de la letra al acreedor. El derecho de integración se funda en el contrato preliminar según el cual el firmante se obliga a emitir a favor del tomador una declaración cambiaria”⁴⁵.

5.6 Teoría de la declaración unilateral de voluntad

Sostenida por Bonelli y Mossa, es explicada por Williams de la siguiente manera:

“La simple suscripción de la letra significa una apropiación anticipada del contenido cambiario, esta suscripción constituye al mismo tiempo el fundamento de la obligación cambiaria del librador y el fundamento del derecho de integrar el título; derecho que es inherente a él, puede nacer y vive en él, como título constitutivo que es, sin tener que buscar el fundamento en el negocio cambiario o de emisión”⁴⁶.

45. WILLIAMS, Jorge N. Op. cit. Págs. 456 y 457.

Para Mossa, según Williams, “La firma puede apropiarse anticipadamente la escritura que se insertará en el texto, que mientras tanto se crea en blanco. La letra en blanco es título imperfecto, pero perfectible con la inserción del texto. Hasta que no haya nacido la letra perfecta, el título tiene fuerza cambiaria por su sola firma, pero la voluntad cambiaria debe manifestarse y estar impresa en el título”⁴⁷.

Estos autores no hacen ninguna distinción entre letra en blanco y letra incompleta, lo cual observamos cuando dice Bonelli: “quien tiene una letra incompleta puede reparar la omisión completándola; el firmante no puede sustraerse a la obligación cambiaria si no tiene una excepción personal contra quien acciona”⁴⁸.

La crítica de esta teoría hecha por Lescot y Roblot, se resume así:

“Con estos razonamientos se está obligado a reconocer que hasta que la letra no sea completada y contenga todas las enunciaciones legales obligatorias, la declaración de voluntad no existe todavía.

Un documento revestido, con la sola firma del emitente y en el cual falta una o varias de las enunciaciones impuestas por la ley, no podría por sí solo, conferir a su poseedor un derecho, aun virtual, de naturaleza cambiaria. No se concibe una obligación por declaración unilateral de voluntad sin una manifestación exterior, formal e irrevocable de la voluntad de quien se obliga”⁴⁹.

5.7 Teoría ex-título

Sostenida por Angeloni y Navarro Irvine, quienes afirman que el derecho a completar la letra en blanco es un derecho patrimonial que se deriva directamente del título y que circula junto con él, de tal manera que al ser transferido se

46. WILLIAMS, Jorge N. Op. cit. Pág. 458.

47. Idem.

48. BONELLI, citado por: WILLIAMS, Jorge N. Op. cit. Pág. 458.

49. LESCOT y ROBLOT. Citados por: WILLIAMS, Jorge N. Op. cit. Pág. 459.

incorpora irrevocablemente en el patrimonio del tomador y de los sucesivos poseedores. Sin embargo, este derecho proviene del título sólo en cuanto a su existencia y no en lo que respecta a los límites de su contenido y duración.

Según lo antes expuesto, quien adquiere un título en blanco no podrá llenarlo a su acomodo, sino que deberá atenerse a los límites previstos para su integración. En caso contrario, la letra se habrá completado de manera ineficaz, o cuando menos quien así obró quedará sujeto a la excepción de haber adquirido el título con culpa grave.

5.8 Teoría mixta

Teoría expuesta por Lescot y Roblot, autores que fundamentan la facultad de integración del título en blanco, como bien lo dice Williams, en una forma muy "casuística". Es así como estos doctrinantes establecen una serie de situaciones concretas y específicas y dan una respuesta o solución a cada una de ellas, de acuerdo con el comportamiento del tomador o poseedor; si es de buena o mala fe; si tuvo conocimiento o no de las instrucciones; si se observaron o no las instrucciones; etc.

Después de su análisis consideran que la letra, una vez haya sido regularizada y complementada, tiene validez como letra completa desde el principio, o sea desde su emisión.

5.9 Teoría de los derechos potestativos constitutivos

Esta teoría es expuesta por Bruno Quijano, para quien el acto por medio del cual se integra el título en blanco es un negocio jurídico unilateral, a través del cual se ejerce el derecho potestativo de completar el título.

Este autor explica el derecho potestativo como aquél que confiere a una persona el poder para producir, con su sola voluntad, un efecto jurídico. Como su nombre lo indica, este derecho es constitutivo, porque constituye derechos.

5.10 Teoría del portador de buena fe de una cosa mueble

Expuesta por el doctor Eduardo Williams, quien afirma que existe un contrato originario, celebrado entre el librador y el primer tomador, que puede conferir a este último el derecho de designar al beneficiario, transmitiendo en este caso la facultad de integrar la letra cuando circula por varias manos, sin necesidad de

endoso alguno, siendo al último tenedor a quien corresponde perfeccionar el documento, insertando su nombre para hacer efectivo el crédito, invocando para ello su carácter de portador, de propietario o poseedor de buena fe de una cosa mueble.

5.11 Teoría del contrato de integración

La teoría del contrato de integración es, indudablemente, una de las más aceptadas en Latinoamérica, siendo acogida por diversos autores, tales como Tena, J. N. Williams, Bonfanti y Garrone, etc., quienes hablan de una convención de cobertura. Así mismo es defendida por los tratadistas italianos Brunetti, Salandra, Ferrara y Bracco.

En opinión de quienes acogen esta tesis, el fundamento de la facultad de complemento del título en blanco, su libramiento y la facultad de excepcionar contra el tomador que contraviene las instrucciones, proviene de un contrato que se celebra entre el signatario y el consignatario del título, en virtud del cual el primero cede o transmite al segundo la facultad para completar el instrumento, que se transfiere eventualmente a los sujetos que reciben el título, los cuales deben llenarlo de acuerdo con lo establecido en el artículo 622 del Código de Comercio, en nuestro caso, y en orden a lo consignado en el referido pacto.

Para ilustrar esta concepción, traemos a colación al doctor Felipe de J. Tena, quien afirma:

“La emisión de una letra en blanco supone que el girador y el tomador han convenido en la manera y términos en que el segundo ha de llenar la letra. Contrato de completamiento ha sido llamado este convenio, cuyo objeto no es autorizar el lleno de la letra, puesto que esa autorización resulta implícitamente de su entrega al tomador, sino establecer las condiciones de tal completamiento y determinar los límites dentro de los cuales podrá legítimamente hacerse”...

“Es claro que si quien demanda es el mismo tomador, es decir, uno de los sujetos del contrato de completamiento, podrá el demandado rechazar la acción cambiaria mediante la excepción personal de dolo; pero si el actor es un tercero que adquirió la letra después de completada, sólo procederá la excepción en caso de que aquel la hubiere adquirido de mala fe, esto es, conociendo el abuso

cometido, o de que él mismo la hubiere completado sin observar el convenio celebrado entre el girador y el tomador”⁵⁰.

Como podemos apreciar, se trata de un contrato de naturaleza extracambiaria, a cuyo respecto este tratadista expresa:

“Por de contado el derecho de llenar el título ajustándose a los acuerdos celebrados y la correlativa obligación de no oponerse a ello, se rigen exclusivamente por el derecho común, pues si es verdad que “nacen con el título, es igualmente cierto que nacen fuera de él”⁵¹.

En últimas, esta teoría no difiere en nada fundamental de la del mandato, excepto en que evade hablar de la naturaleza del contrato de integración.

5.12 Teoría legal, ex lege

Esta teoría, sostenida principalmente por Valeri, consiste en que el derecho para completar la letra en blanco proviene directamente de la ley, aunque ésta no lo diga expresamente.

Para finalizar el presente capítulo, consideramos oportuno hacer referencia a la posición adoptada por el doctor Bernardo Trujillo Calle, la cual explica en los siguientes términos:

“Los fundamentos jurídicos de los títulos incompletos, para saber en qué momento nace la obligación en ellos incorporada, ha sido cuestión ampliamente estudiada por la doctrina por medio de las distintas escuelas: mandato del creador al tomador para llenarlo; poder al tomador para representar al emitente en la formación de la letra de cambio; negocio cambiario concluido bajo la condición de que se llene la letra con efecto retroactivo; la que funda la obligación del emitente en un hecho ilícito, y la más aceptable en sentir de D. Supino y J. De Semo, que parte del llamado contrato de adhesión, en el sentido de que normalmente, tal contrato, gobierna las relaciones entre emitente y tomador.

50. TENA, Felipe de J. Op. cit. Págs. 184 y 185.

51. Ibídem, pág. 184.

Pero nosotros somos de parecer que todas las teorías concluyen en una sola y única razón jurídica que se explica por sí misma: el título en blanco no lleva consigo obligación ni acción cambiaria alguna, sino cuando sea completado. En el ínterin, confiere únicamente el derecho de llenarlo. Y considerando la institución del título en blanco desde este punto de vista, no deja de ser un espejismo legal, fruto de la necesidad, con funciones económicas excepcionales, como que otorga al tenedor derechos concretos y al creador obligaciones que pueden ser insospechadas. Pero siempre bajo la insustituible condición de ser el título cubierto. De donde, en el fondo, el título en blanco no es más que una expectativa de título-valor, un derecho aplazado, en suspenso. Y cuando la cobertura se hace, es cuando puede decirse que surgieron los derechos del tenedor y que el creador vino a saber si se cumplieron o no las autorizaciones por él dadas a fin de pagar o excepcionar, según la clase de tenedor de que se trate"⁵².

6. INSTRUCCIONES

Los títulos-valores requieren ciertos elementos para que se constituyan en documentos válidos para ejercer los derechos en ellos incorporados. El principio consecuencial de la literalidad les imprime una característica básica, que se traduce en una presunción de verdad, sobre todo cuanto el documento manifiesta a los ojos del mundo. Así, quien detenta el título posee los derechos en él contenidos, de acuerdo con lo manifestado por la literalidad del mismo.

En el caso de los títulos en blanco, en el momento de su emisión no hay certeza sobre los elementos que lo conformarán. El derecho sólo se podrá ejecutar una vez el documento sea totalmente completado, para lo cual se debe cumplir al pie de la letra con las autorizaciones o instrucciones impartidas por el suscriptor del título. De ahí la trascendental importancia que tienen las instrucciones en los títulos en blanco.

En el capítulo 2o., numeral 2.2., al referirnos a la diferencia entre los títulos en blanco y los títulos incompletos, manifestamos que ésta radicaba básicamente en la voluntad de emitirlos en blanco, para que posteriormente se completaran,

52. TRUJILLO CALLE, Bernardo. "De los Títulos Valores". Bogotá: Librería Editorial El Foro de la Justicia. Sexta edición 1985. Págs. 353 y 354.

concediendo esta facultad al tenedor, quien deberá desarrollarla acatando las **instrucciones impartidas por el suscriptor.**

Los títulos en blanco sólo podrán llegar a tener cabal existencia en la medida en que se cumplan las instrucciones para su complementación, salvo cuando llega a ser tenedor de ellos una persona de buena fe desprovista de culpa.

Las instrucciones o autorizaciones son, pues, un elemento básico que afecta directamente a quienes intervienen en su emisión y negociación.

Las autorizaciones son una guía obligatoria, constituida o formada por una serie de datos que surgen generalmente de la relación fundamental entre emisor y tenedor, que en el momento de la creación del título eran de difícil determinación, pero que no obstante constituyen la base para complementarlo posteriormente.

El cumplimiento de las instrucciones es fundamental en la elaboración del título en blanco. Toda la validez interna, entre quienes hayan participado en el acto de suscripción y de emisión con espacios en blanco, descansa en su observancia.

Antes de entrar a analizar los subtítulos siguientes, es importante hacer mención de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, el día 22 de febrero de 1990, respecto de la constitucionalidad del Decreto 42 de 3 de enero de 1990, por el cual se adicionaron los decretos legislativos 1856 y 2390 de 1989 y se dictaron otras disposiciones tendientes a restablecer el orden público, con base en las facultades otorgadas por el artículo 121 de la anterior Constitución nacional.

Estas normas fueron dictadas con el fin de reprimir el narcotráfico y de disponer el decomiso de los bienes y efectos vinculados directa o indirectamente con esta actividad o que provinieran de ella, para evitar en el menor tiempo posible que los valores, dineros, acciones y bienes muebles e inmuebles fueran producto de transacciones tendientes a evadir los decomisos.

Con base en estas razones, decretó el presidente de la República lo siguiente:

“Artículo 4o.”. Los destinatarios provisionales o depositarios de valores, derechos, acciones, dineros, depósitos y divisas tendrán las siguientes facultades administrativas sobre los mismos, además de las consagradas en el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil y normas concordantes”.

...

Literal C). A fin de obtener la liquidez necesaria sobre los valores, dineros, acciones, depósitos y divisas, las personas o entidades provisionalmente destinatarias o depositarias de los mismos quedan facultadas para efectuar el cobro de los títulos, para lo cual podrán llenar los espacios dejados en blanco por los firmantes de los documentos, sin que para ello requieran las instrucciones del suscriptor, a fin de hacerlos valer contra cualquiera de las personas que hayan intervenido en la transacción.

Parágrafo: las facultades del destinatario provisional o del depositario, contenidas en el literal C) de este artículo, sólo podrán utilizarse para llevar a cabo los actos de administración de los valores a ellos destinados”.

Por su parte, el ministerio público consideró que la norma era enteramente constitucional.

Estima la Corte: primero, que es competente; segundo, que se cumplieron los requisitos formales y, por último, que el decreto es congruente con las facultades del artículo 121 de la Constitución nacional de 1886, disponiendo la inexistencia de la norma que autorizaba para llenar los espacios en blanco sin la autorización del suscriptor.

Se expresó así la Corte:

“Los artículos 2o., 3o. y 4o. del decreto sub-exámine establecen el procedimiento para la administración de dinero, divisas y títulos-valores decomisados, otorgándole a su destinatario provisional o depositario las facultades que el Código de Procedimiento Civil señala para el secuestro, adicionados con autorizaciones para realizar giros y transferencias y para convenir con el Banco de la República sobre su inversión, así como para tomar las medidas necesarias para obtener la liquidez de los títulos-valores.

En este último caso, el literal C) del artículo 4o., autoriza a realizar las transacciones necesarias para obtener la mencionada liquidez a los depositarios provisionales, para lo cual podrán llenar los espacios dejados en blanco por los firmantes de los documentos, sin que para ello requieran las instrucciones del suscriptor, a fin de hacerlos valer contra cualquiera de las personas que hayan

intervenido en la transacción. Si bien es cierto que esta norma va encaminada no sólo a buscar la liquidez sino a evitar la evasión del objeto del decomiso, también lo es que la frase “sin que para ello requieran las instrucciones del suscriptor”, constituye una evidente violación del Estatuto Superior, en cuanto da a los depositarios provisionales de los títulos-valores una autorización tan amplia y discrecional, que desconoce derechos legítimos de quien emite el título o de terceros, garantizados por la Carta, con desconocimiento absoluto del derecho de defensa y de la protección debida a su patrimonio, derechos consagrados en los artículos 26 y 30, respectivamente, de la Constitución nacional.

En consecuencia, las instrucciones del suscriptor que deben ser respetadas son las acordadas al momento de la emisión de los títulos, y no las que puede dar el suscriptor con posterioridad al evento del decomiso de dichos títulos, pues obviamente en este caso el secuestre o depositario no tiene por qué acatar o someterse a esas nuevas instrucciones. Por lo anterior se propondrá declarar la inexequibilidad de esta frase: “sin que para ello requieran las instrucciones del suscriptor”, del literal C) del artículo 4o. en cuanto viola los artículos 30 y 26 de la Constitución nacional”⁵³.

Como fácilmente se advierte del extracto citado, la existencia de las instrucciones resulta fundamental para proteger los derechos legítimos del emitente del título. Tanto es así que una previsión contraria, como aquella contenida en el literal C) del artículo 4o. del Decreto 42 de 1989, fue a todas luces contraria a la Constitución nacional, por cuanto violó el derecho de defensa y la protección debida al patrimonio, contenidas en los artículos 26 y 30 de la antigua Carta fundamental.

En este sentido, no cabe duda alguna de que el tenedor del título debe observar siempre las instrucciones impartidas por el suscriptor del mismo, circunstancia señalada imperativamente por el artículo 622 de nuestra legislación comercial, por lo cual está absolutamente prohibido al tenedor o tenedores variar o apartarse de las instrucciones del suscriptor del documento.

Estas no pueden ser alteradas ni sustituidas unilateralmente, después de emitido

53. COLOMBIA, Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia de febrero 22 de 1990.

el documento, por ninguna de las personas que intervienen en su emisión y posterior negociación.

6.1 Requisitos de las instrucciones

El artículo 622 del Código de Comercio no exige ninguna formalidad para el efecto de otorgar las instrucciones o autorizaciones. Por ende, pueden ser dadas de manera verbal o escrita.

Sin embargo, la Superintendencia Bancaria en Circular DB 010/85 (enero 31) estableció una serie de parámetros dentro de los cuales se deben regir las cartas de autorización otorgadas a los bancos que aceptan pagarés en blanco, como documentación de un crédito preexistente. Dice la Superintendencia:

“En desarrollo de las investigaciones efectuadas con base en las innumerables quejas presentadas ante este despacho, respecto de la utilización por parte de los establecimientos de crédito de pagarés firmados en blanco, se estableció que efectivamente vienen cometiéndose continuos abusos e irregularidades, desconociendo las instrucciones del suscriptor de los mismos y las impartidas por la Superintendencia mediante Circular Externa DB-075 de fecha octubre 3 de 1978.

Por lo anterior se considera necesario impartir las siguientes instrucciones:

El artículo 622 del Estatuto Mercantil establece la posibilidad de crear títulos-valores con espacios en blanco, pero al propio tiempo prevé que en las instrucciones dadas por el suscriptor no pueden existir dichos vacíos, toda vez que el título debe ser llenado de acuerdo con las instrucciones expresas del creador y no a criterio del tenedor.

Nuestra ley mercantil otorga protección a quien entrega un título-valor en blanco, al consagrar que el tenedor legítimo únicamente estará facultado para llenarlo si sigue estrictamente las instrucciones de quien lo entregó, las cuales no se podrán plasmar en el documento escrito en forma precisa o indeterminada y deberán contener los requisitos mínimos y las características propias del título de que se trate. En consecuencia, además de las que los clientes consideren necesario introducir deberá contener:

1. Clase de título.
2. Identificación del título sobre el cual recaen las instrucciones.
3. Elementos generales y particulares del título, que no consten en éste, y para el cual se dan las instrucciones.

4. Eventos y circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el título.

Copia de las instrucciones debe quedar en poder de quien las otorga.

Además, se les recuerda que el llenar el título contrariando las instrucciones respectivas puede dar lugar a responsabilidades tanto civiles como penales.

Finalmente, es pertinente precisar que esta entidad considera, al tenor del artículo 47 de la Ley 45 de 1923, como práctica insegura la inobservancia de lo dispuesto anteriormente, y aplicará las sanciones previstas en nuestro ordenamiento positivo cuando a ello hubiere lugar”.

Esta circular de la Superintendencia Bancaria sólo es vinculante para establecimientos de crédito, para los cuales la inobservancia de lo dispuesto en ella da lugar a una responsabilidad administrativa. Los particulares no están sujetos a esta previsión, pudiendo impartir instrucciones de manera verbal, presentando esta alternativa dificultades de índole probatoria ante la presencia de un eventual litigio, problema que veremos con más detenimiento posteriormente.

No obstante lo anterior, al hacer un análisis más detallado de la circular en comento, se concluye que ésta, a pesar de ser acto administrativo en sentido formal, por provenir de un órgano administrativo, en verdad constituye una ley en sentido material.

En efecto, según el criterio material los actos del Estado se clasifican en actos reglas, actos subjetivos y actos condición, siendo los primeros aquellos cuyo contenido es objetivo, impersonal y abstracto y que regulan situaciones jurídicas generales, conteniendo por ende reglas de derecho.

En nuestro criterio la circular que estudiamos reúne los requisitos propios del acto regla, por lo cual debe considerarse como tal.

Si se acepta lo anterior, la circular mencionada, que se encuentra aún cubierta por la presunción de legalidad, bien a pesar de que eventualmente haya excedido la norma que pretendió desarrollar (artículo 622 del Código de Comercio), contempla una solemnidad, a la cual deben sujetarse las entidades vigiladas, consistente en que las instrucciones deben constar por escrito, solemnidad cuyo desconocimiento puede llevar a la inexistencia del acto correspondiente, además de la sanción puramente administrativa. En efecto, debe considerarse que la instrucción en últimas desarrolla, así sea con manifiesta extralimitación, la regla del artículo

622 del Código de Comercio, con lo cual mientras mantenga su presunción de legalidad forma parte de dicha regla para las entidades sometidas a los alcances del correspondiente acto administrativo.

Si la ley exigiera que las instrucciones fueran escritas para todos los casos sin excepción, éstas deberían circular junto con el cuerpo del título en blanco y quienes participaran en su circulación tendrían que ceñirse a ellas. Así mismo, aquel que procediera a complementar el título, debería observar lo estipulado en el documento de instrucciones, para que el instrumento tuviera plena validez.

Aun cuando un sistema como el anterior dificultaría la circulación del documento en blanco, tendría la ventaja de dar seguridad, tanto al suscriptor como a sus tenedores, quienes conocerían exactamente los límites de tales instrucciones y los derechos que del instrumento emanan.

Otro requisito predicable de las instrucciones es, en nuestro concepto, la precisión.

En efecto, en la medida en que el artículo 622 del Código de Comercio exige que el título sea completado llenándolo "estrictamente" de conformidad con la autorización dada, se autoriza para sostener que estas instrucciones deben ser precisas, con el fin de que puedan luego confrontarse con su utilización, a fin de establecer si se cumplió o no "estrictamente" con las facultades concedidas. Si estas últimas son muy amplias, no podría hablarse de conformidad "estricta" entre las instrucciones previas y su uso posterior. Es el caso, frecuente por lo demás en el sistema financiero, de la utilización de cartas de autorización firmadas en blanco, contrariando la citada circular de la Superintendencia Bancaria.

En nuestro entender unas instrucciones demasiado amplias o vagas no pueden considerarse como aptas para integrar el título. En el artículo 622 se lee que el tenedor debe llenar el título "*estrictamente* de acuerdo con la autorización dada para ello" (subraya fuera del texto). Por consiguiente, la expresión anterior autoriza para pensar que, si debe haber una correspondencia "estricta" entre las instrucciones y el título-valor, las primeras deben ser forzosamente precisas, claramente determinadas, para que pueda darse la aludida correspondencia en el nivel exigido.

Por lo demás, las autorizaciones constituyen para el tenedor un derecho y un deber, en la medida en que pueda afirmarse que actúa como mandatario o a nombre del suscriptor. En este sentido, aplicando las normas generales del

régimen de las obligaciones, la existencia de las instrucciones depende de que sean determinadas o fácilmente determinables, como manda el Código Civil para que una obligación y su derecho correlativo puedan existir.

Una autorización muy amplia, peor aún si está además suscrita en blanco, en la medida en que es fuente de la declaración de voluntad del deudor, no cumpliría el requisito de la precisión del objeto exigida por el régimen general de las obligaciones.

El doctor Gustavo de Greiff Restrepo al respecto considera que es indispensable la existencia de instrucciones precisas por parte del suscriptor, siendo necesario que éste indique al tenedor la forma como debe completar el título, de manera clara y explícita. En este orden de ideas, el autor opina que para tal efecto no es suficiente, como él mismo dice, que se exprese simplemente que el título se complete “como quiera”, o “según le parezca”, o que “le da plenas facultades para hacerlo”, explicando que:

“... Ese no es el sentido del vocablo “instrucciones” o de la frase “estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello”. Instrucción “es el conjunto de reglas o advertencias para un fin”, según la acepción, aplicable a este caso, del Diccionario de la Lengua Española, y ni en la más liberal de las interpretaciones podrá aceptarse que aquellas expresiones implican reglas o advertencias algunas; y si se trata de la frase “Siguiendo estrictamente la autorización dada”, cómo podría efectuarse el llenamiento en esa forma si la autorización “como quiera”, “según parezca” o “con plenas facultades”, por sí misma carece del detalle, de la precisión o del rigor que implica el adverbio “estrictamente”⁵⁴.

Este concepto del doctor de Greiff explica bien a las claras lo fundamental que resulta el requisito de la precisión que va ínsito en el término “estrictamente”, pues de lo contrario todo suscriptor de un título en blanco se vería eventualmente desamparado en la protección de sus derechos, cosa que la ley no puede tolerar por ningún motivo.

54. DE GREIFF RESTREPO, Gustavo. “Del Pagaré en Blanco”. En: Revista Derecho Colombiano. Año 24, Tomo 53, No. 294. Bogotá: Editorial Libería El Profesional, 1986. Pág. 506.

6.2 Término para completar el título

Una de las más fuertes críticas que suscita la redacción del artículo 622 del Código de Comercio es que no establece un término preciso dentro del cual debe completarse el título. Para abordar este problema iniciaremos nuestro estudio analizando algunas legislaciones extranjeras que sí contemplan un término específico.

En Italia y Argentina se establece que el portador pierde el derecho de llenar la cambial en blanco transcurridos tres años, contados a partir del día de la emisión del título, agregando que tal caducidad no es oponible al portador de buena fe, a quien el título haya llegado ya completo.

Estas legislaciones establecen un plazo preciso de caducidad, que implica que se castiga la falta de cumplimiento del ejercicio del derecho (derecho de cobertura) en un término perentorio. Por ende, no produce pérdida de un derecho poseído, sino que constituye un impedimento para su adquisición. En efecto, la caducidad impide que el derecho nazca, como consecuencia del incumplimiento de las formalidades requeridas para preservar la acción cambiaria, mientras que la prescripción extingue la acción, bajo el presupuesto de que ya haya nacido.

El artículo 18 de la Ley 46/23 establecía que “para que el instrumento así completado pueda tener fuerza contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, debe ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello y en un tiempo razonable”.

Este tiempo razonable constituía un término muy ambiguo, sujeto a diversas interpretaciones. Como en su oportunidad expresó el doctor Robledo Uribe, sería muy difícil determinar hasta dónde la demora en llenar los espacios es razonable y desde cuándo comienza a no serlo.

En nuestra Ley de Instrumentos Negociables (Ley 46 de 1923), no se incluyó el artículo 4o. de la Ley de Instrumentos Negociables norteamericana, inspiradora en buena parte del Régimen Cambiario, cuya adopción hubiera permitido obtener una precisión en el término para el llenamiento del título.

Como anteriormente anotamos, el artículo 622 de nuestro Código de Comercio no establece un término perentorio de días, meses o años, dentro del cual se deba cumplir con la obligación de complemento del título.

Sin embargo, según Trujillo Calle, esta norma sí contempla un término de caducidad. Así se expresa el autor:

“Es un término de caducidad y está puntualizado en esta frase: “Antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora”. Este es un plazo que se debe entender comprendido entre la fecha de entrega del título y la de su vencimiento, si es que tiene alguno señalado por el creador al momento de entregarse y, en última instancia, hasta cuando no se hayan completado los términos de prescripción de la acción cambiaria señalados por la ley para esa clase de documentos. Lo que es ya suficiente”⁵⁵.

El autor citado es el único de nuestros doctrinantes que ha tratado con profundidad este problema, situación que evidencia la escasa preocupación de los tratadistas nacionales por analizar algunos aspectos jurídicos fundamentales de los títulos en blanco.

En nuestro entender el tenedor debe ceñirse al plazo o condición contemplados en las instrucciones o al plazo previsto en el título. En caso de no presentarse las anteriores hipótesis, se debe pensar en la posibilidad de aplicar el llamado plazo tácito, o aun la condición resolutoria tácita.

Frente a esta idea es pertinente hacer los siguientes comentarios:

Cuando se estipula una condición en el texto mismo del título-valor, el documento pierde su calidad de tal por cuanto no se cumple con el requisito esencial de certeza del derecho incorporado, que implica que los derechos estipulados en los títulos-valores deben ser de tal naturaleza que por sí mismos no ofrezcan ninguna clase de dudas, ni en cuanto a su exigibilidad, ni en cuanto a sus alcances, ni en cuanto a su existencia. Este último aspecto implica la necesaria incondicionalidad de la obligación cartular. En efecto, un breve repaso de las normas incorporadas en nuestro régimen mercantil, permite encontrar que entre las expresiones o menciones necesarias para cada título típico reglamentado por la ley, se exige la orden o promesa incondicional de satisfacer el derecho incorporado. Por este camino, que elimina la posibilidad de cualquier clase de condiciones, sean suspensivas o resolutorias, se quiere que no quede ninguna duda sobre la vida misma del derecho que se incorpora en el título.

Si bien es cierto lo anterior, entendemos que al incluirse una condición dentro de las instrucciones, tal hecho no desvirtúa la calidad de título-valor del documento en blanco, una vez completado, por cuanto en este evento el título en sí mismo

55. TRUJILLO CALLE, Bernardo. Op. cit. Pág. 351.

considerado reúne todos los requisitos necesarios para ser tenido como título-valor, con todas las prerrogativas que lo caracterizan. Dicho de otra manera, la condicionalidad del pacto de integración no se traduce necesariamente en la condicionalidad del título una vez integrado.

A este respecto se han pronunciado los doctores Gustavo De Greiff Restrepo y Gustavo Adolfo Restrepo Navarro, quienes tienen criterios encontrados.

El primer autor entiende que si un pagaré en blanco se suscribe en garantía de pago de una carta de crédito abierta por el banco beneficiario del título y tal circunstancia consta en el cuerpo del instrumento o en las instrucciones, no se estará en presencia de un título porque, como él mismo dice:

“... La promesa de pagar estará sujeta al cumplimiento de la condición suspensiva consistente en que la carta de crédito sea utilizada y no sea pagada en su debida oportunidad por el ordenante...”.

“... Si pues en el cuerpo del instrumento consta su emisión en garantía, el juez habrá de rechazar la acción cambial que se pretendiere ejercitar y si no consta en él, pero el emisor prueba que en las instrucciones se expresó que no podía ser llenado el pagaré (o para este efecto, la letra o el cheque) sino en caso de no pago de una determinada carta de crédito, el juez tendrá que revocar el mandamiento de pago que hubiere dictado, pues no se estaría en presencia de un instrumento negociable. Al demandante le quedará abierto el campo para hacer valer la obligación como caución que es, demostrando los supuestos de hecho indispensables: la obligación principal incumplida y la caución misma, la que no gozará de la presunción de autenticidad de la firma, que sí tienen los instrumentos negociables”⁵⁶.

Por su parte, Restrepo Navarro acepta parcialmente la argumentación del profesor De Greiff, discrepando de ella en lo concerniente a las instrucciones.

Así se expresa el autor:

“Pero, si dicha constancia (que “el incoado se suscribió en garantía de una carta de crédito abierta por el banco beneficiario del

56. DE GREIFF RESTREPO, Gustavo. Op. cit. Págs. 521 y 522.

título" no aparece en el cuerpo del instrumento (hipótesis anterior) sino dentro de las instrucciones para su completamiento y éstas se encuentran contenidas en documento diferente al incoado, sin que en éste exista referencia expresa a aquéllas, la conclusión, necesariamente, es diferente.

En este evento, el título una vez completado, de acuerdo o no con las instrucciones y cumplida o no la condición (incumplimiento en el pago de la carta de crédito abierta por el banco beneficiario), será un título-valor. Y, en general, su cobro y posibilidades de defensa (vía excepción) del emisor serán las anteriormente comentadas, según que el título lo cobre el banco beneficiario, un tenedor distinto que lo haya adquirido en blanco, o un tenedor que lo haya adquirido completo y respecto del cual el emisor no pueda demostrar que no es de buena fe exenta de culpa"⁵⁷.

Sólo nos cabe hacer, respecto de las interpretaciones citadas, el siguiente comentario.

En nuestro criterio, los títulos en blanco o con espacios en blanco no son propiamente garantía, en la medida en que por tal no puede entenderse sino una obligación accesoria, que respalda a una principal, lo cual exige que lo primero sea diferente de lo segundo. Esto solamente se presenta cuando se vincula un patrimonio diferente de aquel del deudor (contrato de fianza, por ejemplo), o cuando se afectan específicamente bienes al respaldo de la prestación principal (prenda o hipoteca). En estos dos casos, puede diferenciarse la obligación principal o garantizada, de la obligación accesoria o de garantía, que vendría a ser la del patrimonio distinto del deudor que se vincula a la obligación hipotecaria o prendaria.

57. RESTREPO NAVARRO, Gustavo Adolfo. "Una opinión diferente sobre el Pagaré en Blanco". En: Revista Derecho Colombiano. Año 24, Tomo 54. No.296. Bogotá: Editorial Librería El Profesional, 1986.

Por el contrario, la firma de un título en blanco no es otra cosa que un principio de documentación de un crédito preexistente, sin que el deudor adquiriera compromisos distintos de los propios de la obligación principal. Otro aspecto importante de tratar, relacionado con el tema del cual venimos hablando, es si puede predicarse mora a cargo del suscriptor cuando, habiendo quedado en blanco el espacio relativo a la fecha de pago, el título no se llena en el mismo momento en que se den las circunstancias previstas para completarlo, sino que se integra de manera posterior, incluyendo intereses de mora por el período.

En nuestro entender en este evento dicha mora es culpa del tenedor que no hizo uso de su derecho de completar el título y de exigir su pago oportunamente. Por tanto, no le es dable reclamar perjuicios moratorios.

Por lo demás, para el caso podría pensarse que hasta que no se complete el título no existe obligación de plazo determinado y, por tanto, es preciso aplicar el numeral 3o. del artículo 1608 del Código Civil salvo estipulación expresa de término para la obligación causal, caso en el cual la mora se predicaría respecto de ésta, no de la relación jurídica cambiaria.

Cabría también considerar, en este evento, la circunstancia de que si las autorizaciones se entienden concedidas para ser utilizadas en determinados eventos, podría entenderse como si éstas estuvieran sujetas a una condición o plazo resolutorios, sea porque dichas circunstancias se expresen directamente en las instrucciones, sea porque se entienden de los hechos que produjeron la expedición del título en blanco.

En nuestro criterio, siempre que en las instrucciones se consagre un hecho futuro e incierto, de cuyo cumplimiento se derive la extinción del derecho de completar el título, estaremos en presencia de una condición resolutoria, la cual es perfectamente viable por no existir prohibición legal alguna al respecto.

Si esto es así, tal situación se regirá por las normas del derecho civil que regulan la materia.

Así mismo, si dentro de las instrucciones se establece un plazo extintivo determinado, dentro del cual deba integrarse el título, el tenedor debe sujetarse al mismo, no pudiendo completar el título en un tiempo posterior, por cuanto su derecho queda extinguido al vencimiento del término previsto.

Los plazos y las condiciones no necesariamente deben constar en el escrito de instrucciones. Es más, los mismos pueden inferirse de las circunstancias que

rodearon la creación del título en blanco, máxime si tomamos en consideración que las instrucciones pueden ser otorgadas en forma verbal.

Por lo demás, no creemos que pueda ser admisible que el suscriptor de un título en blanco esté sujeto indefinidamente al cobro del instrumento, cuando el tenedor tenga a bien completarlo. Precisamente, el artículo 1551 del Código Civil regula el llamado plazo tácito, como el indispensable para cumplir con la obligación, el cual en últimas debe ser aplicable para el caso.

Así mismo, podría ser operante la llamada condición resolutoria tácita, en la medida en que el tenedor no complete el título en la época en que se comprometió a hacerlo.

Sin embargo, lo anterior no podría afectar en ningún caso al tenedor de buena fe exenta de culpa, de conformidad con el último inciso del artículo 622, pero tales circunstancias sí podrán ser alegadas frente al primer tomador o beneficiario y frente a cualquier tenedor que hubiera tenido conocimiento de ellas o que estando obligado a averiguarlas no lo hubiera hecho.

Otro punto importante de resaltar es el referente a la estipulación de plazos dentro de las instrucciones, mayores a los que la ley señala para la prescripción de las acciones cambiarias, o menores a los establecidos para el vencimiento del título. Frente a este problema estamos plenamente de acuerdo con la solución adoptada por el profesor Trujillo Calle, quien opina que ante el primer caso se estaría evitando una caducidad al prorrogar por la exclusiva voluntad de las partes unos términos que son de orden público, situación que excedería los límites permitidos por la ley.

Por el contrario, resulta aceptable el convenio de reducir esos plazos, no los de prescripción ni los de caducidad, sino los exigidos al tenedor para completar el título, dado que, en tal evento está en juego sólo el interés privado de las partes. Por lo demás, la previsión del artículo 622 del Código de Comercio en éste sentido es potestativa, en cuanto hace énfasis en la discreción del tenedor para el completamiento del título.

A manera de conclusión, consideramos conveniente una reforma al artículo 622 del Código de Comercio, en el sentido de incluir dentro de su texto un término preciso para el completamiento del título en blanco, lo cual solucionaría en buena parte los problemas que suscita la ambigüedad de la actual redacción de la norma.

6.3 Prueba de las instrucciones

Como anteriormente anotamos, el artículo 622 del Código de Comercio, no exige ninguna formalidad especial para las instrucciones, pudiendo por ende ser otorgadas de manera verbal o escrita.

Por tal circunstancia, la prueba de éstas puede suministrarse por cualquier medio, como la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el documento, los indicios, etc., siempre que el medio probatorio utilizado sea apto, procurando así que el juez llegue a formarse un convencimiento sobre la existencia, el contenido y el alcance de las instrucciones.

Uno de los aspectos más controvertidos en el punto que venimos tratando es el de determinar a quién corresponde en este caso la carga de la prueba.

Al respecto encontramos dos posiciones enfrentadas:

Según el doctor Gustavo De Greiff, cuando en un juicio se debate la existencia o no de las instrucciones o su conformidad o no con el texto del instrumento, se debe diferenciar:

Si se expresa en el título-valor que éste fue emitido con espacios en blanco o que fue firmado un papel totalmente en blanco, no siempre puede el juez considerarlo “per se” título ejecutivo por cuanto:

— Si quien exige su pago es el primer beneficiario, a éste le corresponde demostrar que lo llenó conforme a las autorizaciones acordadas.

— Si quien exige su pago es un tenedor, que lo hubiere adquirido conforme a su ley de circulación, el título “será válido y efectivo” y podrá “hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones recibidas”, por lo cual no requiere probar dichas autorizaciones.

Por el contrario, si en el título no se expresa que ha sido emitido en blanco, el juez deberá reconocerle su calidad de título ejecutivo, *prima facie*, pero si el obligado demuestra por vía de excepciones que el título fue emitido con espacios en blanco, el demandante deberá probar que existieron instrucciones y cuáles fueron, si él es el primer beneficiario.

Fundamenta el autor su tesis en los siguientes argumentos:

1) Sólo para la persona que posea el instrumento que haya sido negociado,

después de su completamiento, se presume que la integración del título fue realizada conforme a las autorizaciones dadas.

2) Para el primer beneficiario no existe la presunción anterior, por cuanto la ley no lo dice y las presunciones legales, como su nombre lo indica, deben ser establecidas por la ley.

3) En este último evento, por tanto, sólo si existe prueba de las instrucciones podrá decirse que el título proviene del deudor y que, por ende, tiene valor de título ejecutivo.

Para ilustrar la tesis que venimos comentando, es oportuno traer a colación algunas palabras del doctor De Greiff:

“No puede —dice de Greiff— tampoco, entonces, hablarse de presunción de haberse seguido, por el primer beneficiario de un título incoado, las instrucciones para llenarlo, sólo porque el documento al ser presentado por él, para su cobro, aparezca completo y sin espacios en blanco. Como veremos más adelante, si en el título aparece la constancia de haberse librado en blanco, respecto de ese primer tenedor no existe tal presunción, porque ella no está consagrada por la ley y no hay razón lógica, en tal caso, para pensar que se procedió conforme a las instrucciones pues bien éstas pudieron no existir o no seguirse, como lo demuestra la experiencia en la vida real y como resulta de la multitud de pleitos que precisamente acarrean esta clase de títulos. Distinto es el caso cuando en el título no consta o aparece su origen incoado en cuyo caso no se tratará de que el juez infiera que fue llenado de acuerdo con instrucciones precisas dadas por el emisor, sino de darle valor a un instrumento negociable que *prima facie* llena los requisitos de tal”⁵⁸.

El doctor Gustavo Adolfo Restrepo, por su parte, refutando precisamente la opinión anterior, afirma que el inciso tercero del artículo 622 del Código de Comercio no contiene ninguna presunción, sino que constituye una norma imperativa.

Este autor interpreta el artículo 622, desde el punto de vista probatorio, de la siguiente forma:

58. DE GREIFF RESTREPO, Gustavo. Op. cit. Págs. 514 y 515.

“En conclusión, el emisor de un título incoado y mal llenado únicamente triunfará del demandante en la medida en que logre probar las siguientes circunstancias, previa distinción de quién sea el tenedor legítimo del documento:

1.1. Si ese demandante es el tomador del pagaré, quien recibió de él las instrucciones, deberá probar: Que él (el otorgante demandado) suscribió el pagaré con espacios en blanco, que impartió determinadas instrucciones para su completamiento y, por último, que éstas fueron incumplidas. Estos tres aspectos los podrá probar con un solo documento: la carta de instrucciones suscrita por él y por el tomador; esa firma del tomador impuesta en la “carta de instrucciones”, en la cual debe haberse identificado, al menos genéricamente, el citado título, será prueba irrefutable de que el título se entregó con espacios en blanco, de cuáles eran las instrucciones para su completamiento y, por ende, de que fue mal llenado.

1.2. Si el demandante no es el tomador o beneficiario del pagaré sino un tenedor legítimo diferente que lo recibió de aquél por la vía del endoso, en el evento de que fuese a la orden, y que además adquirió el título aun con espacios en blanco, deberá probar, además de lo expuesto en el numeral 1.1., dicha circunstancia, es decir que recibió el título aún con los espacios en blanco, y, por ende, que fue éste quien completó el título en forma diversa a la prevista en las instrucciones correspondientes, en tanto que el artículo 622 se ocupa es del tenedor que lo recibe “después de llenado”.

1.3. Si el demandante es un tercero, distinto al tomador o beneficiario que recibió el título en blanco y, en consecuencia, las instrucciones para su completamiento y, además, recibió el título ya completo, aunque mal llenado, debe probar, fuera de lo dicho en el numeral 1.1., que ese tenedor demandante, en relación con la emisión con espacios en blanco y con la existencia y extensión de las instrucciones dadas para su completamiento, no es de buena fe exenta de culpa, es decir, que él conoció o debió conocer tales circunstancias”⁵⁹.

59. RESTREPO NAVARRO, Gustavo Adolfo. Op. cit. Págs. 176 y 177.

Las razones en las cuales sustenta su posición son las siguientes:

1. Quien emite un título en blanco crea un riesgo (que el título sea mal completado), riesgo que no puede perjudicar a terceros tenedores de buena fe exenta de culpa, situación que se presume.
2. La excepción de “mal completamiento” es asimilable a las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la emisión del título, las cuales sólo pueden ser oponibles contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra un tenedor que no sea de buena fe exenta de culpa.
3. El derecho cambiario se ha constituido en favor de tenedores, no en favor de suscriptores.
4. El suscriptor que frente a un tercero deba pagar algo no previsto en las instrucciones, puede repetir contra quien incumplió éstas.

Así mismo, critica la posición del doctor De Greiff argumentando:

“Afirmar que su tenedor debe probar que completó debidamente los espacios dejados en blanco, es sostener, sin fundamentos lógicos ni jurídicos, que ese documento no es un título ejecutivo complejo y, más que eso, que al demandar el cumplimiento de la obligación en él incorporada, se estaría cobrando judicialmente una obligación condicional, en razón de que sólo sería exigible en la medida en que el título se hubiere completado “estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello”.

El hecho exótico en la práctica, de que en el título se deje constancia expresa de su otorgamiento en blanco o incoado, o a su vez, si se quiere también, de la existencia de las instrucciones para su complemento, no altera las cargas probatorias del emisor, sólo las facilita frente a quien aduzca haberlas adquirido después de llenado, frente a quien ese emisor demandado, con base en tal constancia, podrá establecer que no se trata de un tenedor de buena fe exenta de culpa y por ende, previa la prueba de las instrucciones, se liberará pagándole según el contenido de ellas y no de acuerdo con el tenedor literal de título que las desconoció”⁶⁰.

60. *Ibíd.*, pág. 184.

Coincidiendo con la posición anterior, los tratadistas Alfonso Arango Henao y Luis S. Hello Kattah, sostienen que corresponde a quien alegue que el documento no fue llenado siguiendo las instrucciones acordadas, la carga de la prueba en este sentido. Hello Kattah afirma que esta prueba no perjudica al tenedor de buena fe exenta de culpa, quien podrá hacer valer el título como si se hubiera llenado de acuerdo con las instrucciones.

En nuestro sentir, las tesis anteriormente expuestas no toman en consideración el carácter indefinido de la manifestación del excepcionante de no haber sido completado el documento conforme a las instrucciones recibidas, con el valor probatorio que le confiere la última parte del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, a la par que olvidan el texto específico del artículo 270 del Código de Procedimiento Civil.

La primera de estas normas se expresa así: “Carga de la prueba: incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios, afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

Con el ánimo de lograr un mejor entendimiento y claridad de lo anotado en el párrafo anterior, creemos imperioso hacer especial mención de lo que jurídicamente se entiende por negaciones indefinidas.

En efecto, siguiendo al doctor Gustavo Humberto Rodríguez, desde el punto de vista probatorio las negaciones son afirmaciones de sucesos negativos que no se admiten o que simplemente no han ocurrido. Tales negaciones pueden ser definidas o indefinidas. Si la proposición envuelve tácitamente una afirmación, si está determinada por circunstancias de tiempo, modo y lugar, estamos ante la presencia de una negación definida, y entonces debe probarse la afirmación que envuelve la negación. Por el contrario, si la proposición no envuelve o encierra una afirmación y no hay posibilidad de determinarla por circunstancias de tiempo, modo o lugar, nos encontramos frente a una negación indefinida, la cual no se prueba porque es imposible hacerlo, de donde se colegiría, de no haber norma expresa en sentido contrario, la inversión de la carga de la prueba para el caso que nos ocupa, es decir, que si establecida la suscripción en blanco el creador excepcionante manifiesta que el título no se llenó según las instrucciones impartidas, correspondería al tenedor demandante probar que sí lo completó conforme con ellas.

No obstante lo anterior, para el caso particular de los títulos en blanco, se debe

tener en consideración la regla contenida en el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil que indica:

“Documentos firmados en blanco o con espacios sin llenar. Se presume cierto el contenido del documento firmado en blanco o con espacios sin llenar, una vez que se haya reconocido la firma o declarado su autenticidad. La prueba en contrario no perjudicará a terceros de buena fe, salvo que se demuestre que incurrieron en culpa”.

En efecto, después de la reforma procesal del año 1989 (Decreto 2.282), se presume auténtica la firma de todos los títulos-valores, circunstancia que antes solamente ocurría respecto de algunos de ellos expresamente enumerados.

Siguiendo este orden de ideas, el tenedor de un título ya integrado tiene en su poder un documento provisto de presunción de autenticidad de firmas.

Aunque frente a tal documento no se pueda decir que se haya “declarado su autenticidad”, es evidente que esta declaración es innecesaria por virtud de la presunción antes expresada. Por lo demás, lo que se dice de los documentos respecto de los cuales se ha producido una declaratoria de esta clase, debe predicarse de aquellos que no la requieren, por cuanto la misma viene traída por la ley. En últimas, si se encontrare que no se trata de dos hipótesis totalmente iguales, cabría aplicar la analogía a la cual se refiere el artículo 5o. del mismo Código de Procedimiento Civil.

En definitiva, la carga de la prueba sobre la circunstancia de no haberse completado debidamente el título, radica en quien afirme tal hecho, situación que no puede desvirtuarse por una simple negativa indefinida, por cuanto existe previsión expresa (artículo 270 Código de Procedimiento Civil), que regula este caso específico.

Lo que sí resulta indiscutible, es la posición del tenedor de buena fe exenta de culpa, frente a la cual todos los autores son coincidentes al afirmar que no puede, en ningún caso, verse perjudicado por situaciones anteriores en las cuales no haya intervenido, conclusión que se deriva de la previsión contenida en el inciso tercero del artículo 622 y del principio orientador de la legislación cambiaria de protección a la buena fe diligente de las partes que participan en los procesos circulatorios.

Por tanto, sea cualquiera la posición que se adopte, el tenedor de buena fe exenta de culpa no puede verse afectado en sus derechos, aun cuando el título no hubiere

sido completado de conformidad con las instrucciones, ni aun en el evento de no haber existido dichas autorizaciones.

6.4. ¿Quién puede dar las instrucciones?

Sobre este aspecto puede decirse que no presentaría dificultad alguna en su determinación, dado que el artículo 622 explícitamente establece que, cuando se dejan espacios en blanco, éstos podrán llenarse conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado. Entonces, según la ley comercial colombiana, es el suscriptor quien da las instrucciones. Hasta aquí todo parece estar muy claro. El problema doctrinario se presenta en determinar quién puede suscribir o firmar el título en blanco.

Al respecto, encontramos dos posiciones opuestas en los tratadistas colombianos. Algunos afirman, entre ellos el doctor Ramiro Rengifo, que al no determinar con precisión el artículo 622 a quién corresponde la firma del título en blanco, es viable en nuestro derecho la apreciación de que la firma escrita en el título en blanco, que por lo regular es la del emisor, librador o aceptante, pueda ser por excepción la de otro obligado cambiario, verbigracia, la de un avalista o de un endosante. Así se expresa el doctor Rengifo:

“En cuanto a la manifestación de que la firma puede ser, tanto la del girador como la del girado o incluso la de un endosante, se puede ver que ella contradice la opinión de Messineo, quien afirma hablando de la letra en blanco, que ella comporta una gradación cuyo caso límite es aquel en que sólo aparece la firma del librador y la denominación de letra de cambio, pero nada se opone a que ese caso límite esté conformado por otra firma distinta a la del girador”⁶¹.

El profesor Bernardo Trujillo Calle se manifiesta contrario a esta interpretación, fundamentándose para ello en los siguientes argumentos:

“No es cualquiera el llamado a originar con su firma el nacimiento del título en blanco. Debe entenderse que es el creador, según la naturaleza del documento: el girador, si es letra o factura, el otorgante, si un pagaré.

61. RENGIFO, Ramiro. Letra de Cambio y Cheque. Bogotá: Editorial Pequeño Foro, 1974. Pág. 17.

Porque el aceptante en la letra, por ejemplo, carecería de esa facultad, menos la tendría el simple endosante, pese a lo equívoco de la disposición que simplemente se refiere a “una firma puesta sobre un papel en blanco”, cuando debió decir, para ser exacto, la firma del creador puesta sobre un papel en blanco...”⁶².

En nuestro concepto, no es posible afirmar que el artículo 622 del Código de Comercio sólo admita la firma del creador en un título con espacios en blanco, dado que la norma expresamente habla del “suscriptor”, que puede ser, no únicamente el creador, sino también el aceptante, el endosante, el avalista, etc. Sólo en el caso previsto en el inciso relativo a la firma puesta sobre un papel totalmente en blanco, podríamos suponer que el texto de la norma se refiere exclusivamente al creador. Sin embargo, cabe igualmente admitir la posibilidad de que sobre la misma hoja de papel se cree por suscriptor distinto, debidamente autorizado por el anterior, un título en el cual el primero asuma posición cambiaría diferente de la del creador.

6.5 ¿Quién puede llenar el título en blanco?

Este punto es de primordial importancia en nuestra investigación. Responde a la pregunta: ¿Puede cualquier persona llenar los espacios en blanco?

Recordemos lo establecido por el artículo 18 de la Ley 46 de 1923 que decía: “Cuando al instrumento le falte alguna expresión para la cual se ha dejado una parte en blanco, la persona que lo posee, puede llenar el claro”. Esta norma otorgaba al poseedor la misma facultad para el caso de una firma puesta en un documento absolutamente en blanco.

Tanto la Legislación anterior como la actual, participan de la teoría de la posesión, en la cual el derecho de crédito corresponde al tenedor. Sin embargo, el régimen vigente añade para el completamiento del título la exigencia de que el tenedor sea de buena fe, elemento subjetivo este último que lo califica, pero que no presenta mayor inconveniente en nuestra legislación, ya que ésta presume la buena fe en el detentador del título.

Nuestro actual ordenamiento (artículo 622 del Código de Comercio) autoriza

62. TRUJILLO CALLE, Bernardo. De los Títulos-Valores. Tomo I. Sexta edición. Bogotá: Editorial el Foro de la Justicia. 1985. Págs. 347 y 348.

para llenar los títulos con espacios en blanco al tenedor legítimo y para los absolutamente en blanco al tenedor.

A primera vista parece que la ley hace una diferencia respecto de quien tiene la facultad de completar el instrumento, según se trate de título con espacios en blanco o títulos absolutamente en blanco. Sin embargo, analizando con más detenimiento la norma enunciada, se concluye que no existe tal distinción, ya que en últimas se refiere a quien lo posee materialmente conforme a su ley de circulación. En otras palabras, no parece posible establecer diferencias entre las expresiones “tenedor” y “tenedor legítimo”, como sí las hay entre simple “tenedor” y “tenedor de buena fe exenta de culpa”. Sólo es “tenedor” quien haya recibido el título conforme a su ley de circulación, lo cual lo faculta en principio para ejercer los derechos cambiarios en él incorporados, sin perjuicio de las excepciones causales que puedan proponerse a quien no sea “tenedor de buena fe exenta de culpa”.

Esta afirmación resulta todavía más evidente, si tenemos en cuenta el principio consecuencial de la legitimación, que informa la institución de los títulos-valores. Según el artículo 647 del Código de Comercio, tenedor legítimo es aquel que lo posee conforme a su ley de circulación. No es, entonces, posible admitir la figura, de un tenedor “ilegítimo”, ya que quien posea el título de manera no compatible con su ley de circulación sencillamente no sería “tenedor” en el sentido cambiario de la palabra. Cabe ahora preguntarnos: ¿Cuáles son los mecanismos de circulación de los títulos-valores?

Nuestra legislación admite tres formas de circulación de los títulos-valores, clasificándolos en títulos al portador, a la orden o nominativos.

Los títulos al portador circulan con la sola entrega del documento, por lo cual quedan legitimados por activa quienes los detentan materialmente, habiéndolos recibido mediante tradición voluntaria.

Para la circulación de los títulos a la orden se requiere la entrega acompañada del endoso y, por ende, es tenedor legítimo quien, además de detentar materialmente el título, acredite una cadena ininterrumpida de endosos.

En los nominativos se requiere, además de la entrega y del endoso, la inscripción en el registro del creador del título, siendo tenedor legítimo quien, teniendo control físico del instrumento, aparece como beneficiario al final de una serie de endosos sin solución de continuidad, y su derecho resulta de una cadena, igualmente ininterrumpida, de inscripciones en el libro de control que lleva el creador del título.

En este orden de ideas, el fundamento para determinar quién puede completar el título en blanco, se deriva de la ley de circulación prevista para cada clase de título, dado que sólo en la medida en que se cumplan los requisitos antes enunciados puede llamarse a una persona tenedor legítimo, o simplemente tenedor, pues éste es quien posee el título conforme a su ley de circulación.

En este punto conviene meditar sobre los mecanismos de circulación de los títulos en blanco aún no completados.

En verdad, el problema de la circulación de los títulos en blanco o con espacios en blanco presenta una serie de perplejidades de muy difícil dilucidación, por lo que consideramos del caso dedicarle un capítulo independiente con el fin de brindar al lector una mayor claridad sobre este aspecto.

Por ahora, para efectos del capítulo que venimos tratando, adelantamos que frente a la circulación de los títulos en blanco aún no integrados se presentan dos corrientes doctrinarias, a saber:

1) Aquellos que consideran que el título en blanco en estas condiciones no es circulatorio y que, por tanto, debe transferirse por el mecanismo de la cesión de créditos, y 2) Quienes sostienen que el título en blanco es circulatorio, pudiendo transmitirse por endoso.

Sea que se adopte una u otra posición, respecto del primer beneficiario no existe ninguna duda de que tiene plena facultad para completar el título, sea que se le considere como un tenedor legítimo o no, en el sentido de poseer el título según su ley de circulación. Este primer beneficiario, en cuanto al derecho de cobertura, es quien tiene una facultad más consolidada para ejercerlo, ya que conoce de primera mano las instrucciones impartidas y además conoce la relación fundamental, la cual, en la mayoría de los casos, determina el acuerdo de complementación.

Respecto de los tenedores distintos al primer beneficiario, se debe ante todo estudiar si el derecho de cobertura es susceptible de transmitirse de éste a aquéllos.

En Italia, autores tan importantes como Vivante, sostienen que:

“El tomador puede transmitir a otra persona su crédito y con él, el derecho a cubrir la hoja que sirve para probarlo, como todo acreedor puede ceder su propio crédito, con los accesorios que

sirven para ejercitarlo. La transmisibilidad de este derecho puede presumirse, conforme a la intención del deudor que emitiendo una obligación endosable por su esencia, quiso implícitamente conferir al poseedor el poder de transferirla”⁶³.

En el mismo sentido se pronuncian Supino y De Semo, quienes sostienen:

“Si, en virtud de los principios generales del derecho, el acreedor puede ceder su crédito a un tercero, con todos los accesorios, como serían las cauciones, privilegios e hipotecas, no existe razón alguna para negar al inmediato tomador de una letra de cambio en blanco el derecho de cederlo a un tercero, transfiriéndole, también, si le interesa, la facultad de llenarla”⁶⁴.

En nuestro entender se trata de una facultad que es transmisible. No podría concebirse la transferencia de un título en blanco, si no se tiene la facultad de llenarlo, ya que no se podría ejercer ningún derecho si el instrumento no se encuentra completo en todos sus elementos. La facultad de llenarlo proviene del creador y se extiende a los posteriores tenedores.

Nadie puede llenar un título si no se le otorga la facultad de hacerlo. Y si no la posee y lo hace, incurre en un delito.

Por otra parte el artículo 622 habla de “cualquier tenedor legítimo”. La expresión cualquier, en nuestro concepto, significa que puede ser el primer tomador, el segundo o el último tenedor legítimo quien podrá llenar los espacios en blanco. No tiene que ser necesariamente el primero, pero si él lo hiciere sería más conveniente, dado que tiene un contacto más cercano con el signatario y con la relación fundamental, que son los factores determinantes para la complementación del título. Por demás, si se sigue la tesis de que el título con espacios en blanco y con la cláusula a la orden es circulatorio, así no sea título-valor, resulta fácil entender que la negociación del documento implica la de todos los derechos vinculados a él, ya que el endosatario, como manda la última parte del artículo 888, “se sustituye al endosante en las relaciones derivadas del contrato. En la medida en que la ley no distingue, preciso es admitir que entre dichas relaciones debe incluirse la facultad de integración.

63. VIVANTE, César. “Tratado de Derecho Mercantil”. Volumen III. Madrid: Editorial Reus. 1936. Pág. 278.

64. SUPINO, David y DE SEMO, Jorge. “La Letra de Cambio y del Pagaré Colombiano”.

Si ello es así, la facultad de cobertura no radica solamente en el primer beneficiario o tenedor, en razón a que el Código de Comercio habla que tal facultad la tiene el tenedor legítimo, es decir, aquel que lo posea según su ley de circulación. Por ende, si el beneficiario no lo completa al transmitir el título, también transfiere la facultad de llenarlo, ya que nadie medianamente inteligente recibe un título incompleto si no tiene la facultad de completarlo y posteriormente hacerlo efectivo.

Por último, según las palabras de Vivante, Supino y de Semo, todo acreedor puede ceder su propio crédito, con los accesorios que sirven para ejercitarlo. Así también lo entiende el derecho colombiano, cuando en su artículo 628 del Código de Comercio dice "La transferencia de un título implica no sólo la del derecho principal incorporado, sino también la de los derechos accesorios".

Invitamos al lector a remitirse al capítulo siguiente, referente a la circulación de los títulos en blanco, el cual se encuentra estrechamente relacionado con éste.

7. CIRCULACION DE LOS TITULOS EN BLANCO

Uno de los temas de mayor importancia en este estudio y en el cual se presentan mayores contradicciones entre los tratadistas, especialmente entre los extranjeros, ya que los autores nacionales poco se han preocupado de este tema, es sin duda el de la circulación de los títulos en blanco.

Como sabemos, nos encontramos ante un título de naturaleza y alcances especiales, un título cuya formación se realiza en momentos diferentes. En él se distinguen dos etapas, a saber:

1o. Antes de ser completado y 2o. Después de serlo. Nos proponemos en este capítulo precisar la manera como se produce la circulación del título cuando aún no ha sido completado y los mecanismos que deben ser utilizados para tal efecto.

El tema que nos ocupa requiere una especial profundización, por cuanto de él se derivan consecuencias trascendentales para determinar los alcances jurídicos del título en blanco.

Concretar dentro de qué límites se pueden aplicar los principios propios de la circulación de los títulos-valores a los títulos en blanco, es fundamental para la comprensión del problema.

La primera perplejidad por dilucidar es la atinente a si el título en blanco aún no integrado es o no circulatorio. Quienes sostienen que tales instrumentos no adquieren el carácter de título-valor mientras no contengan los requisitos esenciales exigidos para esta clase de documentos, tienden a pensar que un título de tal naturaleza no es negociable, sino hasta cuando sea integrado en su totalidad. Esta tesis se fundamenta en el rigorismo y formalismo que envuelven a los títulos-valores, en el cual no se entienden ni se aceptan títulos que no cumplan estrictamente con las formas establecidas por la propia ley cambiaria, apoyándose en el artículo 620, inciso 1o., del Código de Comercio, que reza:

“Los documentos y los actos a que se refiere este título sólo producirán los efectos en él previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella los presuma”.

Afirman estos autores que la circulación es un acto eminentemente cambiario, del cual se derivan ciertos efectos, predicables sólo para los títulos-valores. Dado que los títulos en blanco no revisten esta calidad, si pasan del primer beneficiario a un tenedor distinto y de éste a otro, no se puede calificar tal hecho como una circulación de tipo cambiario, que produzca los efectos que ella conlleva, sino que se ha de tratar de una circulación extracambiaria.

De esta teoría podría deducirse que, si bien es admitida la formación sucesiva del documento, sin embargo éste produciría sus efectos típicos (circulación) sólo cuando esté completo.

A esta corriente pertenece el doctor Gustavo de Greiff, quien opina:

“Sintetizando, tenemos entonces que: a) Un instrumento negociable (título-valor) de contenido crediticio no es tal sino en cuanto contenga sus atributos de necesidad, literalidad, autonomía y **circulatorio**; b) Cuando se crea y emite un título en blanco, éste no es aún negociable (o título-valor específico) sino cuando los espacios en blanco se han llenado de conformidad con las instrucciones dadas por el que lo suscribe”.

Y agrega:

“La expresión título-valor incoado es tautológica pues no puede haber título-valor sino cuando el documento contiene todas las menciones y llene los requisitos que la ley señale (artículo 620 del

Código de Comercio). Por esto sería mejor hablar de títulos destinados a convertirse en títulos-valores”.

“... Sólo a partir de la tradición del título de su primer beneficiario a tenedores subsiguientes es cuando verdaderamente operan o tienen aplicación los principios de la necesidad, de la literalidad y la autonomía...”⁶⁵.

Otros autores, por oposición a la tendencia anterior, consideran que el título en blanco, aún no completado, es circulatorio por cuanto el artículo 622 del Código de Comercio utiliza la expresión “tenedor legítimo” que así lo indica. Tal es la posición adoptada por el doctor Gustavo Adolfo Restrepo, quien afirma que el título con espacios en blanco es plenamente negociable, por cuanto la negociabilidad es la regla general y cualquier restricción en este sentido requiere disposición expresa, lo cual sólo se presenta en nuestra legislación cambiaria para el cheque no negociable, el cheque girado o endosado a favor de bancos y el cheque fiscal.

Así se expresa el doctor Restrepo Navarro:

“La negociabilidad es la norma general y toda limitación o restricción requiere disposición expresa, norma que no existe en la legislación colombiana en relación con el título en blanco o incoado; ... pero es más, el mismo artículo 622 prevé expresa y tácitamente dicha negociación. En el inciso primero faculta a “cualquier tenedor legítimo” (el tomador inicial u otro posterior) para llenar el título. En el inciso segundo faculta para tal efecto “al tenedor”, valiendo acá la aclaración anterior. Y en el inciso tercero, de manera implícita, al dotar de especiales prerrogativas a quien lo adquiere “después de llenado”; significando con ello que quien lo adquiere “antes de ser llenado” no goza de ellas...”.

“Mal puede decirse entonces que cuando se crea y emite un título en blanco éste no es aún negociable sino cuando los espacios en blanco se han llenado...”.

En otra parte de su estudio dice: “El primer beneficiario se considera tenedor legítimo, en el sentido de poseerlo conforme a la ley de su circulación. El artículo 647 es suficientemente claro

65. DE GREIFF RESTREPO, Gustavo. Op.cit. Págs. 512 y 510.

en este punto y no admite tesis en contrario; de igual manera es nítido el contenido de los artículos 648, inciso 1o., 661, 662 y 668 inciso 2o.”⁶⁶.

En este mismo sentido, se pronuncia el doctor Trujillo Calle al afirmar que nuestro ordenamiento

“Con un buen criterio, se ha acogido a la teoría que permite la negociación del título absolutamente en blanco, negociación ésta que se hace normalmente por endoso y endoso que puede ser en propiedad, en garantía, o en procuración. Pues que si el tenedor puede llenarlo, se entiende que es cualquier tenedor, y no solamente el que lo recibe de manos del creador”⁶⁷.

Podemos afirmar que la mayoría de la doctrina nacional acepta la negociabilidad del título en blanco cuando aún no ha sido integrado, entendiendo por esta vía que cualquier tenedor legítimo tiene la facultad de llenar los claros.

Ahora bien, si se considera que el título en blanco aún no integrado es negociable, se debe determinar cuál es su mecanismo de circulación.

Para un sector de la doctrina, la circulación de este tipo de instrumentos debe producirse por un mecanismo extracambiario, por cuanto no son títulos-valores y, por ende, mal podría hablarse de derechos y obligaciones cambiarias. Ese mecanismo extracambiario lo constituye aquello que en el derecho común se conoce con el nombre de cesión de créditos.

A esta tendencia pertenece el doctor Hildebrando Leal Pérez, quien considera que los títulos en blanco aún no completados pueden circular a través del endoso, pero sus efectos no son cambiarios, sino los propios de una cesión de créditos.

La tesis anterior también es sostenida por Felipe de J. Tena quien, refiriéndose a la letra en blanco, manifiesta que mientras el título no se complete, no puede hablarse de derechos y obligaciones cambiarias, y por esto los adquirentes posteriores al beneficiario no son más que simples cesionarios de derecho común,

66. RESTREPO NAVARRO, Gustavo Adolfo. Op. cit. Págs. 181 y 182.

67. TRUJILLO CALLE, Bernardo. “De los Títulos-Valores”. Manual Teórico y Práctico, Tomo I, Sexta edición. Bogotá: Editorial El Foro de la Justicia. 1985. Pág. 350.

pudiéndose proponer a éstos las excepciones oponibles a su causante o tenedor original, por lo cual la letra en blanco no debería ser transmisible por endoso.

Sin embargo, el mismo autor considera:

“... Las letras en blanco se transmiten por endoso. Mas este hecho nada significa contra la tesis que hemos venido sosteniendo relativa al carácter extracambiario de la letra en blanco antes de complementarse. El endoso es puramente formal; no produce ninguno de los efectos que caracterizan y distinguen el endoso cambiario. Se trata de una propia y verdadera cesión, que bien pudiera efectuarse observando las normas del derecho común, puesto que el derecho común es el que lo gobierna; pero ya que la letra en blanco puede circular con la misma rapidez de una letra completa, era preciso que su transferencia asumiera la forma del endoso, única compatible con las necesidades de esa circulación a que ambas están de parejo modo destinadas”⁶⁸.

Como se puede observar, para Tena el mecanismo del endoso no es el adecuado para la circulación de un título que no se encuentra completo aún, constituyendo en estricto sentido un artificio jurídico para explicar su transferencia de un tenedor a otro.

Para otros tratadistas, el título en blanco aún no completado puede trasladarse por los mecanismos propios de los títulos-valores, esto es, por endoso, produciendo los efectos cambiarios que le son propios.

Partidario de la tesis comentada es el profesor Bernardo Trujillo Calle, para quien el título en blanco aún no completado puede circular por endoso, por cuanto el texto del artículo 622 del Código de Comercio no otorga la facultad de llenar el título únicamente al primer beneficiario.

En este mismo sentido se pronuncia Bracco, quien afirma que:

“Quien recibe una letra en blanco está en las mismas condiciones que el endosatario que adquiere una letra completa. Su derecho no tiene origen en el de su predecesor, está únicamente obligado a investigar la extensión fuera de la expresión gráfica, es decir

68. TENA, Felipe de J. “Títulos de Crédito”. Tercera edición. México: Editorial Porrúa, S. A., 1956. Págs. 185 y 186.

tener en cuenta el contrato de integración celebrado con el tomador..."⁶⁹.

Bonelli, por su parte, considera que el tenedor legítimo por endoso de una letra en blanco es un verdadero tenedor cambiario, que ha adquirido el derecho de forma autónoma.

También comulga con esta teoría el profesor Ferrara, quien al respecto expresa:

"La letra en blanco es susceptible de circular en forma cambiaria porque quien la suscribe se obliga a la orden, con lo cual autoriza el endoso. Naturalmente agrega, es necesario que exista el nombre del tomador, porque de otra manera no existiría la legitimación del primer endosante"⁷⁰.

Más adelante el mismo autor concluye:

"Si bien el endosatario no es cesionario, se le pueden oponer las excepciones originadas en las modalidades y límites del derecho de completamiento. El endosatario que llene la letra con base en los acuerdos tiene el derecho de considerarse acreedor y acreedor autónomo porque responde a la voluntad del deudor"⁷¹.

Las posiciones doctrinarias anteriormente reseñadas nos merecen los siguientes comentarios.

Ante todo, no estamos de acuerdo con la afirmación expresada por algunos doctrinantes en el sentido de que la circulación de esta clase de instrumentos pueda considerarse una operación cambiaria, toda vez que si el título-valor no existe antes de haber sido completado, es muy difícil aplicar las consecuencias propias de los títulos-valores a un documento que todavía no lo es. Más aún, el mismo artículo 622 expresa que la integración es necesaria para ejercitar los derechos incorporados en el título, sin distinguir entre ellos, lo cual obliga a pensar que el título debe ser completado antes de presentarlo para el ejercicio de uno de los derechos propios del tenedor, cual es el derecho a la negociación.

69. BRACCO, citado por: WILLIAMS, Jorge N. Ob. cit. Pág. 486.

70. Ibídem, págs. 484 y 485.

71. Idem.

Sin embargo, puede ser que el documento contenga una cláusula circulatoria, como la expresión “a la orden” u otra de carácter equivalente, tal como reza la última parte del artículo 888 del Código de Comercio. Esta disposición, si bien incurrió en su texto promulgado en la impropiedad de hablar de “documento inscrito”, tal como consta en sus antecedentes, en el proyecto original se refería a “documento escrito”. A decir verdad, si se hubiere querido regular la circulación de “un documento inscrito”, difícilmente habría podido permitirse que el simple endoso sustituyera al endosatario en los derechos propios del endosante, toda vez que la inscripción produce oponibilidad a terceros y, por ende, todo cambio en la titularidad inscrita debe ser objeto, igualmente, de una inscripción, lo cual resultaría contrario al texto de la norma que permite que el solo endoso produzca plenos efectos en relación con dicha titularidad.

Que se hable de “documento escrito” no puede ser considerado como una impropiedad, dado que no todo documento, de conformidad con la definición que se da en el Código de Procedimiento Civil, es de carácter escrito, razón por la cual resulta lógico que el legislador haya efectuado la aclaración correspondiente. Adicionalmente, si bien la última parte del artículo 888 se refiere a la circunstancia de que el “contrato” conste en la forma antes expresada, la doctrina se inclina por entender que lo mismo puede predicarse de cualquier relación jurídica, documentada por escrito, así no sea de carácter contractual. Entre otras cosas, habría que aplicar la analogía a la cual se refiere terminantemente el artículo 1o. del Código de Comercio. Como consecuencia, podríamos decir que todo documento escrito, que contenga la cláusula “a la orden” u otra de carácter equivalente, aun cuando no sea título-valor, tal como reza expresamente el artículo 888, puede circular por simple endoso.

Con fundamento en lo antes expresado, podríamos sostener que si en un título con espacios en blanco consta la cláusula “a la orden”, u otra equivalente nada se opone para que el documento sea transferido por endoso, antes de ser completado, en la medida en que en él conste una relación jurídica principiada, que pueda ser objeto de esta clase de negociación.

Si nos enfrentamos al título totalmente en blanco o poco menos que en estas condiciones, no podríamos hablar de una circulación o negociación, derivada de la voluntad del deudor de vincularse a un instrumento circulatorio, a través de la cláusula “a la orden” u otra equivalente. Sin embargo, en este caso y coordinando con lo afirmado sobre la circunstancia de que la redacción del artículo 622 busca, fundamentalmente, no sólo atender una práctica mercantil, sino también defender los derechos de terceros tenedores de buena fe, cuya situación no puede verse vulnerada por circunstancias derivadas de la creación del título, ni de su

circulación previa, en las cuales ellos no hayan participado, cabe entender que el legislador acepta esta circulación anterior a la integración del documento, con el fin de proteger a los tenedores de buena fe exenta de culpa que, por ser ajenos a ella, podrían verse injustamente vulnerados si dicha circulación fuera rechazada.

Por consiguiente, entendemos que se produce un fenómeno totalmente especial, en la medida en que una obligación, al menos esbozada bajo la firma del respectivo suscriptor, pueda ser objeto de negociación, sin que se trate todavía de un título propiamente circulatorio y sin que se den las circunstancias propias de la cesión de derechos, tal como dicho fenómeno es reglamentado por nuestra ley. Sin embargo, esta especialísima situación viene a producir efectos jurídicos en la práctica, en la medida en que el legislador ha entendido que es necesario proteger los derechos del tenedor de buena fe exenta de culpa, figura a cuya defensa se enderezan la mayor parte de las normas del régimen cambiario.

Las teorías sobre los mecanismos de la circulación de los títulos en blanco, no tienen simplemente una importancia teórica, ni sus implicaciones quedan exclusivamente en el plano académico.

En efecto, según sea la tesis que se adopte, la posición de los intervinientes en la circulación del título en blanco es completamente distinta.

Para quienes consideran que la circulación del título en blanco aún no integrado es un acto extracambiario, que se produce mediante el mecanismo de la "cesión de derechos", los intervinientes en la negociación del título se ven sujetos a las excepciones oponibles a su causante, mientras que para quienes admiten la circulación por endoso del título en blanco no completado, el tenedor queda a salvo de las excepciones personales que se derivan de la relación fundamental. Adicionalmente, es preciso advertir que la cesión sólo es oponible al deudor en tanto en cuanto se le notifique o él la acepte, ya que se obliga sólo frente a un acreedor concreto (artículo 892), lo cual no sucede cuando dicho deudor se ha obligado bajo la cláusula "a la orden" u otra de carácter equivalente. Difícil, por decir lo menos, la aplicación de estos principios a la circulación de los títulos en blanco, cuando carecen en un principio de la cláusula a la orden.

En otras palabras, si estuviéramos en presencia de una cesión de derechos, deberíamos predicar de ella todas las consecuencias previstas en los artículos 887 y siguientes del Código de Comercio, lo cual lesionaría en últimas al tenedor de buena fe exenta de culpa.

Algunos doctrinantes sostienen que aunque estos títulos pueden circular por endoso, con respecto a la parte de la declaración en blanco el tenedor estaría sujeto a los límites de los acuerdos de complementación.

En este sentido se pronuncia Ferrara en los siguientes términos:

“El derecho de integración está puesto al servicio de la letra, en cuanto está destinado a completarla; por tanto, es un accesorio de la misma y le sigue en las transmisiones. La adquisición es a título ordinario sobre la base de la propiedad del documento. Pero el endosatario adquiere este derecho de la misma manera que fue adquirido por el emitente, o sea con las mismas modalidades y limitaciones que originalmente se pusieron o se convinieron sucesivamente. Este derecho no es un derecho que resulte del título y no pueden aplicarse los principios que valen para la literalidad cambiaria. El endosatario está obligado a respetar la convención originaria de integración”⁷².

Ferrara, así mismo, critica la posición alemana que llega al extremo de manifestar que el endosatario de la letra en blanco no queda sujeto a las excepciones relativas al derecho de complemento, dado que no puede predicarse la buena fe respecto del derecho de complementación que no resulta del título.

Compartimos enteramente la posición adoptada por Ferrara.

El endosatario o tenedor que llene el título con base en los acuerdos de integración puede considerarse un acreedor autónomo, en la medida en que acate la voluntad del suscriptor. En caso contrario, es decir, el tenedor que llena el título en forma arbitraria, o sin tener en cuenta las instrucciones, no puede ser tenido como un acreedor autónomo y, por ende, no puede ser protegido por la ley. Nuestro artículo 622 en ninguna parte de su texto establece protección alguna para quien obra de mala fe o con culpa. Por consiguiente, un tenedor que no se preocupa por averiguar cuáles fueron la intención y los alcances o términos dentro de los cuales el signatario y los demás suscriptores de un título en blanco quisieron obligarse, no puede ser considerado como tenedor de buena fe exenta de culpa, ni recibir el amparo de la ley.

Para concluir y siguiendo el texto del artículo 622 del Código de Comercio, debe hacerse una distinción entre dos hipótesis.

72. FERRARA, citado por: WILLIAMS, Jorge N. Op. cit. Pág. 478.

A. Cuando el título es negociado después de llenado a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa. En este caso, la tutela del tenedor se realiza según los principios propios de los títulos-valores.

B. Cuando el título ha llegado en blanco al tenedor. En este evento hay que hacer dos distinciones: una, es la posición del tenedor respecto de los elementos contenidos en el título en blanco, y otra, la relación con los elementos faltantes que se complementarán posteriormente.

En el primer supuesto, operan para el tenedor que recibe el título parcialmente en blanco los principios consecuenciales propios de los títulos-valores, tales como la literalidad, la incorporación, la autonomía.

En el segundo, la complementación debe hacerse estrictamente de acuerdo con las instrucciones o convenios y la tutela sólo se limita al cumplimiento de ellos.

8. EFECTOS JURIDICOS

El efecto es el resultado de una causa. Consecuentes con este criterio, analizaremos los efectos que se producen como consecuencia de crear un título en blanco.

Para estudiarlos deben tenerse en cuenta varios hechos:

¿Cuándo el título se completa de acuerdo con las instrucciones? Si se violan éstas, ¿quién las viola? ¿Cuándo se llena de forma abusiva?; etc.

Cuando el título se complementa por el primer tenedor y beneficiario, cumpliendo estrictamente las instrucciones, el documento se constituye en un título completo, creador de derechos y de obligaciones para las partes que intervinieron en su emisión y circulación. Da al acreedor beneficiario la facultad de reclamar del deudor (suscriptor) todos los derechos contenidos en el título, en el momento y en el lugar en que el mismo documento indica. Así mismo, el suscriptor sabe que está obligado a cuanto el título manifiesta en su contenido. El documento determina los límites dentro de los cuales se obliga el deudor.

Cuando el título no se completa de acuerdo con las instrucciones, porque el beneficiario no las siguió, contraviniéndolas en todo o en parte, el suscriptor podrá oponer quien no sea tenedor de buena fe exenta de culpa, es decir, el tenedor extraño al completamiento del título, las excepciones a las cuales hacemos referencia en el siguiente punto, quedando obligado sólo en los términos de

las instrucciones impartidas por él. En este evento, cuando se llena el título en forma contraria al convenio de integración, no se presenta necesariamente la nulidad del mismo, sino que al deudor importará únicamente la rectificación y corrección, de conformidad con las instrucciones impartidas, oponiendo la excepción pertinente con base en la prueba requerida.

Cierto es que por el hecho de no completarse el título según las indicaciones, éste no pierde toda validez cambiaria. Lo que se busca es que produzca sus efectos en la forma convenida, dado que el suscriptor no podría negar la existencia de su obligación, y buscará que ésta se determine según los límites establecidos en el pacto de cobertura.

Cuando el título se presenta con espacios en blanco, deben tenerse en cuenta dos aspectos: Primero, si los vacíos se refieren a aquellos requisitos denominados dispositivos, caso en el cual el título será incompleto y, por consiguiente, inexistente como título-valor. Segundo, si se refiere a aquellos vacíos que la ley suple y sobre los cuales las partes no han dispuesto, el título será completo y como tal válido.

Por último, cuando el título se transfiere a un tenedor legítimo, de buena fe exenta de culpa, a quien ha llegado completo, es válido según el contenido del mismo, cualquiera sea la forma como se haya integrado.

Por tal motivo, sus derechos están determinados por lo expresado o contenido en el documento y tiene la facultad de exigir lo que el instrumento manifiesta.

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos que corresponden al suscriptor para reclamar civil y penalmente contra el consignatario que haya actuado al margen de las instrucciones o sin ellas.

En este último caso opera para el tenedor de buena fe el principio consecuencial de la literalidad y, con él, si existe noticia de la integración del título, la presunción de que éste fue llenado de acuerdo con las instrucciones impartidas.

Al crearse un título en blanco, ya sea absolutamente en blanco o con espacios en él, la transferencia del suscriptor al beneficiario, automáticamente, produce una relación inmediata entre las dos partes, y el beneficiario, como consecuencia de la emisión del título, está obligado a acatar las instrucciones o autorizaciones emitidas por el obligado cambiario.

Cuando el título se transfiere a tenedores posteriores, también se crea una relación mediata entre el suscriptor y tales tenedores, de forma que si el título les llega aún en blanco, están en la obligación de cumplir las instrucciones transmitidas por sus transferentes, por tanto, de conocerlas o averiguarlas para completar el título, de tal manera que de incumplir las convenciones o incurrir en culpa al adquirir tal conocimiento, pueden ser considerados como tenedores de mala fe.

9. EXCEPCIONES

Para un mayor entendimiento de este capítulo, haremos un breve estudio de las excepciones respecto de los títulos en blanco en el proceso ejecutivo, por ser éste en el cual se ventilan las controversias relativas a los títulos-valores.

Antes de entrar en este análisis, consideramos pertinente hacer el siguiente comentario:

Respecto a los títulos en blanco, puede suscitarse la duda de si prestan mérito ejecutivo, por cuanto provienen únicamente en parte del deudor, habiendo sido completados por el acreedor.

Sobre este punto, vale la pena considerar que el derecho moderno ha venido admitiendo, en muchos casos, unas circunstancias que constituyen una excepción a la regla general del Código de Procedimiento Civil, relativa a que los títulos ejecutivos deban provenir necesariamente del deudor o de su causante. En efecto, las normas correspondientes permiten que la Superintendencia Bancaria certifique los saldos que existan en los bancos a cargo de su clientela, por concepto de cartas de crédito utilizadas y de sobregiros cubiertos, certificaciones que prestan mérito ejecutivo, siendo así que provienen directamente de una entidad administrativa, pero indirectamente de las constancias existentes en la contabilidad misma del acreedor, en ningún caso del deudor.

Por otra parte, las normas sobre propiedad horizontal permiten que los certificados suscritos por los administradores correspondientes, quienes son representantes de la comunidad acreedora, puedan prestar mérito ejecutivo. En igual sentido, la legislación cooperativa ha autorizado que certificados con origen en el acreedor sirvan para el recaudo de créditos establecidos en favor de dicho sistema.

Habiendo hecho la aclaración anterior, continuaremos con el estudio de las excepciones en el proceso ejecutivo.

Para la defensa de sus intereses, el demandante goza del derecho de acción y el demandado del derecho de contradicción, que se concreta en la proposición de excepciones, cuyo objeto es evitar que prosperen las pretensiones aducidas por el demandante.

Las excepciones dentro del proceso ejecutivo brindan la oportunidad al ejecutado para oponerse a las pretensiones del demandante, acatando la orden de pago proferida, o invocando hechos nuevos no contenidos en el título ejecutivo, que o bien desconocen la existencia de la obligación, o determinan su extinción, o implican su no exigibilidad, o pretendan alcances más restringidos para dicha obligación.

En cuanto a los títulos-valores, existe un régimen especial de excepciones, establecido en el artículo 784 del Código de Comercio, cuyo carácter taxativo suscita controversia. Para algunos doctrinantes caben excepciones distintas de las establecidas por el mencionado artículo, mientras que para otros sólo las previstas en él pueden ser alegadas.

En nuestro concepto, aunque el régimen general de derecho común implique que el demandado puede proponer todas las excepciones pertinentes que no sean temerarias, en materia de títulos-valores, por el principio de protección a la buena fe diligente, las excepciones tienen un régimen restrictivo.

En el derecho cambiario antiguo se establecía que ante el tenedor en debida forma no cabía excepción alguna. Esta posición fue suavizada por la jurisprudencia, hasta que se determinó la diferencia entre las excepciones reales y las personales. Las reales se podrían oponer aun a los tenedores en debida forma; las personales únicamente a los demás tenedores.

9.1 Frente al primer tomador o beneficiario

Frente al primer beneficiario, si éste es el acreedor demandante, no encuentra el suscriptor de un título en blanco dificultad para proponer excepciones, por cuanto aquel formó parte de la relación fundamental, no teniendo por tal motivo una situación privilegiada.

Así las cosas, cabrían las siguientes excepciones:

- a) Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título.

b) Incumplimiento de las instrucciones impartidas. Tiene cabida cuando el beneficiario no cumple estrictamente las instrucciones o autorizaciones impartidas por el suscriptor. Esta sería una de las excepciones personales que puede oponer el demandante, contra el demandado (artículo 784 No. 13).

c) Las demás señaladas en el artículo 784 del Código de Comercio, si se dan los supuestos de hecho necesarios para la operancia de cada una de ellas.

9.2 Frente al tenedor legítimo diferente del primer tomador o beneficiario

En este evento hay que distinguir, a su vez, dos situaciones distintas, a saber:

a) Si al adquirente o tenedor legítimo le ha llegado el título ya completo, estará protegido por la controvertida presunción consignada en el inciso final del artículo 622 del Código de Comercio.

En esta hipótesis, estamos frente a un tenedor con situación privilegiada, a quien no se le podrán oponer las excepciones derivadas de la relación fundamental, por cuanto él no formó parte de ella, ni tuvo conocimiento de las circunstancias que rodearon la creación o emisión del instrumento.

Sin embargo, cabría este tipo de excepciones en el caso en que este tenedor tenga antes de recibir el título conocimiento de las instrucciones y, a sabiendas de que el título se completó en contravención a ellas, proceda a demandar el cumplimiento de la obligación. Un tenedor en las condiciones anotadas deberá considerarse como de mala fe y, por ende, se encontrará sujeto a las excepciones consagradas en la parte final del artículo 784 No. 12 del Código de Comercio.

b) Si el adquirente o tenedor legítimo recibió el título aún con espacios en blanco y posteriormente procedió a llenarlos.

Es claro que este tenedor no formó parte de la relación fundamental, ni de la emisión, ni de la creación del título, pero su situación no es privilegiada, como la del anterior, pues debe acomodarse a las instrucciones y acuerdos estipulados por el signatario, estando en la obligación de averiguarlos en caso de que no se le comuniquen. Si las contraviene, o llena el título arbitrariamente, se le puede oponer la excepción de incumplimiento de las instrucciones.

A este tenedor, según los casos, se le puede imputar mala fe o culpa. Mala fe porque conociendo el convenio no llenó el título de conformidad con él, o culpa, por la falta de diligencia en averiguar el contenido de las instrucciones y

acuerdos, estando obligado a hacerlo, máxime si tuvo conocimiento de la existencia de un convenio de integración.

Parece pertinente aquí interrogarse sobre la situación de un tenedor legítimo, ajeno al acuerdo de integración, que llene el título de acuerdo con la información errada recibida de quien se lo negocie.

Este aspecto, no tratado por la doctrina, nos merece el siguiente comentario: Si bien el principio consecuencial de la autonomía coloca al tenedor cambiario de buena fe exenta de culpa al margen de situaciones derivadas de relaciones jurídicas extrañas para él, ateniéndose simplemente a la literalidad del título, en este caso la literalidad faltante no degenera una autonomía cambiaria, siendo él respecto de las instrucciones del suscriptor causahabiente en estricto sentido y, por ende, posible cualquier controversia que se suscite en torno de dichas instrucciones.

Vistas las cosas de otra manera, podrá también sostenerse que dicho tenedor no es ajeno a la culpa, en la medida en que imprudentemente negocie un título con espacios en blanco ateniéndose de otra parte a las simples referencias verbales de su enajenante salvo el acuerdo de integración.

No puede en forma alguna sostenerse que dicho tenedor esté protegido cambiariamente por el principio de la literalidad, pues su conducta se refiere —precisamente— a una literalidad faltante. Tampoco por el de la autonomía, pues es él quien completa el título, con apoyo en referencias ajenas al documento mismo y que no son, por consiguiente, de carácter cambiario.

Distinto sería el caso de un título con instrucciones incorporadas en su cuerpo y que es llenado por un tenedor ciñéndose al texto correspondiente, bien a pesar de que dicho texto no refleja la realidad del acuerdo fundamental que le dio origen. Aquí, bien a pesar de que no pueda hablarse de la literalidad cambiaria, porque el título-valor nace después del completamiento, sí cabe afirmar la regla derivada de una simulación escrita que no puede afectar a terceros de buena fe, para quienes el texto simulado prevalece sobre el acuerdo meramente consensual y desconocido.

Una de las excepciones que con mayor frecuencia se invoca en el mundo del litigio es la **prescripción**.

En materia de títulos-valores en blanco, se presentan dos posiciones doctrinarias sobre su aplicabilidad, a saber:

1. La imprescriptibilidad de los títulos en blanco: esta tesis considera que mientras no sea completado el instrumento, no corre la prescripción. Obedece a la voluntad del acreedor, quien decide a partir de qué momento empieza a correr, dependiendo eso sí de la fecha que establece como vencimiento del título.

2. El título es prescriptible, pero deben tenerse en cuenta dos situaciones diversas:

2a. Si se otorgaron instrucciones con inserción de una fecha de vencimiento, debe considerarse que a partir de ésta empieza a correr el término de prescripción, aun cuando el título no fuere llenado.

2b. Si no se convino una fecha de vencimiento, de todas maneras el término de prescripción empieza a correr a partir de la emisión o entrega del título, ya que desde ese momento el tenedor está en condiciones de hacerlo exigible, completándolo. Esta tesis se basa en el inciso final del artículo 621 del Código de Comercio, que establece: "si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título, se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega".

Sobre este aspecto, nos parece oportuno hacer los siguientes comentarios:

En primer término, es necesario distinguir la prescripción cambiaria de la prescripción de la relación jurídica causal, que empieza a correr desde el momento en que se hace exigible la obligación, si el título no se completa. Si se produce la integración, dicha relación causal prescribirá conjuntamente con la cambiaria (artículo 882 del Código de Comercio) y, en tal caso, la prescripción deberá contarse desde cuando debió completarse el título, sea en razón del plazo expreso fijado en las instrucciones, sea en virtud del plazo tácito supletorio. Sólo de esta manera se atiende debidamente a la equidad, ya que no es lógico pensar que la inactividad del tenedor, al llenar el título con demora, pueda favorecerlo librándolo de la prescripción, en perjuicio del suscriptor favorecido con ella. En nuestro criterio, el derecho de complementación, que se ejerce por cuenta del suscriptor, lleva implícita una forma de representación de éste y, por ende, el deber de no perjudicar sus intereses, lo cual sucedería si, por no llenar el título oportunamente, se extiende la responsabilidad de dicho suscriptor al contarse desde fecha posterior el plazo de prescripción.

10. ASPECTOS PENALES DE LOS TITULOS EN BLANCO

Los aspectos penales de los títulos en blanco han sufrido, sin duda alguna, una notoria evolución en nuestro derecho. El Código Penal de 1936 regulaba expre-

samente lo referente a esta clase de títulos en su artículo 415, bajo la denominación del tipo penal de "abuso de hoja firmada en blanco", norma que estaba contenida en el capítulo de "abuso de confianza y otras defraudaciones" y que tutelaba el bien jurídico del patrimonio.

Aún hoy en día algunas legislaciones, entre ellas la francesa, siguen considerando esta conducta como abuso de confianza, por ser ésta la que impulsa al individuo a firmar un título en blanco, depositando su fe en otra persona que se considera honesta y proba, bajo la convicción de que llenará el título cumpliendo el pacto acordado o las instrucciones impartidas.

Posteriormente, se creó mediante los decretos 2447 y 2597 de 1974 y 111 de 1976 la Comisión Revisora del Código Penal de 1936 y del anteproyecto de 1974, la cual elaboró una nueva disposición que, en últimas, fue incluida en el capítulo de falsedad de documentos, que tutela el bien jurídico de la fe pública, circunstancia que en opinión del doctor Parmenio Cárdenas constituyó un grave error, por cuanto el artículo solamente comprendía el lleno de una hoja firmada en blanco con elementos distintos de los contenidos en la autorización dada para su completamiento. En su entender, sólo se configura falsedad si se simula, imita o altera una firma verdadera, situación que no se presenta frente a la norma mencionada.

La norma a la cual hemos hecho referencia era la siguiente:

"Artículo 286. El que en hoja o documento firmados en blanco, lo elabore o complete de manera diversa a la que estaba autorizado u obligado y lo usare en provecho propio o de un tercero, incurrirá en prisión de uno a cinco años.

La pena se aumentará en una tercera parte si se trata de título-valor".

Más adelante, en el anteproyecto de 1978, se volvió a variar la redacción de la norma, quedando de la siguiente forma:

"Artículo 301 Falsedad por abuso de firma en blanco. El que en hoja firmada en blanco elabore un documento, contraviniendo las indicaciones de quien la haya firmado y la use en provecho propio o de un tercero, incurrirá en prisión de uno a cinco años.

En la misma pena incurrirá el que de igual manera completa un documento que se le entregue firmado y parcialmente elaborado y lo use en provecho propio o de un tercero.

Si el que lo usa no fuere el mismo que lo elaboró o completó, la pena será de seis meses a tres años de prisión”.

Consta en el informe presentado por el doctor Giraldo Marín, miembro de la comisión, que a juicio de ésta, el delito de falsedad por abuso de firma en blanco participa más de la naturaleza de los delitos contra la fe pública, que de los que tutelan el bien jurídico del patrimonio, circunstancia que determinó el traslado de la norma de un capítulo a otro, por tratarse de la creación de un medio de prueba falso.

Nuestro actual Código Penal no contiene ninguna previsión asimilable a aquella consagrada en el artículo 415 del antiguo Código, no obstante haber sido aprobado por la comisión inicialmente creada por la Ley 5a. de 1978 el artículo 275, que se refería al abuso de firma en blanco. La razón que motivó a la comisión final para eliminar tal norma, fue la consideración de que el completamiento de un documento elaborado en hoja firmada en blanco, en contravención a las instrucciones del creador, era una forma de falsificación y, en consecuencia, resultaba innecesario crear una regla independiente para esta conducta.

El doctor Estrada Vélez, durante las deliberaciones de la comisión final, sostuvo que la conducta se adecuaba más al título de los delitos contra la fe pública, que al de los delitos contra el patrimonio, en razón del daño que se causa.

Por no existir una adecuación típica específica para la conducta que venimos tratando en el actual ordenamiento, nuestros doctrinantes han venido sosteniendo una diversidad de tesis sobre esta problemática.

Podemos, al respecto, afirmar que la mayoría de la doctrina nacional se ha inclinado por considerar a esta conducta como un tipo de falsedad documental.

En este sentido, el doctor Luis Enrique Romero Soto se pronuncia en los siguientes términos:

“Ciertamente que en los casos en que la hoja firmada en blanco haya sido entregada a una persona con la obligación de llenarla, traiciona ésta la confianza que en ella se ha depositado al llenarla en forma diversa. Pero aquí, hay más que la violación de esa

confianza, más aún, que una simple defraudación. El hecho de que el engaño recaiga en un documento, creándose una prueba contraria al querer del verdadero autor, ubica el hecho, de lleno, en la falsedad documental aunque genéricamente pueda ser una defraudación o un abuso de confianza. Lo que hace posible la confusión es que en todos estos delitos hay un fondo común de engaño, como lo ha destacado Carnelutti, lo cual los convierte en especies de un mismo género”⁷³.

Ahora bien, si aceptamos la tesis dominante sobre la materia, es menester hacer una breve explicación sobre el delito de falsedad.

Este atenta contra el bien jurídico de la fe pública, concepto que está constituido por dos factores: fe, entendida como el crédito dado a una persona por la autoridad de que emana, como aquellos documentos expedidos por notarios, que certifican ciertas cosas, y pública, entendida como un bien necesario, visto o sabido de todos, que es ostensible y notorio, por existir de por medio un interés de carácter general. La fe pública nace del Estado, toda vez que éste adquiere la autenticidad de la voluntad estatal y representa los intereses de la colectividad. En nuestro criterio, estaría mejor hablar de “confianza pública” o de “autenticidad”, pues la locución “fe pública” es tan amplia como confusa.

La falsedad que estudiamos es aquella que tiene aptitud para engañar a un número indeterminado de personas, o sea, al público en general, a la sociedad.

En el Código de 1936 los instrumentos negociables (hoy títulos-valores) se asimilaban a documentos públicos en lo atinente al delito de falsedad, en virtud de su capacidad para producir daño a terceros.

En la codificación vigente se abandonó la anterior asimilación, considerándose ordinariamente a los títulos-valores como documentos privados, lo cual no obsta para que ocasionalmente puedan revestir el carácter de documento público, en la medida en que sean creados por funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones, conforme al criterio del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Una hipótesis de esta estirpe ocurriría en el supuesto de una emisión de títulos-valores de deuda pública, suscrita por funcionarios como el ministro de Hacienda y Crédito Público, el tesorero general de la Nación y el contralor general.

73. ROMERO SOTO, Luis Enrique. La falsedad documental. Tercera edición. Bogotá: Editorial Carvajal, 1982. Pág. 303.

No significa lo anterior que pueda crearse un título a través de una escritura pública de carácter notarial, toda vez que en este caso el original quedaría incorporado al correspondiente protocolo y no tendría la característica de circulatorio que le corresponde, según las exigencias del artículo 645 del Código de Comercio. Sin embargo, es posible que el Estado emita títulos circulatorios, suscritos por funcionarios públicos que, en tales condiciones, reuniéndose los demás requisitos propios de los títulos-valores, tendrían el carácter adicional de documentos públicos.

La falsedad en documento privado contiene dos elementos fundamentales: a) Que el documento sobre el cual recae la infracción tenga capacidad probatoria respecto de determinado hecho o acto, con relevancia jurídica, y b) El uso que del documento haga el sujeto activo de la infracción, sin el cual la conducta no se tipifica como delito de falsedad.

Esta, cuando se produce en documento público, por el contrario, se estructura sin necesidad del uso, siendo necesario para su configuración tan sólo el primer elemento reseñado en el párrafo anterior.

Establecidos como han quedado los elementos tipificadores de los delitos de falsedad en documento público y privado, conviene ahora analizar si, para el caso que venimos tratando, estamos en presencia de una falsedad material o ideológica.

La diferencia fundamental entre falsedad material e ideológica radica, en sentir del doctor Romero Soto, en que la primera se presenta cuando se crea un documento de la nada o se altera uno ya elaborado, y la segunda cuando se introduce la falsedad o la mentira en la elaboración.

En los proyectos de 1974 y de 1978 se creaba el tipo de "falsedad ideológica en documento privado", figura que fue suprimida del texto definitivo. Esta circunstancia se debió a la resistencia por parte de algunos autores en aceptar la viabilidad de este tipo penal, por cuanto estimaron que el particular no podría incurrir en falsedad ideológica, toda vez que sólo los funcionarios públicos están obligados a decir la verdad.

Sin embargo, el doctor Romero Soto, autor de las anteriores fórmulas, sostuvo que existen casos excepcionales en los cuales el particular, por obligación legal, debe decir la verdad.

En nuestro entender, uno de estos casos excepcionales es precisamente el relativo al título-valor en blanco. En efecto, por previsión expresa del artículo

622 del Código de Comercio, el tenedor del título creado en blanco está obligado a seguir estrictamente las instrucciones impartidas por el suscriptor. En caso contrario, estaría faltando a la verdad.

Habiendo aclarado lo anterior, podemos afirmar que, en la hipótesis de mal completamiento del título, estamos frente a una falsedad ideológica, punible en el nuevo Código Penal Colombiano conforme al artículo 221, por cuanto en nuestro entender el título integrado de manera abiertamente contraria a los acuerdos aparece en su forma externa como materialmente verdadero, pero contiene declaraciones contrarias al querer del suscriptor, lo cual lo hace ideológicamente falso.

Esta conclusión se hace todavía más evidente, si se tiene en cuenta que la apariencia del título no ofrece ninguna duda respecto de su contenido, por no aparecer normalmente en su texto ningún tipo de tachadura o enmendadura.

Por lo demás, la opinión de quines niegan de plano la posibilidad de que exista falsedad ideológica en los títulos-valores en blanco, por ser estos documentos privados, resulta poco convincente, por cuanto, en primer término, no todos los títulos-valores son documentos privados, pudiendo revestir el carácter de públicos y, segundo, por cuanto al hacer un análisis de los antecedentes de nuestro actual Código Penal, se observa que la razón de ser de esta restricción no es predicable frente a los títulos en blanco, situación ésta que en su oportunidad expusimos.

Con el ánimo de corroborar lo anteriormente expuesto, es oportuno traer a colación el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de fecha 9 de septiembre de 1988, que en lo pertinente expresa:

“La sentenciada, al momento de realizar la conducta, consignó en los formatos de cheques que previamente habían sido firmados algunas cantidades para las cuales no estaba autorizada, e incluso el nombre mismo del beneficiario no fue el inicialmente previsto por el firmante del documento. Este hecho, y su posterior uso, viene a adecuarse jurídicamente al tipo penal consagrado en el artículo 221 del Código Penal, toda vez que se falsificó el formulario, esto es, se adulteró su inicial contenido, si bien no a través del borrado mecánico o la agregación de letras que hubiera podido hacerse eventualmente, sí por medio de consignar en él cantidades diversas a las que, según instrucciones, deberían anotarse. Hecho lo anterior, la sentenciada presentó el título-valor al banco librado, el cual lo

pagó, agotando con ello la descripción típica del delito de falsedad que le fuera deducido en el pliego de cargos y luego en las sentencias.

“A este respecto, suficiente claridad brinda el pronunciamiento anterior de la Corte (14 de junio de 1983), con ponencia del doctor Luis Enrique Aldana Rozo, la cual se transcribe en sus apartes pertinentes:

(...).

“Surge claro, pues, a través de lo transcrito, que la conducta consistente en llenar espacios en blanco que se han dejado en el formato de un cheque, es comportamiento adecuado a la descripción típica actual de la falsedad en documento privado...”.

Para brindar una mayor comprensión del texto anteriormente transcrito, a continuación citaremos algunos apartes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 14 de junio de 1983.

“En verdad que resultaba criticable que la codificación anterior hubiera consagrado una disposición específica para tipificar el abuso de firma en blanco, pues en estricto sentido el comportamiento de quien crea total o parcialmente un documento llamado a producir efectos jurídicos representa un atentado contra la fe pública y, por ende, criticable no sólo la consagración expresa, sino su ubicación dentro de los delitos contra la propiedad”.

“No obstante, ante la existencia de una norma especial que recogía en su integridad el comportamiento imputado al procesado, su aplicación era imperativa. En efecto, de no existir el artículo 415 del Código Penal de 1936, habría sido aplicable el artículo 233, en concordancia con el 231 del mismo ordenamiento, pero si bien es cierto que aquella disposición consagraba un comportamiento que habría podido ser sancionado con la aplicación de las disposiciones últimamente citadas, su carácter de norma especial le daba aplicación preferente al artículo 415 para sancionar el abuso de firma en blanco”.

11. ENDOSO EN BLANCO

Para iniciar este capítulo consideramos pertinente hacer una breve referencia a lo que se entiende por endoso.

El endoso es un acto solemne, mediante el cual se negocian los títulos-valores a la orden o nominativos, en este último caso con la formalidad adicional de la

inscripción, que ha de constar en el cuerpo mismo del instrumento o en hoja adherida a él, por cuanto afecta los derechos y obligaciones de las partes.

Tal vez la definición más completa del endoso (aun cuando únicamente respecto de la letra de cambio) la ha dado De Semo, quien afirma:

“Es una declaración cambiaria, unilateral y accesorio, que se perfecciona con la entrega del título, incondicional, integral, asimilable a una nueva letra de cambio, que tiene por objeto transmitir la posesión, del título, de la cual el adquirente obtiene sus propios derechos autónomos; y que vincula solidariamente (autónomamente entre nosotros) con los demás deudores al endosante, respecto de la aceptación y del pago”⁷⁴.

Según el citado concepto los rasgos más característicos de esta figura son : el carácter unilateral del endoso, su naturaleza accesorio, su necesaria incondicionalidad y la integridad del endoso (ineficacia del endoso parcial).

A este respecto, conviene meditar en la pretendida unilateralidad del endoso, teoría que también se ha esgrimido respecto de cualquier suscripción cambiaria. Es cierto que el endoso es una manifestación externa de la sola voluntad del endosante, pero puede y suele provenir del acuerdo con el endosatario y produce efectos para ambos. En últimas, a través de la entrega que complementa al endoso dicho endosatario lo acepta expresamente y sin dicha entrega no se producirían los efectos traslaticios del dominio propios del endoso, ni la responsabilidad del endosante que sólo la puede hacer valer el endosatario que, habiendo recibido el título, esté en condiciones de exhibirlo (artículo 624 del Código de Comercio). La doctrina moderna distingue entre los actos unipersonales (producidos por una sola persona) y los unilaterales (que producen efectos solamente para una de las partes), en forma tal que un acto jurídico, mejor aún, expresándolo de una manera más aceptable hoy en día, un negocio jurídico, puede ser unipersonal y multilateral a la vez o pluripersonal y unilateral simultáneamente.

En cuanto a la determinación del endosatario, el endoso puede ser especial o en blanco. El endoso especial es aquel en el cual se precisa o determina la persona del endosatario, de tal forma que para la negociación del título es necesaria la firma de este último.

74. DE SEMO, citado por: LEGON, Fernando A. "Letra de Cambio y Pagaré". Buenos Aires: Editorial Ediar, 1966. Pág. 76.

El endoso es en blanco, cuando no se determina la persona del ulterior beneficiario o endosatario. En este caso, es necesario para ejercer el derecho en el título incorporado, que el tenedor llene el endoso, con su nombre o el de un tercero, antes de presentar el título para su ejercicio.

Como bien sabemos, el endoso cumple una función legitimadora, que implica que la designación de la persona que ha de ocupar la posición del legitimado o endosatario debe ser claramente indicada, sin que se presente duda al respecto, de tal forma que si la designación del endosatario se hace de modo inexacto o insuficiente, dicho endoso debe considerarse como no escrito, no pudiéndose convertir por ese hecho un título a la orden en título al portador, por cuanto esto implicaría cambiar unilateralmente la ley de circulación del título, lo cual no es permitido por nuestra legislación. En efecto el artículo 630 de nuestro Código de Comercio indica:

“El tenedor de un título no podrá cambiar su forma de circulación sin consentimiento del creador del título”.

La figura que venimos tratando, constituye una conversión forzosa del endoso en blanco en especial, que ocurre antes del momento de cobrarse el título.

Lo anterior no supone un cambio unilateral en la ley de circulación del título, como lo han considerado algunos doctrinantes. En nuestro entender y siguiendo los conceptos del doctor Bernardo Trujillo Calle, el título a la orden debe ser siempre negociado por endoso, para conservar su carácter de tal. El título con endoso en blanco puede circular por entrega hasta el momento de su cobro, momento en el cual, para efectos de legitimación, se entenderá como tenedor legítimo, a aquel quien figure como endosatario, por haber sido llenado el blanco con su nombre. Por ende, no es cierto que se produzca un cambio en la ley de circulación. Lo que ocurre es que el endoso se perfecciona en el momento en que se llena el blanco.

El endoso en blanco, en nuestro criterio, constituye una modalidad especial del título-valor en blanco, con una reglamentación especial contenida en el artículo 654 del Código de Comercio a cuyas voces:

“El endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma del endosante. En este caso, el tenedor deberá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora”.

El beneficiario de un endoso en blanco es un endosatario real, que no se menciona en el título, pero que más adelante debe determinarse. Esto mismo ocurre con el título en blanco, en el cual los espacios que se han dejado vacíos deben ser complementados, antes de presentar el título para su cobro, pero de acuerdo con las instrucciones impartidas por el suscriptor del mismo. Lo anterior implica que, tratándose de un título en blanco, la persona que lo llene debe hacerlo ciñéndose rigurosamente a tales instrucciones, mientras que en el endoso en blanco es la ley misma la que determina cómo se debe complementar.

Sin embargo, las dos figuras son coincidentes en los siguientes aspectos:

1. En el artículo 622 del Código de Comercio se establece que quien pueda llenar los espacios en blanco es cualquier tenedor legítimo.

Para el endoso en blanco, el artículo 654 del Código de Comercio establece que quien puede llenarlo es el tenedor.

Como se puede observar, el legislador utilizó términos distintos para uno y otro caso. En el primero, empleó la expresión tenedor legítimo, mientras que en el segundo habló simplemente de tenedor. Cabe ahora preguntarnos si esta diferencia obedece a alguna razón de fondo, a lo cual respondemos en forma negativa por cuanto, a nuestro modo de ver, en uno y otro evento la ley hace referencia a tenedor legítimo, es decir a quien posee el título conforme a su ley de circulación. La pretendida figura de “tenedor ilegítimo”, como antes se manifestó, implica negar a quienes tengan el control físico del documento la calidad de tenedor.

Para el endoso en blanco, el tenedor legítimo será aquel que demuestre que lo posee según una cadena ininterrumpida de endosos y que por este medio llegó a sus manos. En el título en blanco, será tenedor legítimo aquel que puede completar el título, porque lo ha adquirido de acuerdo con la ley de circulación correspondiente.

2. En uno y otro caso es indispensable, y así lo establecen los artículos 622 y 654 del Código de Comercio, que el espacio en blanco se complete antes de presentar el título para el ejercicio del derecho en él incorporado, para dar así cumplimiento a los principios de literalidad y certeza del derecho que informan la institución de los títulos-valores.

La única diferencia, como antes mencionamos, la constituye el hecho de que en el endoso en blanco la ley misma es la que determina la forma como debe

llenarse, mientras que en los títulos con otros espacios en blanco, los vacíos deben llenarse de acuerdo con las instrucciones impartidas por el suscriptor que los haya dejado.

En efecto, la situación del título endosado con espacios en blanco, como ocurre con el llamado endoso en blanco, constituye una circunstancia que difiere del régimen general de los espacios en blanco únicamente en la permisión especial que la ley da al tenedor, para llenar el espacio que corresponde al endosatario, no de conformidad con instrucciones dejadas por el suscriptor, sino con su nombre mismo o con el de un tercero. En otras palabras, en este caso la ley entra a suplir las autorizaciones especiales que pudiera no haber dejado el suscriptor, autorizaciones cuya falta impide completar otros espacios en blanco de carácter distinto.

Procede anotar que al reglamentar la letra de cambio el Código de Comercio autoriza en el artículo 686 para que, en caso de que no se indique la fecha de la aceptación, ésta pueda ser consignada por el tenedor. En función de lo anterior, cabe sostener que en este caso nos hallamos en presencia de un espacio en blanco, el correspondiente a la fecha de aceptación, que puede también ser completado por el tenedor, sin necesidad de autorización expresa, proviniendo ésta de la ley misma, como ocurre en el caso del endoso en blanco.

12. CONCEPTOS DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

12.1 Nociones preliminares

Al realizar el análisis de los conceptos emitidos por la Superintendencia Bancaria, observamos que la mayoría de ellos se refieren a las instrucciones. Esta circunstancia, en nuestro entender, obedece a los problemas que suscita a diario el uso de facultades muy amplias, en muchos casos con un contenido ambiguo, que en últimas perjudican al suscriptor del título. Ante los abusos e irregularidades que venían cometiendo los establecimientos de crédito en la expedición de pagarés en blanco, la Superintendencia Bancaria estableció una serie de requisitos para el escrito de instrucciones, cuando el título en blanco fuera expedido en favor de una entidad crediticia.

En efecto, la Superintendencia Bancaria, a través de las circulares DB-010 de enero 31 de 1985, DB-0075 de enero 13 de 1975, 015 de octubre de 1978 y del Concepto OJ-001 de mayo 27 de 1991, se ha pronunciado sobre el tema, exigiendo que las instrucciones consten siempre por escrito y reglamentando el

contenido de esta carta de instrucciones. A este respecto, no nos cabe hacer más comentarios que los expuestos en el capítulo sexto de esta publicación, en el cual realizamos un amplio análisis de este fundamental aspecto de los títulos en blanco.

Otro problema abordado por la Superintendencia Bancaria es el relativo a la diferencia existente entre título-valor con espacios en blanco y título absolutamente en blanco, entregado para ser convertido en título. En sentir de esta entidad, los primeros deben contener al menos los requisitos del artículo 621 del Código de Comercio, además de los exigidos para cada título en particular, mientras que a los segundos no les es predicable esta exigencia (ver Concepto DB-0065 de enero 13 de 1975 y Concepto 05-001 de 27 de mayo de 1991).

En nuestro criterio, resulta un tanto artificial la distinción, por cuanto esta circunstancia haría que los títulos con espacios en blanco contuvieran todos los requerimientos formales de los títulos-valores y que, por consiguiente, los espacios solamente pudieran corresponder a menciones adicionales y no necesarias. En todo caso, es de advertir que entre los dos extremos existe una serie de posibilidades intermedias, que hace difícil aceptar una clasificación tan rotunda.

Por lo demás, en estricto rigor, mientras existan espacios en blanco de los requeridos por la ley, no podría hablarse de títulos-valores, toda vez que la regla de derecho positivo terminantemente establece que éstos deben contener todos los requisitos exigidos, a falta de lo cual no merecen la calificación correspondiente (artículo 620 del Código de Comercio).

Lo que ocurre para el caso de los títulos en blanco, es que su calificación de título-valor se determina, no en el momento de su emisión, sino cuando se ejerce el derecho que en el título se incorpora. Es en este instante y no antes cuando se debe observar si cumple o no con los requisitos exigidos para esta clase de documentos.

En cuanto a las implicaciones penales del título en blanco, esta entidad considera que se configura el delito de falsedad, acogiendo por esta vía la doctrina mayoritaria sobre este aspecto.

12.2 Documentos jurídicos

12.2.1 Documento No. 1

Título: Circular DB-0075 de enero 13 de 1975

Autor: Superintendencia Bancaria

Fuente formal: Artículos 621, 622 Código de Comercio; Ley 45 de 1923, artículo 18

Tesis: La diferencia existente entre título con espacios en blanco y papel firmado en blanco y entregado para ser convertido en título-valor, radica en que en el primer evento, el título debe contener los requisitos generales, más los especiales exigidos para cada título, por lo que los espacios en blanco sólo podrán referirse a las omisiones que suple la misma ley, mientras que en el segundo caso el tenedor del papel firmando en blanco puede en cualquier tiempo convertirlo en título siguiendo estrictamente las autorizaciones dadas por el suscriptor.

Extracto literal:

(...)

Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título, dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello.

Si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas.

Considera este despacho necesario distinguir entre título-valor con espacios en blanco y papel firmado en blanco y entregado para ser convertido en título; en el primer caso debe entenderse que el título contiene por lo menos los requisitos que señala el artículo 621 del citado código, con más de los exigidos para cada clase de título y, por tanto, los espacios en blanco sólo pueden referirse a los requisitos o menciones cuya omisión suple la misma ley.

En el segundo caso, el tenedor del papel en blanco puede convertirlo en título siguiendo estrictamente las autorizaciones dadas por el suscriptor sin que el Código exija, como lo hacía la Ley 45 de 1923, que se llene dentro de un tiempo razonable.

(...)

12.2.2 Documento No. 2

Título: Circular número 075 de octubre de 1978

Autor: Superintendencia Bancaria

Fuente formal: Artículo 622 Código de Comercio

Tesis: Cuando se expide un pagaré con espacios en blanco, las instrucciones para ser llenado deben constar siempre por escrito, con el fin de dar mayor seguridad a la transacción que se realiza.

Extracto literal:

(...)

Circular Número 075 octubre de 1978

Presidentes, gerentes y revisores fiscales de las entidades vigiladas

Para efecto de lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, en relación con la obligación del tenedor legítimo de llenar espacios en blanco de los títulos-valores, de conformidad con las instrucciones del suscriptor, este despacho considera oportuno indicar que con el fin de dar una mayor seguridad en la transacción que se realiza, las mencionadas instrucciones deberán constar siempre por escrito cuando se expidan pagarés que revisten esta modalidad.
(...)

12.2.3 Documento No. 3

Título: Circular externa DB-010 de enero 31 de 1985

Autor: Superintendencia Bancaria

Fuente formal: Artículo 622 Código de Comercio; Ley 45 de 1923, artículo 47

Tesis: El escrito de instrucciones para un título con espacios en blanco deberá contener:

1. La clase de título.
2. Identificación plena del título sobre el cual recaen las instrucciones.
3. Elementos generales y particulares del título, que no consten en éste, y para el cual se dan las instrucciones.
4. Eventos y circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el título.
5. Las demás instrucciones que los clientes consideren necesario introducir.

Copia de las instituciones debe quedar en poder de quien las otorga, es práctica insegura la inobservancia de lo dispuesto anteriormente.

Extracto literal:

(...)

Circular Externa No. DB-010 de 1985 (31 de enero)

Presidentes y gerentes generales de los establecimientos de tarjetas de crédito

En desarrollo de las investigaciones efectuadas con base en las innumerables quejas presentadas ante este despacho, respecto de la utilización por parte de los establecimientos de crédito de pagarés firmados en blanco, se estableció que efectivamente vienen cometiéndose continuos abusos e irregularidades, desconociendo las instrucciones del suscriptor de las mismas y las impartidas por la Superintendencia mediante Circular Externa DB-075 de fecha octubre 3 de 1978.

Por lo anterior, se considera necesario impartir las siguientes instrucciones:

El artículo 622 del Estatuto Mercantil establece la posibilidad de crear títulos-valores con espacios en blanco, pero a propio tiempo prevé que en las instrucciones dadas por el suscriptor no pueden existir dichos vacíos, toda vez que el título debe ser llenado de acuerdo con las instrucciones expresas del creador y no a criterio del tenedor.

Nuestra Ley Mercantil otorga protección a quien entrega un título en blanco, al consagrar que el tenedor legítimo únicamente estará facultado para llenarlo si sigue estrictamente las instrucciones de quien lo entrega, las cuales no se podrán plasmar en el documento escrito en forma imprecisa o indeterminada y deberán *contener los requisitos mínimos y las características propias del título de que se trate*. En consecuencia, además de las que los clientes consideren necesario introducir, el escrito de instrucciones deberá contener:

1. Clase de título valor.
2. Identificación plena de título sobre el cual recaen las instrucciones.
3. Elementos generales y particulares del título, que no consten en éste, y para el cual se dan las instrucciones.
4. Eventos y circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el título.

Copia de las instrucciones debe quedar en poder de quien las otorga.

Además se les recuerda que el llenar el título contrariando las instrucciones respectivas puede dar lugar a responsabilidades tanto civiles como penales.

Finalmente, es pertinente precisar que esta Entidad considera, al tenor del artículo 47 de la Ley 45 de 1923, como práctica insegura la inobservancia de lo dispuesto anteriormente, y aplicará las sanciones previstas en nuestro ordenamiento positivo cuando a ello hubiere lugar.

Sírvase acusar recibo de la presente Circular.

12.2.4 Documento No. 4

Título: Documento OJ-705 de 20 de octubre de 1987

Autor: Superintendencia Bancaria

Fuente formal: Artículo 654 del Código de Comercio

Tesis: La suscripción de un título en blanco supone convertir a su tenedor en titular del derecho que el documento incorpora, vale decir en su propietario, mas no en acreedor prendario, situación que se presentaría solamente a través de un endoso en garantía.

Extracto literal:

(...)

El endoso en garantía de un título genera para su beneficiario la existencia de un derecho prendario sobre el título y le confiere además las facultades que ostenta el endosatario en procuración, o sea, la posibilidad de presentar el documento, para su cobro judicial o extrajudicial, o su aceptación, así como para endosarlo en procuración y para protestarlo.

La prenda o sea el endoso en garantía del título, constituye una garantía real, y en tal sentido el endoso se traduce en la afectación específica del título al pago de una obligación a cargo del endosante y a favor del endosatario; en estas condiciones supone el surgimiento de un derecho real accesorio (de prenda) que entra a sumarse al derecho de crédito del cual el acreedor prendario es beneficiario.

La firma de títulos-valores en blanco no configura garantía.

La negociación de los títulos-valores, ya sea por su transferencia o por su pignorcación, se perfecciona a través del endoso de los mismos; por tal virtud debemos afirmar que quien suscribe un título en blanco no propicia la existencia del derecho accesorio que tipifica la existencia de la misma; conforme a nuestro Estatuto Mercantil sólo es posible dar en garantía los títulos-valores mediante el mecanismo específico del endoso en prenda, que presupone la existencia de un derecho principal al cual accede la garantía.

De otra parte, la prenda real de un título supone la afectación del título mismo para respaldar la efectividad de una obligación previamente concebida, que en el evento de su exigibilidad hace viable el ejercicio de las prerrogativas inherentes a la garantía real cuales son la preferencia y la persecución, fenómenos que no se suceden en el evento en cuestión toda vez que la denominada contragarantía simplemente genera la existencia de una obligación autónoma a cargo del suscriptor del título y en favor del acreedor tenedor del documento.

Y es que, principalmente, suscribir un título en blanco supone convertir a su tenedor en titular del derecho que el documento incorpore, vale decir en su propietario, mas no en acreedor prendario, situación en la que se ubicaría, tratándose de títulos-valores, solamente el endosatario en garantía, según se expuso atrás.

(...)

12.2.5 Documento No. 5

Título: Concepto OJ-001 de mayo 27 de 1991

Autor: Superintendencia Bancaria

Fuente formal: Artículo 622 Código de Comercio

Tesis: En materia de títulos con espacios en blanco y títulos en blanco, la ley exige que el documento sea diligenciado por el tenedor siguiendo estrictamente las instrucciones dadas por el creador, sin mencionar los requisitos que las mismas deben reunir. A fin de establecerlos se distingue: negocios jurídicos entre particulares; y negocios jurídicos con entidades vigiladas. En el primer evento las instrucciones pueden ser verbales o escritas; en el segundo evento, las instrucciones deben constar siempre por escrito, el cual contendrá, además de las que los clientes consideren necesario introducir, las siguientes: 1. Clase de título. 2. Identificación plena del título sobre el cual recaen las instrucciones. 3. Elementos generales y particulares del título, que no consten en éste, y para el cual se dan las instrucciones. 4. Eventos y circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el título. El llenar el documento contrariando las instrucciones impartidas, trátese de una transacción entre particulares o con un establecimiento de crédito, puede dar lugar a responsabilidad tanto civil como penal, existiendo además, en el segundo evento, una responsabilidad administrativa. En relación con la responsabilidad penal se configura una falsedad simple.

Extracto literal:

(...)

1. Requisitos que debe contener la carta de instrucciones

El artículo 622 del Código de Comercio establece la posibilidad de crear títulos-valores con espacios en blanco y al propio tiempo prevé que en tal hipótesis “cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora” (subrayamos).

Igualmente contempla dicho artículo el caso del papel en blanco firmado y entregado con la intención de convertirlo en título, señalando que el tenedor tendrá el derecho de llenarlo y que “Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de com-

pletarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello" (subrayamos).

En "... el primer caso debe entenderse que el título contiene por lo menos los requisitos que señala el artículo 621 del citado código, además de los exigidos para cada clase de título y, por tanto, los espacios en blanco sólo pueden referirse a los requisitos o menciones cuya omisión suple la misma ley. En el segundo caso, el tenedor del papel en blanco puede convertirlo en título siguiendo estrictamente las autorizaciones dadas por el suscriptor sin que el Código exija, como lo hacía la Ley 45 de 1923, que se llene dentro de un tiempo razonable". (Superintendencia Bancaria, oficio DB-057, enero 13 de 1975).

En las dos hipótesis anteriores, la ley exige que el documento sea diligenciado por el tenedor siguiendo estrictamente las instrucciones impartidas por el suscriptor, aunque no contempla los requisitos que las mismas deben reunir. A fin de establecerlos, se debe distinguir si se trata de negocios jurídicos entre particulares o de negocios jurídicos con entidades vigiladas.

En el primer caso, las instrucciones pueden ser verbales o por escrito, pues el artículo 622 no distingue. Si son verbales, el problema es probatorio, amén de que frente a terceros —por razón del principio de autonomía— el título llenado contrariando las instrucciones del creador produce plenos efectos cambiarios.

En el segundo caso, la Superintendencia Bancaria, en ejercicio de sus facultades legales, expidió las circulares 075 de 1978 y 010 de 1985 exigiendo que las instrucciones reúnan determinados requisitos encaminados a rodear de mayor seguridad la transacción. En la circular 075 de 1978 señaló que las instrucciones deben constar siempre por escrito cuando se expidan pagarés con espacios en blanco, en tanto que en la circular DB-010 de 1985 indicó que "además de las que los clientes consideren necesario introducir", el escrito de instrucciones deberá contener las siguientes:

1. Clase de título.
2. Identificación plena del título sobre el cual recaen las instrucciones.
3. Elementos generales y particulares del título, que no consten en éste, y para el cual se dan las instrucciones.
4. Eventos y circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el título".

2. Consecuencias que se generan por no cumplir con tales reglas

Para establecer las consecuencias que se derivan de no cumplir las instrucciones que ha impartido el suscriptor al entregar el título con espacios en blanco o el papel en blanco firmado y entregado con la intención de convertirlo en título, debe distinguirse si la transacción se ha efectuado entre particulares o con un establecimiento de crédito.

En ambos casos el llenar el documento contrariando las instrucciones respectivas puede dar lugar a responsabilidades tanto civiles como penales. Así se prevé expresamente en la circular 010 de 1985 en relación con los establecimientos de crédito. De manera que si el tenedor del título no lo diligencia de acuerdo con las indicaciones expresas del creador responderá ante éste no sólo por los perjuicios que con ello genere, sino penalmente por la conducta delictual en que incurra.

En punto de la responsabilidad penal, el código derogado (Ley 95 de 1936) advertía en su artículo 415 que “El que en una hoja firmada en blanco que se le haya confiado para determinado fin, escriba cosas contrarias a lo convenido, capaces de producir efectos jurídicos en perjuicio de quien la firmó o de un tercero, estará sujeto a prisión de seis meses a tres años y multa de diez a mil pesos”.

Hoy, aunque en el Código Penal vigente no aparece expresamente configurada tal conducta con el nombre de falsedad, tanto la Corte Suprema de Justicia como los tratadistas han aceptado que el abuso de la firma en blanco se traduce en acto ilícito penal.

Así, el Máximo Tribunal en sentencia de agosto 15 de 1984 expresó: “Resulta indiscutible que el delito de abuso de firma en blanco que existía en el Código Penal anterior como hecho ilícito contra el patrimonio quedó subsumido en el actual Código dentro de las infracciones contra la fe pública, esto es, como falsedad simple y llanamente”.

A su turno, la doctrina afirma que “el que llene tales títulos deberá hacerlo cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas al efecto, por el girador, pues de lo contrario comete el delito de falsedad” (Antonio Arcila Gómez. El Cheque, la Letra de Cambio y el Pagaré. Sus implicaciones civiles y penales. Editorial Ecoe. Bogotá. 1986. Pág. 72).

Adicionalmente, en el caso de los establecimientos de crédito, sumada a la responsabilidad civil y penal, existe una responsabilidad administrativa por la inobservancia de lo dispuesto en la circular 010 de 1985, conducta que ha sido

calificada por esta Superintendencia, al tenor del artículo 47 de la Ley 45 de 1923, como práctica no autorizada e insegura y, en consecuencia, las entidades que infrinjan dicho instructivo serán objeto de las sanciones previstas en nuestro ordenamiento positivo, cuando a ello hubiere lugar (artículo 30., numeral 21 del Decreto 1033 1991, en concordancia con los artículos 22 y 23 del decreto 2920 de 1982).

(...)

13. JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DEL DISTRITO JUDICIAL DEL PAÍS

13.1 Nociones preliminares

Al analizar los distintos fallos proferidos por los tribunales del país encontramos que el aspecto más debatido a este nivel es el referente a la prueba de las instrucciones.

Al respecto, la generalidad de los tribunales se han pronunciado en el sentido de que cuando un título con espacios en blanco o totalmente en blanco es llenado, corresponde a quien quiera discutir la circunstancia de que el documento no se completó conforme a las instrucciones recibidas o no lo fue por el tenedor legítimo, demostrar su aserto. Por este camino, como en su oportunidad anotábamos, se niega a la manifestación del respectivo excepcionante el carácter de negativa indefinida, con el valor probatorio que le confiere a ésta la última parte del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Más aún, en algunas de las sentencias se sostiene que no se trata de una negativa indefinida, porque se basa en hechos concretos, susceptibles de ser demostrados, como es el contenido mismo de las instrucciones, lo cual implica confundir la negativa sobre existencia de instrucciones con la afirmación positiva contraria.

Sólo en la sentencia de junio 26 de 1985 del Tribunal de Bogotá, se encuentra referencia expresa al artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, norma que en nuestro criterio debe tenerse en cuenta, toda vez que luego de la reforma procesal del año 1989 (Decreto 2.282) se presume auténtica la firma de todos los títulos-valores, circunstancia que antes solamente ocurría respecto de algunos de ellos expresamente enumerados. Aun cuando aquí no se puede hablar que se haya “declarado su autenticidad”, es evidente que esta declaración es innecesaria por virtud de la presunción antes expresada. Por lo demás, lo que se dice de los documentos respecto de los cuales se ha producido una declaratoria de esta clase, debe predicarse de aquellos que no la requieren por cuanto la misma viene traída

por la ley. En últimas, si se encontrare que no se trata de dos hipótesis totalmente iguales, cabría aplicar la analogía a la cual se refiere el artículo 50. del mismo Código de Procedimiento Civil.

Extraña en nuestro parecer resulta la sentencia del Tribunal de Bogotá de fecha 28 de mayo de 1989, por cuanto de su contexto se colige que para el caso de los títulos con espacios en blanco no es necesario probar las instrucciones mientras que para el caso de los títulos absolutamente en blanco éstas sí deben ser debidamente probadas.

En nuestro criterio, del texto del artículo 622 del Código de Comercio no se puede derivar una conclusión como la anterior toda vez que esto conduciría a otorgarle a la norma un mayor alcance del que realmente tiene.

En efecto, el artículo 622 del Código de Comercio en ninguna parte establece consecuencias jurídicas distintas para las hipótesis contenidas en los incisos primero y segundo, circunstancia a que hicimos alusión en el capítulo 2.2 de esta revista.

Un pronunciamiento importante de resaltar es el contenido en esencia de noviembre 24 de 1986 del Tribunal de Ibagué el cual determina que las autorizaciones e instrucciones se imparten única y exclusivamente para completar los vacíos, mas no para modificar lo que ya se encontraba escrito en el texto del título en embrión. En nuestro criterio, la apreciación del Tribunal es correcta por cuanto los elementos incluidos inicialmente en el documento forman parte de su literalidad la cual debe ser respetada por posteriores tenedores. En este orden de ideas no se puede aceptar que una simple carta de instrucciones revoque total o parcialmente el texto preimpreso del título.

Pasando a otro punto, observamos que el pensamiento de los tribunales es coincidente en afirmar que los títulos en blanco sólo adquieren la calidad de título-valor en el momento en que son completados por el tenedor del instrumento. En este sentido, nuestra jurisprudencia participa del criterio que sobre este aspecto han expuesto la mayoría de los autores nacionales.

En una única providencia encontramos referencia expresa a la circulación de los títulos en blanco. Se trata de la sentencia del 21 de octubre de 1987 del Tribunal Superior de Valledupar, en la cual se sostiene la tesis de que los títulos-valores en blanco, cuando aún no se encuentran integrados pueden circular por endoso.

Manifestamos, como anteriormente lo hicimos, nuestra total conformidad con la

conclusión anterior por cuanto lo que justifica el régimen de los títulos-valores es la rápida circulación que deben tener esta clase de instrumentos.

Acoger la teoría de que los títulos en blanco aún no completados sólo pueden circular por el mecanismo de la cesión de derechos es desconocer la esencia del régimen cambiario, que consiste, repetimos, en facilitar la ágil circulación de los títulos-valores.

Otra sentencia que consideramos importante de resaltar es la proferida por el Tribunal de Bucaramanga en fecha 28 de febrero de 1986. En ella se hace alusión a un aspecto fundamental de esta problemática de los títulos en blanco cual es la operancia de la excepción de prescripción. A este respecto, el Tribunal se pronuncia en favor de la prescriptibilidad de los títulos en blanco, afirmando con buen aserto, que el término de prescripción, frente a un tercero tenedor de buena fe exenta de culpa comienza a correr desde la fecha que aparece escrita en el instrumento, aunque se hubiera expedido el título con este espacio en blanco y fuera llenado con posterioridad en contravención a las instrucciones del creador.

Decimos “con buen aserto” habida cuenta del principio de literalidad que informa a los títulos-valores y que hace necesaria una solución como la anterior.

Dignas de mención resultan las sentencias de octubre 16 de 1985 del Tribunal de Cúcuta y de septiembre 17 de 1981 del Tribunal de San Gil, las cuales tratan ampliamente el tema del endoso en blanco.

Frente a ellas, no consideramos necesario hacer ningún comentario adicional dado el buen sentido y la claridad con que los tribunales abordaron este problema por lo cual sólo nos resta remitirnos al análisis contenido en el capítulo 11 de esta publicación.

Un buen número de sentencias se pronuncian sobre el aspecto penal de los títulos-valores en blanco. Al respecto podemos afirmar que los tribunales del país tienen diversos criterios para calificar la conducta de mal completamiento de un título, no existiendo por ende, una tesis unificada sobre este tema.

El Tribunal de Bogotá, en sentencia de 28 de mayo de 1984, sostiene lo siguiente:

“En el evento de que tales espacios no se llenen con dicha formalidad (la formalidad a que se refiere el Tribunal son las autorizaciones o instrucciones impartidas por el creador del título), no puede decirse que el título sea falso (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil)”.

El concepto anterior requiere algunas explicaciones y comentarios.

Como bien sabemos todo título en blanco necesita para su complementación de instrucciones precisas de su creador, las cuales deben ser seguidas al pie de la letra por el tenedor en el momento de la integración del título.

La circunstancia de que el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil establezca una presunción de autenticidad de tales documentos, en nada impide que puedan ser tachadas de falsas, especialmente respecto del primer tenedor o beneficiario, quien, por conocer de primera mano el pacto de cobertura, está obligado a cumplirlo estrictamente al momento de completar los vacíos.

En caso de no integrar el título de conformidad con lo expresado por el suscriptor en las instrucciones, incurre en el delito de falsedad haciéndose acreedor a las respectivas sanciones penales. Igual solución podría predicarse frente al posterior tenedor que recibiese el título aún con espacios en blanco, por cuanto se encuentra obligado a averiguar el contenido de las instrucciones para completar el documento sujetándose estrictamente a la voluntad del suscriptor.

Por el contrario, frente a un tercero tenedor de buena fe exenta de culpa a quien el título llegue ya completo, no podría predicarse falsedad, por cuanto la ley establece que para él, el título es válido y efectivo pudiendo por ende, hacerlo valer como si se hubiera llenado conforme a las instrucciones.

Este mismo tribunal, en sentencia de diciembre 6 de 1983 consideró que en caso de presentarse falsedad del título ésta sería de tipo ideológico.

El Tribunal de Manizales aborda esta problemática desde la órbita del artículo 784 del Código de Comercio.

Así en sentencia de 21 de febrero de 1984, afirma que la falsedad no es oponible como excepción, por cuanto no está contemplada en el artículo 784 del Código de Comercio el cual tiene carácter taxativo.

Así mismo, la Corporación confunde dos situaciones distintas: la establecida por el artículo 784 No. 5 que se refiere a títulos completos *ab initio* y la derivada del mal completamiento del título expedido con espacios en blanco. En efecto, el numeral 5o. del artículo 784 del Código de Comercio implica la existencia de raspaduras o enmendaduras en el texto mismo del título-valor, circunstancia que no se presenta frente a un título integrado en contravención a las instrucciones. Por esto en nuestro parecer resulta totalmente errado, como lo ha hecho el

Tribunal, tratar de encuadrar la conducta del mal completamiento del título en blanco en el No. 5 del artículo 784 del Código de Comercio, toda vez que este precepto regula una situación diferente.

Esperamos que con esta breve referencia a las tendencias jurisprudenciales de nuestros tribunales facilitemos la comprensión de los documentos jurídicos que a continuación relacionamos.

13.2 Documentos jurídicos

13.2.1 Documento jurídico No. 1

Título: Sentencia de diciembre 6 de 1983

Autor: T.S.D.J. de Bogotá

Magistrado ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros

Fuente: Artículo 622 Código de Comercio

Tesis: En materia de títulos con espacios en blanco y títulos en blanco, la simple afirmación de que el título fue llenado en contra de la voluntad del suscriptor no desvirtúa las instrucciones contenidas en el contrato causal para completar el instrumento.

Extracto literal:

(...)

Excepción de falsedad de la supuesta letra de cambio presentada como título

Aquí se centra el problema fundamental planteado para esta apelación, y debe entenderse la falsedad alegada, en cuanto el título fue llenado contra las instrucciones del girador, sin esperar a que se fijara el saldo a favor de una de las partes en forma amigable y directa o por medio del Tribunal de arbitramento, conforme al contrato. Aclaremos desde ahora que una cosa es llenar contra la voluntad del demandado y otra sin su consentimiento y conocimiento.

Para resolver el asunto es imperativo recurrir al texto del contrato suscrito por las partes y especialmente a las cláusulas pertinentes como la duodécima, cuyo tenor

es el siguiente: "Las ventas de productos de Bavaria al contratista serán de contado. No obstante Bavaria podrá otorgar al contratista un cupo o crédito representado por líquido, envases y canastas, CUYA GARANTIA Y TERMINOS DE AMORTIZACION SE ESTABLECERAN A JUICIO DE BAVARIA, PREVIA LA CONSTITUCION DE LA CORRESPONDIENTE GARANTIA A ENTERA SATISFACCION DE AQUELLA." (El subrayado es nuestro)...." ... DECIMAQUINTA... PARAGRAFO: cuando las ventas por parte de Bavaria al contratista se efectúen a crédito en desarrollo de la opción de que trata la cláusula duodécima, vencido el término que se concede al contratista para el pago de los créditos, el cual se determinará en las respectivas facturas, éste reconocerá a Bavaria un interés del 2% mensual sobre saldos insolutos a su cargo a partir de la fecha en que se causen tales saldos"....

Dos convenciones existen, pues, una que podría llamarse principal que es atinente al contrato de distribución para cuyos arreglos se previó el arbitramento y otra accesoria, distinta, no independiente pero conexas, pues el crédito sólo se otorga en razón de la preexistencia del contrato pero con normas reguladoras propias como por ejemplo con la garantía respectiva, concebida en forma y modo propios. Con vista en el contrato y en las declaraciones de los señores Carlos José Barrera Toloza y Raúl A. Buitrago, quedó establecido que la emisión del instrumento negociable obedeció a la necesidad de garantizar el crédito otorgado por Bavaria al contratista y éste de acuerdo con el mismo contrato debía garantizarse como en efecto se hizo y con las instrucciones previstas para el efecto.

¿En qué términos se otorgaba la garantía y por qué? En la forma prevista en el contrato y de acuerdo con la decisión de las partes ante la celebración del contrato de crédito. Al contrario, el excepcionante no probó fehacientemente que el título-valor hubiese sido llenado contraviniendo las instrucciones. Afirma simplemente que fue llenado contra su voluntad, pero ello no desvirtúa los términos del contrato que contiene la voluntad negocial, la cual no puede sustituirse a posteriori unilateralmente, y si se llenó lo fue con su conocimiento y consentimiento expuestos oportunamente en el mismo contrato. Así es impropio afirmar que hubo falsedad ideológica, y la excepción está condenada a no prosperar.

La firma de documentos en blanco no sólo está autorizada sino prevista y vigilada por la ley comercial, la cual considerada hasta entonces carece de los elementos necesarios para hacerse efectiva según su naturaleza de título ejecutivo, pero una vez llenada como se previó y para los efectos previstos, ella adquiere su plenitud y presta mérito ejecutivo esto es, produce la totalidad de los efectos que la ley confiere.

13.2.2 Documento jurídico No. 2

Título: Sentencia de mayo 28 de 1984

Autor: T.S.D.J. de Bogotá - Sala Civil

Magistrado ponente: Necty Gutiérrez de Murcia

Fuente: Artículos 622 Código de Comercio, 270 Código de Procedimiento Civil

Tesis: En el título con espacios en blanco, existe plenamente el contrato cambiario y entendiéndose auténtica su firma el título es plenamente válido. Por el contrario, para que un título en blanco tenga validez, se requiere probar la autorización dada por el suscriptor. En el primer caso, no se configura falsedad aunque el título sea llenado sin seguir las instrucciones dadas por el creador, pero corresponde al excepcionante probar los hechos contrarios sin que ello pueda perjudicar al tenedor de buena fe exenta de culpa. Las condiciones del negocio causal no siempre coinciden con las instrucciones del creador del título.

Extracto literal:

(...)

a) Una de las condiciones de los títulos-valores es la "literalidad" que significa, como lo dice el tratadista Luis S. Hello Kattah (De los títulos-valores en general pág. 34) en que los derechos cambiarios no pueden restringirse o ir más allá de lo estrictamente consignado por escrito en el título, es decir, se rigen exactamente de acuerdo con su tenor literal, lo cual contribuye a darle valor y eficacia a la circulación de los títulos-valores. Ahora bien, esta literalidad, tratándose de títulos abstractos como lo son las letras de cambio, esto es, que no llevan incorporada la causa que los originó, luego se entiende que son auténticas lo cual no obsta para que, en caso de que se hubieran extendido, dejándose espacios en blanco, el tenedor no tenga la autorización legal para llenarlos de acuerdo con el contrato, sin que por ello pierda su eficacia. En el evento de que tales espacios no se llenen con dicha formalidad, no puede decirse que el título sea falso. (Artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).

El artículo 622 del Código de Comercio, supone dos situaciones diferentes: la del título en el cual se han dejado espacios en blanco, caso en el cual el tenedor legítimo puede llenarlos, conforme a las instrucciones del suscrito (sic) que los haya dejado (esto es, del creador del título) antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora; y el caso de un papel en blanco en el cual se impone una firma y luego es llenado. En el primer caso existe plenamente el contrato cambiario y entendiéndose auténtica su firma, el título es plenamente válido. En este último caso se debe probar la autorización para la validez del título.

En este caso no se trata de que se haya firmado un papel en blanco, sino que en la letra de cambio se dejaron algunos espacios, pero el título tiene validez, luego no se configura la falsedad. Sólo que la carga de la prueba de los hechos contrarios corresponde al excepcionante. Dice el tratadista citado, alrededor del tema estudiado: "Lo anterior significa para el demandado que proponga la excepción de no haberse llenado el título en blanco o con espacios en blanco de conformidad con las autorizaciones dadas, la carga de la prueba en contrario para que aquella prospere (*onus probandi incumbit actori; reus in excutiendo fit actor*). Sin embargo la prueba en contrario no perjudica al tenedor de buena fe exenta de culpa, quien podrá hacer valer el título como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas (artículo 622, inciso 3o. del Código de Comercio). La buena fe de parte del demandante se presume y no existe prueba de su mala fe, luego contra él no prospera la excepción propuesta.

Además, analizadas las pruebas aportadas al proceso, no se observa que el demandante hubiera desobedecido la instrucción de cómo llenar las letras, lo cual no se deduce simplemente de los hechos ocurridos antes de llenarse dichos espacios en blanco. Por tanto, lo que ha debido probarse es la "instrucción o la orden" del creador de la letra para llenar dichos espacios, en forma expresa" lo que no fue objeto de prueba en forma alguna, y no puede inferirse de las condiciones del contrato, que no siempre coinciden con tales instrucciones.
(...)

13.2.3 Documento jurídico No. 3

Título:	Sentencia de junio 26 de 1985
Autor:	T.S.D.J. de Bogotá - Sala Civil
Magistrado ponente:	Mercedes Labrador de Ospina

Fuente: Artículos 622 Código de Comercio, 270 Código de Procedimiento Civil

Tesis: Se presume cierto el contenido de los títulos firmados en blanco o con espacios en blanco, una vez que se haya reconocido la firma o haya sido declarada su autenticidad; por tanto, corresponde al demandado, como excepcionante, demostrar lo contrario.

Extracto literal:

(...)

El artículo 622 del Código de Comercio enseña:

“Si en el título se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora”.

De consiguiente es jurídicamente admisible que quien suscriba un título con espacios en blanco, y lo es que el tenedor los llena para ejercer su derecho; eso sí de llenarlos conforme a las instrucciones. Pero ¿a quién corresponde demostrar que se llenaron o no debidamente? Para absolver esta pregunta viene en auxilio la disposición contenida en el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil; Se presume cierto el contenido del documento firmado en blanco o con espacios sin llenar, una vez que se haya reconocido la firma o declarada su autenticidad”. (Se subraya). Si pues se presume cierto el contenido corresponde indudablemente al demandado como excepcionante o contradictor, demostrar en contrario.” (Sentencia Tribunal Superior de Bogotá. 25-X -82. Magistrado doctor Carlos Guillermo Rojas Vargas).

(...)

13.2.4 Documento jurídico No. 4

Título:	Sentencia de noviembre 2 de 1990
Autor:	T.S.D.J. de Bogotá - Sala Civil
Magistrado ponente:	María Teresa Plazas Alvarado
Fuente:	Artículos 622 Código de Comercio, 177 Código de Procedimiento Civil
Tesis:	En materia de títulos en blanco y títulos con espacios en blanco, los requisitos que deben cumplirse para llenar dichos espacios son los siguientes: 1. Que lo haga el tenedor legítimo; 2. Deben tenerse en cuenta las instrucciones dadas por el creador del título; y 3. Que se efectúen antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. La carga de la prueba de no haberse llenado el título de acuerdo con las instrucciones corresponde al creador del título, por ser él quien invoca el derecho.

Extracto literal:

(...)

De acuerdo con el contexto del inciso 1o. del artículo 622 de la ley comercial que nos gobierna si en el título-valor se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo puede llenarlos, conforme a las instrucciones impartidas por el suscriptor que los haya dejado, antes de presentarse el título para el ejercicio del derecho en él incorporado. Son varios, pues, los requisitos que deben cumplirse para llenar los espacios dejados en blanco por quien suscribe un título-valor; son ellos, que lo haga el tenedor legítimo, teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el suscriptor o girador y que se efectúen antes de presentarla para el ejercicio del derecho con él incorporado.

Es obvio, que si suscribo un título-valor con espacios en blanco y el mismo se llena sin atender las instrucciones impartidas por el suscriptor, quien lleva la carga de probar el hecho es el girador y no su tenedor, por ser aquél quien invoca el derecho, según lo preceptuado sobre el particular por el artículo 177 de nuestro

estatuto procesal civil, ya que no se trata de hechos notorios ni afirmaciones o negaciones indefinidas.

(...)

13.2.5 Documento jurídico No. 5

Título: Sentencia de febrero 28 de 1986

Autor: T.S.D.J. Bucaramanga - Sala Civil

Magistrado ponente: Libardo García Romero

Fuente: Artículos 621, 622, 647 y 835 Código de Comercio

Tesis: Por fuerza del principio de literalidad que informa los títulos-valores, la prescripción de la acción cambiaria derivada del cheque creado con fecha en blanco, frente a un tercero tenedor legítimo y de buena fe, comienza a contar desde la fecha que aparece escrita en el instrumento. Entre las partes inmediatas del cheque cabe de manera amplia la proposición de fechas configurativas de excepciones extracontractuales.

Extracto literal:

(...)

Lo primero que debe establecerse, para resolver el tema de la controversia, es la fecha del cheque. Para esto nada mejor que transcribir parte de lo afirmado por esta misma sala en oportunidad anterior:

“Valga sí agregar, para salirles al paso a eventuales especulaciones, que, por fuerza del principio de la literalidad que informa a los títulos-valores, la fecha del cheque es aquella estampada en el propio instrumento, y que sólo en ausencia de la respectiva mención cabe acudir a la regla supletiva consagrada por el Código de Comercio en el artículo 621, inciso último. El texto del artículo 717 tiene como finalidad la de permitir que el tenedor de un cheque posdatado obtenga la satisfacción del derecho allí incorporado al presentarlo al banco, aunque esto se cumpla antes de la posfecha, pero no trasciende sobre el tenor del documento al punto de borrar del mismo lo escrito por el librador, pues, de asignársele un alcance semejante a dicha norma, se atentaría contra la seguridad de los terceros

de buena fe que basados en la literalidad del título lo adquieren mediante endoso, y de hecho se quebraría gravemente la negociabilidad que el legislador ha previsto para los títulos-valores "(Ejecutivo de Honorarios Oliveros vs. Arturo Vega Tabera adelantado en el Juzgado 3o. Civil del Circuito de Bucaramanga, sentencia de segunda instancia fechada el 16 de noviembre de 1985)".

Entonces, para efectos de la presente relación procesal, la fecha del cheque de autos es la que allí aparece, aunque el girador del instrumento diga que cuando lo entregó el espacio correspondiente se dejó en blanco. Al tenedor del referido título-valor, cuya buena fe se presume, (artículo 835 del Código de Comercio) y no ha sido desvirtuada por el obligado de autos, no le afecta el hecho de que persona distinta al librador "Haya colocado en el título una fecha distinta a la de su entrega, salvo el caso de probarse que quien llenó el espacio fue el endosatario, y/o que este último estaba enterado de que el cheque lo entregó el librador al beneficiario el día 7 de febrero de 1985.

Pero lo cierto es que el demandado de autos ni siquiera ha dicho que el endosatario haya obrado en tal forma, y además en el expediente no se halla la más leve prueba de que esto hubiese tenido ocurrencia, luego el presunto o real hecho de que el cheque fue girado sin fecha el 7 de febrero de 1984 carece de significación frente al tenedor legitimado por endoso.

Si el litigio se hubiera trabado entre las partes inmediatas del cheque, esto es, girador y beneficiario, distinta sería la situación y por tanto otras pautas que regirían las alegaciones y su prueba, dado que entre ellos sí cabría de manera amplia y no limitada por la literalidad la proposición de hechos que configuran excepciones extracartulares, o causales, o las relativas con la emisión del título, etc.

Por lo demás, el demandante de autos se halla amparado por lo dispuesto en el inciso último del artículo 622 del Código de Comercio.

(...)

13.2.6 Documento jurídico No. 6

Título: Sentencia de abril 15 de 1975

Autor: T.S.D.J. de Cúcuta - Sala Civil

Magistrado ponente: Hernando Camargo

Fuente: Artículos 622, 784 numeral 5 Código de Comercio;
artículo 177 Código de Procedimiento Civil

Tesis: La alteración del texto de un título-valor debe consistir en un cambio o mutación que cause daño al suscriptor del título en cuanto implica modificación de los elementos o modalidades de la obligación. La carga de la prueba relativa a la circunstancia de haber llenado el espacio en blanco correspondiente a la fecha de manera distinta a las instrucciones dadas por el girador.

Extracto literal:

(...)

IV. Respecto de la alteración del texto del título, como lo dice la doctrina, debe consistir en un cambio o mutación que le hubiese causado un daño al suscriptor del título, en cuanto implica alteración de los elementos o modalidades de la obligación.

Los extremos de esa alteración o cambio en los elementos o modalidades de la obligación recogida en el título, era la carga procesal que le imponía al ejecutado el artículo 177 del código de los ritos, carga que ciertamente no cumplió, por cuanto de la experticia parcial se infiere con certeza que no “existe alteración alguna en la integridad material de la letra de cambio”. Y si se acepta como evidente que la fecha de creación fue impuesta por el ejecutante, no se observa prueba alguna que contradiga que ese espacio dejado en blanco no fue llenado siguiendo la autorización que de acuerdo con el artículo 622 del Código de Comercio le confería la ley, razón suficiente para predicar que la excepción no puede prosperar.

(...)

13.2.7 Documento jurídico No. 7

Título: Sentencia de marzo 1o. de 1984

Autor: T.S.D.J. de Cúcuta - Sala Civil

Magistrado ponente: Mario Vásquez Rodríguez

Fuente: Artículos 622, inciso 3, 784 numeral 12, 835 Código de Comercio; artículo 177 Código de Procedimiento Civil

Tesis: No prospera la excepción causal derivada de la forma como se llenaron los títulos-valores en blanco o con espacios en blanco, —cuando el suscriptor del título no prueba que el tenedor no lo llenó conforme a sus instrucciones y— cuando no desvirtúa la presunción de que dicho tenedor es de buena fe exenta de culpa.

Extracto literal:

(...)

Afirma la excepcionante que el referido cheque fue “dado en confianza por la ejecutada para garantizar la obligacion de un tercero”, y que (...) recibió de parte de la señora (...) la suma de (...) por concepto de intereses “por los meses de abril y mayo del citado año a razón del 4% mensual, lo que en términos numéricos arroja la cantidad (...) por el mes es decir, lo cobrado por (...) por dos meses de intereses, lo cual se acredita con el recibo que le anexo”.

Esto último prueba, según la parte demandada, que (...) era tenedor del cheque desde marzo de 1981 que fue la época en que lo giró la señora (...) pero sin fecha y sin indicar el lugar de su creación.

Deduce de todo lo anterior que (...) llenó con su propia letra y sin autorización de la demandada el cheque en lo referente a la fecha y lugar.

Para demostrar los hechos precedentes se trajeron a los autos los talonarios de la chequera respectiva, y un recibo suscrito (...) por (...) acreditando el pago de la suma (...) por concepto de intereses por los meses de abril y mayo inclusive, a la rata del 4% mensual.

Dicho documento fue reconocido (...) tanto en su contenido como en su firma (...)

Así quedó evidenciado que el cheque en cuestión fue entregado por lo menos en marzo de 1981 y como la fecha puesta en él es la del (...) dicho año, fácil es colegir que cuando se entregó quedó en blanco el espacio correspondiente a esa fecha. Esta última circunstancia la acepta el señor procurador de la ejecutante.

La ley mercantil regula la emisión de títulos con espacios sin llenar en el artículo 622 del Código de Comercio que dice: “si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora...”.

Se discute en el caso de autos que el espacio relativo a la fecha se llenó (...) sin autorización de (...) y aquél, a su vez, afirma a través de su procurador que el título fue entregado por ésta con claras instrucciones “sobre la forma que debía ser completado y exigido, porque de otra manera es imposible justificar la entrega de un título-valor que nunca podría ser exigido y mucho más descabellado que alguien lo acepte como pago...” (...)

Para dilucidar el punto recuérdase que según conocido principio de la ciencia probatoria, aquel que avanza una proposición contraria a la apariencia debe justificarla.

De consiguiente, es contrario a la apariencia la afirmación de que (...) llenó el espacio en blanco relacionado con la fecha del cheque “sin autorización de (...)”.

Obsérvese que en la demanda de excepciones no se señalan las instrucciones que al respecto dio la creadora del título al beneficiario de éste.

No es verosímil que se gire un cheque sin la intención de pagar la suma que en él se señala. Además, la misma parte ejecutada se encargó de demostrar que pagó intereses del 4% mensual sobre la cantidad escrita en aquel título-valor, contradiciendo su afirmación según la cual el cheque se entregó en confianza para garantizar la obligación de un tercero.

Ni se describe la obligación ni se descubre al tercero, explicándose las cosas de una manera misteriosa que no corresponde a la lealtad que las partes deben tener con la jurisdicción cuando someten a esta determinada controversia.

A lo anterior agrégase el hecho de que la señora (...) supo que el primer beneficiario había endosado el cheque y sin embargo no dio orden de no pago, como hubiera sido explicable si el instrumento tenía el objeto por ella mencionado. Y no sólo se abstuvo de dar esa orden sino que además pagó intereses explicando esto último como la consecuencia de un chantaje de que era víctima y para evitar problemas a su esposo que en ese tiempo trabajaba precisamente en el F-2.

El suscriptor de un título-valor, preceptúa el artículo 626 del Código de Comercio, "Quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia".

Con base en este precepto, en el contenido del artículo 625 ibídem que previene que toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título-valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación; y en la presunción legal de buena fe aun la exenta de culpa de que trata el artículo 835 del Código de Comercio, para la sala no está demostrado ni que el título-valor presentado por el demandante se suscribió sin contraprestación cambiaria (artículo 639), ni que el espacio en blanco relacionado con la fecha fue llenado contrariando las instrucciones del suscriptor.

(...)

13.2.8 Documento jurídico No. 8

Título: Sentencia de diciembre 13 de 1984

Autor: T.S.D.J. de Cúcuta - Sala Civil

Magistrado ponente: Juan José García Rivera

Fuente: Artículos 622, 626 Código de Comercio

Tesis: El suscriptor de un título-valor con espacios en blanco se obliga conforme al tenor literal del mismo, siempre que su tenedor llene dichos espacios atendiendo a las instrucciones dadas por el suscriptor.

Extracto literal:

(...)

Existe un aspecto que podría dar lugar a duda en cuanto al valor real del pagaré aportado, ya que el apoderado de la parte actora al contestar las excepciones expresa: es cierto que en un primer momento el capital fue por la suma de (...) pero debido al incumplimiento de los señores (...) se llenó el pagaré por ellos firmado en blanco por la suma de (...) que incluía los intereses causados a su vencimiento y demás gastos considerados por la entidad que represento", agregando el excepcionante en su alegato de instancia que no existe prueba por parte del ejecutante en relación con las instrucciones que se le hubiesen dado para

llenar el título-valor conforme lo autoriza el artículo 622 del Código de Comercio y concluye aceptando la ejecución en suma de (...) exigible desde el (...) y que se reforme la sentencia apelada despachándose en forma favorable las peticiones de la demanda.

Lo anterior conlleva la prueba referente al lleno que hizo la parte actora del pagaré base de recaudo ejecutivo sin que medie la prueba de haberlo hecho conforme lo autoriza el artículo 622 del Código de Comercio, estando muy claramente confesada tal situación por la parte actora al así expresarlo y determinar la suma exigible en (...) tal como concuerda la parte excepcionante.
(...)

13.2.9 Documento jurídico No. 9

Título:	Sentencia de julio 26 de 1985
Autor:	T.S.D.J. de Cúcuta - Sala Civil
Magistrado ponente:	Mario Vásquez Rodríguez
Fuente:	Artículo 654 del Código de Comercio
Tesis:	Para que el tenedor de un título endosado en blanco pueda hacerlo efectivo debe cumplir el requisito de llenar el endoso con su nombre o el de un tercero antes de la presentación del título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora.

Extracto literal:

(...)

Aconteció que el juzgado, al examinar una vez más el pagaré que se presentó como título de recaudo ejecutivo, halló que la Sociedad Santander Motores Cía. Ltda., beneficiaria del título lo endosó en blanco y la compañía demandante no cumplió la exigencia legal contenida en el artículo 654 del Código de Comercio que dice: “El endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma del endosante. En este caso, el tenedor deberá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora”.

Sobre la necesidad de cumplir tal requisito para que el demandante esté legitimado la sentencia que se revisa a través del recurso de alzada reproduce importantes conceptos de tratadistas nacionales que se han referido a tal punto.

El doctor Hernando Trujillo Calle advierte sobre el particular que “cuando el endoso es en blanco, a pesar de que la sola firma es suficiente como lo dice el artículo 654, deberá llenarse el endoso con el nombre del tenedor o el de un tercero antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora...” (De los títulos valores, Tomo I, Parte General, pág. 122).

En el mismo sentido se pronuncia el doctor Ramiro Rengifo: “Tampoco es necesario el nombre del endosatario. Cuando éste falta la ley considera un endoso en blanco. En este caso, lo único que se requiere es que al momento de hacer efectivo el título se ponga el nombre de la persona que cobra (artículo 654)” (La letra de cambio y el cheque, pág. 47).

Igual concepto expresa el doctor Eugenio Sanín Echeverry en su obra Títulos valores, págs. 80 y 81.

Pues bien, si el pagaré sub-examen tiene un endoso en blanco, como lo cree el juzgado, no fue llenado como lo exige el artículo 654 del Código de Comercio. (...)

13.2.10 Documento jurídico No. 10

Título: Sentencia de octubre 16 de 1985

Autor: T.S.D.J. de Cúcuta - Sala Civil

Magistrado ponente: Evelio Mora Gutiérrez

Fuente: Artículo 654 del Código de Comercio

Tesis: El endoso en blanco se convierte en especial al momento de cobrarse el título, sin que ello implique cambio de su ley de circulación. Para efectos de legitimación se entiende que es el tenedor legítimo del título quien lo posee conforme a su ley de circulación, y es éste quien aparece como endosatario. El título a la orden endosado en blanco puede circular por entrega hasta el momento de su cobro.

Extracto literal:

(...)

Se argumenta en favor de la primera excepción que la parte demandante carece de legitimación para cobrar el valor del título porque no es su tenedor legítimo, ya que el endoso efectuado a su favor no fue llenado como lo ordena el artículo 654 del Código de Comercio.

Enseña esta norma que el endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma del endosante. En este caso, el tenedor deberá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora.

No se discute, por elemental, que el pagaré aportado a la demanda como base de la acción ejecutiva, es un título a la orden, según la definición contenida en el artículo 651 del Código de Comercio.

Pues bien, en oportuna cita consignada en la providencia apelada, sostiene el doctor Bernardo Trujillo Calle que “el endoso en blanco ha de convertirse en especial al momento de cobrarse el título, lo que no es, como erróneamente lo han creído algunos, un modo de cambiar la ley de circulación, pues el instrumento a la orden debe ser siempre negociado por endoso para conservar su carácter que es como la huella de su itinerario. Ese título endosado en blanco puede sin embargo, circular por entrega hasta el momento de su cobro, en que para efectos de legitimación, se entiende que es su tenedor legítimo quien lo posee conforme a su ley de circulación, poseedor que es precisamente quien aparece señalado como endosatario”. (Subrayó la Sala).

Confrontada aquella norma y este concepto doctrinario con el título-valor que se cobra a través de esta ejecución, se advierte que ciertamente el demandante no es su tenedor legítimo porque el endoso en blanco que allí aparece, no fue llenado a su favor antes de presentarlo para el ejercicio del derecho que en él se incorpora, o para decirlo en palabras del tratadista, Crédito Automotriz S. A. no “aparece señalado como endosatario”.

De ahí que, por ser manifiestamente contraria al sentido de la norma, deba desecharse la interpretación que la parte semejante le da a la expresión “llenar”, pues no se remite a dudas que sólo se da cabal cumplimiento al artículo 654 cuando además de la firma del endosante se inserta el nombre del endosatario.

En tal circunstancia, mal puede sostenerse que el demandante se encuentre legitimado para incoar esta acción ejecutiva, porque la deficiencia del endoso le impide ostentar la calidad de tenedor legítimo del título.

En consecuencia, debe predicarse que Crédito Automotriz S. A., carece de legitimación para obrar por activa, y si este examen es necesario efectuarlo en todo proceso, aun oficiosamente, porque constituye una condición de la acción y no un presupuesto procesal, como lo ha sostenido reiteradamente la Sala, con mayor razón procede su estudio cuando se formula a través de una excepción, como en el caso que nos ocupa.

(...)

13.2.11 Documento jurídico No. 11

Título: Sentencia de marzo 29 de 1989

Autor: T.S.D.J. de Cúcuta - Sala Civil

Magistrado ponente: Evelio Mora Gutiérrez

Fuente: Artículos 620, 621, 622, 713 Código de Comercio

Tesis: Cuando el cheque no tiene fecha, cualquier tenedor puede llenar este espacio en blanco, debiendo para ello ajustarse a las instrucciones dadas por el girador, sin que por el hecho de la omisión, este título-valor, se vea afectado en cuanto a su validez.

Extracto literal:

(...)

El cheque es un título eminentemente formal, de acuerdo con el mandato obtenido en los artículos 620, 621 y 713 del Código de Comercio, lo que constituye su molde jurídico, pues, sólo cuando esa forma legal en su exigencia mínima ha sido cumplida, nace la obligación cambiaria según la declaración cartular y que requiere ser cumplida para que con la creación se indique que se trata de un título-valor en su especie denominado "cheque".

A guisa de ejemplo permítasenos citar entre otros, el nombre del banco librado; la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero; la mención del

derecho, en que el título se incorpora; la indicación de ser pagadero a la orden o al portador; la firma de quien lo crea; el lugar de expedición; la fecha de expedición.

La fecha en el cheque tiene su razón de ser, por cuanto la función esencial de este título valor, es la de servir de medio de pago en sustitución de la moneda, tanto así es, que por ello es siempre pagadero a su presentación y cualquier anotación en contrario se tendrá por no escrita, y porque además, a partir de ella se cuentan los plazos en que han de presentarse los cheques ante el librado para su pago y para determinar también, la capacidad del librador al momento de su creación, dato que desempeña papel importante en el fenómeno de la caducidad.

En caso de que la fecha sea omitida, es decir, cheque en blanco o incompleto, se sabe, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 622 ibídem, que cualquier tenedor pueda llenar ese espacio en blanco, esto es, colocándole la fecha sin que por el hecho de esta omisión el cheque se vea afectado en cuanto a su validez, pero esa facultad otorgada al tenedor, no es ilimitada, ya que, debe ajustarse a las instrucciones dadas por el suscriptor, de acuerdo con la disposición de la ley mercantil antes citada.

Conforme al estribo fáctico de la excepción, se plantea la situación referida, por cuanto se argumenta que los cheques presentados como condición de procedibilidad de esta acción ejecutiva, fueron girados sin fecha y que su tenedor beneficiario, llenó ese espacio en blanco para poder ejercer el derecho que en ellos se incorporó pero, sin tener en cuenta las instrucciones del girador.

(...)

13.2.12 Documento jurídico No. 12

Título:	Sentencia de noviembre 24 de 1986
Autor:	T.S.D.J. de Ibagué - Sala Civil
Magistrado ponente:	Euclides Roa Escobar
Fuente:	Artículos 621, 622, Código de Comercio
Tesis:	El título-valor en blanco o con espacios en blanco y la carta de autorización para completarlo forman una unidad jurídica. Por ende, su tenedor legítimo está autorizado para llenar los espacios en blanco y no

otros, toda vez que las instrucciones son específicas para completar lo vacío y no lo que ya está satisfecho.

Extracto literal.

(...)

Ante todo; advierte la Sala que el pagaré, cuya proforma fue firmada en blanco, hace un todo unitario con la carta de autorización del deudor para ser llenada por el Banco, carta que tiene fecha 17 de mayo de 1975 y que para el Tribunal es la data de la suscripción del pagaré a la vista, llenado el 21 de septiembre de 1983, en virtud a que a esta deducción se llega, no sólo por el contenido e íntima relación existente entre la misma carta de autorización (también en proforma hecha por el Banco) y el pagaré, sino porque éste fue firmado en blanco pero llenado de una vez en la proforma en lo concerniente al vencimiento "A la vista", con fecha interna del Banco de 19 de mayo de 1975, según los sellos del timbre y también por el papel sellado utilizado en la proforma correspondiente a esa época.

Este planteamiento es opuesto al que se deriva de un más acorde estudio y análisis de la situación objetiva a la luz de la preceptiva mercantil vigente y que se esboza así: el tenedor del título con la presentación para el pago fija la fecha de vencimiento y sólo desde tal fecha comenzará a correr el término de la prescripción extintiva, con la aclaración de que pasado un año desde la fecha de creación del documento sin que se haya presentado empieza a discurrir al lapso de la prescripción, que sería entonces de tres años, contados ellos a partir de la fecha de la emisión, es decir, que el Banco disponía de un año desde el 20 de mayo de 1975 para presentar el pagaré y que sólo a partir del 20 de mayo de 1976, un año después, comenzó a contarse el espacio prescriptivo de tres años, que culminaría el 20 de mayo de 1979 y la acción que de él dimanaba se hallaba prescrita para la época de la introducción de la demanda ejecutiva el 4 de octubre de 1983 y más aún la presente de 6 de junio de 1985. Este planteamiento descansa sobre el texto de los artículos 621 y 622 del Código de Comercio.

De otra parte, el artículo 622 del estatuto mercantil prescribe que "si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora...".

"Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título-valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el

título, de una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello...”.

“Si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas”.

Dedúcese entonces que la ley mercantil permite la creación y emisión de títulos-valores con espacios en blanco y que éstos pueden ser llenados por el tenedor.

Emerge aquí un punto álgido y fundamental cual es el de si no acepta lo escrito en la carta de autorización, o lo que desde un comienzo, 17 de mayo de 1975, ya estaba escrito en el pagaré, esto es, la obligación de Trujillo de pagar a la vista, la suma que ahora se cobra por la vía judicial.

Entiende la Sala, que es el mismo artículo 622 del Código de Comercio el que resuelve el dilema así expuesto cuando el precepto legal indica que el tenedor legítimo “Podrá llenar los espacios en blanco”, mas no los que ya están llenados, arguye el Tribunal, porque otra sería la situación, habida consideración de que solamente cuando existen espacios sin llenar concernientes con la total integración del título puede el tenedor anotarlos u ocupar tales espacios, puesto que, lógicamente también, la autorización del deudor es específica de llenar lo vacío y no lo que ya está satisfecho, dado que, para el caso presente no hay que perder de vista que la carta de Trujillo de 1975 es también una forma preimpresa que el mismo Banco redacta y condiciona a su arbitrio y que el deudor suscribe sin reparos, posiblemente obligado por la necesidad. Aceptar lo contrario de lo que se observa en el formato del pagaré llenado con la fecha de vencimiento a la vista desde 1975, sería tanto como aceptar de buen recibo la alteración del contenido del pagaré.

(...)

13.2.13 Documento jurídico No. 13

Título: Sentencia de febrero 27 de 1990

Autor: T.S.D.J. de Ibagué - Sala Civil

Magistrado ponente: Hernán V. Verástegui García

Fuente: Artículo 622, Código de Comercio

Tesis: En materia de títulos con espacios en blanco y títulos en blanco, la carga de la prueba se desplaza al suscriptor del título-valor, a quien corresponde demostrar que existe falsedad en el documento al no haber sido llenado de acuerdo con la convención.

Extracto literal:

(...)

El artículo 622 del Código de Comercio, establece que: “Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que les haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora...”.

Como se puede observar de la simple lectura de cada norma, se deduce que la carga de la prueba se desplaza al suscriptor del título-valor, a quien corresponde demostrar que no fue llenado de acuerdo con la convención y que por tanto, existe falsedad en el documento.

A este respecto expresa Bernardo Trujillo Calle

“La prueba de las instrucciones o de la autorización se hace por cualquier medio, como declaración de parte, juramento, testimonios de terceros, documentos indicios y cualesquiera otros procedimientos que sean útiles para la formación del convencimiento del juez, pues no hay, como cuando se trata de la representación para suscribir por otro un título-valor, una prueba especial, documental”. (Pág. 315, De los Títulos-Valores).

Desde el momento mismo en que fue entregado el documento con espacios en blanco por el suscriptor, se reconoce en el beneficiario la autorización para completarlo y entonces, lo que debe probar aquél es que el título no fue llenado conforme a las instrucciones. El excepcionante no aportó ningún medio de convicción en tal sentido y antes por el contrario, el testimonio de Graciela Sarmiento Manchola, expresa que la ejecutada Luz Dary Urueña, autorizó a la demandante para que llenara los espacios en blanco.

(...)

13.2.14 Documento jurídico No. 14

Título: Sentencia de noviembre 6 de 1990

Autor: T.S.D.J. de Ibagué - Sala Civil

Magistrado ponente: Hernán V. Verástegui García

Fuente: Artículo 622, Código de Comercio

Tesis: En materia de títulos-valores con espacios en blanco, la prueba de las instrucciones puede realizarse por cualquier medio, correspondiendo la carga probatoria a quien excepciona, puesto que se convierte en actor.

Extracto literal:

(...)

Establece el artículo 622, inciso 1o., del Código de Comercio, que:

“Si en el título se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora”. En este caso conforme lo expresa el doctor Bernardo Trujillo Calle:

“La prueba de las instrucciones o de la autorización se hace por cualquier medio, como declaración de parte, juramento, testimonio de terceros, documentos, indicios y cualesquiera otros procedimientos que sean útiles para la formación del convencimiento del juez, pues no hay, como cuando se trata de la representación para suscribir por otro un título-valor, una prueba especial, documental “(De los títulos valores. Parte general. (Pág. 315).

Es bien sabido el principio de Derecho Probatorio, que la carga de la prueba corresponde a quien excepciona, puesto que se convierte en actor. Y, siendo que, como se acaba de analizar, el ejecutado no ha logrado enervar la pretensión del demandante, deberá estimarse que el *a-quo* obró ajustado a derecho, al negar las excepciones formuladas.

(...)

13.2.15 Documento jurídico No. 15

Título: Sentencia de marzo 6 de 1991

Autor: T.S.D.J. de Ibagué - Sala Civil

Magistrado ponente: Jesús Antonio García Trujillo

Fuente: Artículo 622, Código de Comercio

Tesis: El título en blanco o con espacios en blanco es considerado "título-valor", sólomente cuando se han llenado sus espacios conforme a la intención de las partes. Sólo así, se hace efectivo.

Extracto literal:

(...)

De otra parte, el artículo 622 del Código de Comercio, admite la entrega de una letra en blanco para ser llenada luego conforme a acuerdo previo, llevando sí una firma prestada en forma cambiaria y siendo necesario para poderse hacer efectiva que se completen los espacios en blanco, pues mientras no esté completa no puede considerarse como título-valor. Por eso se dice, que la letra en blanco está destinada a ser llenada en el futuro y se debe a la intencionalidad de las partes.

Puesta una firma dentro de una letra de cambio ella vincula a su autor en forma autónoma o independiente, pues la ley reconoce eficacia cambiaria a la letra así presente alteraciones o falsificaciones.

Pues bien, en este asunto no se estableció claramente, que la letra se llenó por un valor distinto al acordado. Por el contrario, como bien se dijo, se entregó como garantía de los préstamos hechos por el ejecutante a Rodríguez Gualtero, y no se probó que la suma allí representada no obedeciera a dichos préstamos. Los planteamientos hechos al respecto por el excepcionante impugnante, no dejan de ser simples apreciaciones subjetivas y así habla "que al parecer había un valor que fue borrado", concluyendo al efecto, que sobre dicho borrón se colocó la suma de \$ 1.200.000.00, como deuda cuando era el valor del cheque que el mismo ejecutante le había entregado a Rodríguez Gualtero, sin aportarse elemento de juicio atendible que corrobore o pruebe tal conjetura.

(...)

13.2.16 Documento jurídico No. 16

Título: Sentencia de febrero 21 de 1984

Autor: T.S.D.J. de Manizales - Sala Civil

Magistrado ponente: Evelio Martínez Hurtado

Fuente: Artículo 784, Código de Comercio

Tesis: El lleno de un título-valor con espacios en blanco en contravención a las instrucciones dadas por el creador no constituye falsedad oponible como excepción.

Extracto literal:

(...)

La controversia suscitada con la formulación de las excepciones, gira alrededor del plazo en el cual los deudores debían cumplir su obligación, puesto que al paso que el pagaré demuestra un plazo de tres meses corridos a partir del 21 de abril de 1981 hasta el 20 de julio del mismo año y la parte acreedora confiesa que, a petición de la parte deudora, aceptó que ese plazo se prorrogue por 90 días más, es decir, hasta el 20 de octubre de ese mismo año, como así parece también en nota de hoja adicional al pagaré, la parte demandada por su parte alega que el plazo fue de un año que vencería en abril de 1983.

Es el caso entonces de determinar, a la luz de las pruebas que existen en el expediente cuál fue el plazo realmente pactado para deducir si el pagaré fue llenado de conformidad con dicho pacto o no; si el hecho de no haberse llenado el pagaré de acuerdo con lo acordado constituye falsedad y si evidentemente la petición fue o no antes de tiempo.

Se ha dicho que la literalidad mide la extensión y la profundidad de los derechos y de las obligaciones cartulares y además que lo no escrito ni obliga ni confiere derechos, todo lo cual se dice sin perjuicio de las defensas personales que pueden no constar en el escrito.

Sin embargo, cuando se trata de excepciones contra la acción cambiaria no proceden más que las establecidas como tales en el artículo 784 del Código de Comercio, pues así lo dispone la norma. Pero en esta disposición no está contenida la falsedad fundada en los hechos que narra la parte demandada que son los que al fin y al cabo deben tomarse en cuenta para la decisión, más que la denominación del medio exceptivo.

La excepción que en este orden enuncia el artículo 784 citado es aquella que toma como fundamento las alteraciones del texto del título tal como se aprecia en su numeral 5o.

En el caso concreto que nos ocupa no se observa en el pagaré presentado como título ejecutivo, ninguna enmendatura, ni raspadura ni alteración del texto. Es decir, se refiere esta excepción, como lo dice el doctor Bernardo Trujillo Calle en su obra De los Títulos-Valores, a la materialidad o literalidad del título.

Lo anterior conduce a afirmar que son hechos materializados en el título-valor, como huellas visibles de alteración, correcciones, raspaduras, añadiduras, etc., lo que puede constituir la excepción del numeral 5o. del artículo 784 del Código de Comercio y no los que puedan aducirse para una falsedad puramente ideológica.

Con lo anterior queremos decir que si la parte demandante llenó los espacios en blanco del pagaré, no pudo incurrir en falsedad, oponible como excepción, así no se hubiese ajustado a lo convenido.
(...)

13.2.17 Documento jurídico No. 17

Título: Sentencia de agosto 2 de 1982

Autor: T.S.D.J. de Medellín - Sala Civil

Magistrado ponente: Jaime Giraldo Serna

Fuente: Artículo 622, Código de Comercio

Tesis: La facultad que la ley otorga al tenedor de un título-valor para llenar los espacios en blanco no es ilimitada, pues deberá para ello ceñirse estrictamente a la autorización dada por el creador. De no cumplirse con las autorizaciones o instrucciones dentro de un término razonable, el título-valor no puede hacerse efectivo contra la persona o personas que formaron parte en el instrumento con autoridad a la entrega de éste en forma incompleta, hecha a la persona que lo llenó.

Extracto literal:

(...)

El Código de Comercio, al igual que la derogada ley de Instrumentos Negociables, reglamentan los títulos-valores llamados “empezados”, “principiados” o “incoados”, pues dice que cuando al instrumento le falta alguna expresión para la cual se ha dejado un espacio en blanco, la persona que lo posee puede llenar el claro. Pero esta facultad que se otorga al tenedor no es ilimitada, pues dice la ley: “deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello”.

Dice el doctor Víctor Cock que “si se no se llena de acuerdo con la autorización dada y dentro del término razonable, no puede hacerse efectivo contra la persona o personas, que aparece formaron parte en el instrumento con anterioridad a la entrega de él, en forma incompleta, hecha a la persona que lo llenó”. (Derecho Cambiario Colombiano No. 46).

(...)

13.2.18 Documento jurídico No. 18

Título: Sentencia de agosto 1º de 1984

Autor: T.S.D.J. de Medellín - Sala Civil

Magistrado ponente: Beatriz Quintero de Prieto

Fuente: Artículos 620, 621, 622, 709 Código de Comercio

Tesis: El pagaré cuya forma de vencimiento se hubiese dejado en blanco debe ser llenado antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. De lo contrario, el pagaré pierde su calidad de título-valor, por ser uno de los requisitos esenciales que la ley no suple.

Extracto literal:

(...)

Dice el artículo 620 del Código de Comercio: “Los documentos y los actos a que se refiere este título, sólo producirán los efectos en él previstos cuando **contengan las menciones** y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella los presuma...”. Se presenta como hipótesis probable, la de que cuanto atañe a la forma de vencimiento del pagaré se hubiera dejado en blanco, para ser llenado por su tenedor legítimo conforme al artículo 622 del Código de Comercio; pero entonces si tal fuera la hipótesis real, debió haberse llenado antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora.

No es admisible la pretensión cambiaria, incoada como ejecutiva, con este título-valor con espacios en blanco, ni siquiera con la interpretación que el ejecutante enuncia: **pagadera dentro del año de su expedición como "título-valor" a la vista**, situación que las legislaciones de otros países sí contemplan y que por lo mismo otros doctrinantes “extranjeros” pregonan, pero que en Colombia y a la luz de su ordenamiento positivo no es sostenible, porque exigiéndose como requisito “esencial” la indicación de la forma de vencimiento, y no supliendo la ley el silencio, no siendo entonces apenas un requisito “natural”, hay que decir **que el título no produce efectos, si le falta la mención**. Por cuanto atañe al pagaré, así reza el artículo 709 del Código de Comercio: El pagaré debe contener, además de los requisitos que establece el artículo 621, los siguientes: 4: **La forma de vencimiento**.

Es Hello Kattah, quien inspira y fundamenta con razones el aserto: “La ley al referirse a los títulos-valores en particular, con excepción de la carta de porte o conocimiento de embarque, la factura cambiaria de compraventa y el cheque, que se considera siempre pagadero a la vista; consagró como requisito la forma de vencimiento, la cual puede revertir las siguientes modalidades: a) a la vista: b) a un día cierto...”... Una interpretación rigorista o ajustada a la más estricta exégesis lleva a sostener la tesis de que si en el documento, excepción hecha de los anteriores enunciados no se indica la fecha o forma de vencimiento, **no puede tener como título valor ...** y continúa anotando que en la ley de Ginebra se halla una disposición especial que así dice que la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado se considerará pagadera “a la vista”, precepto que no existe en el Código colombiano... que en Colombia, a diferencia de las leyes **uniforme y mexicana**, si bien se admite la posibilidad de la letra **a la vista**, esta circunstancia debe hacerse constar en el título mismo, pues de lo contrario se afectaría su validez, y que esencialmente exige la mención y **no la suple**, (“De los títulos-valores”, Hello Kattah. págs. 79, 80).

Una cosa es verdad y es la que **no hay ejecución cambiaria sin título cambiario** y un pagaré cuya forma de **vencimiento** está en blanco **no es un pagaré exigible**,

no es pagaré ni es ningún título. No hay entonces título ejecutivo cambiario para el cobro de \$400.000.00 como capital, ni de sus intereses. En esta forma se revocará lo que concierne a esta pretensión ejecutiva cambiaria acumulada.
(...)

13.2.19 Documento jurídico No.19

Título:	Sentencia de octubre 30 de 1986
Autor:	T.S.D.J. de Medellín - Sala Civil
Magistrado ponente:	Jaime Giraldo Serna
Fuente:	Artículo 622 Código de Comercio
Tesis:	El instrumento incoado es aceptado por el derecho cambiario, pero éste le resta toda eficacia jurídica cuando se sale de las marcas de la autorización. La alteración material del mismo sólo ocurre cuando los espacios se llenan contraviniendo la autorización dada por el creador, a quien en tal caso corresponde la carga de la prueba.

Extracto literal:

(...)

Ciertamente la actual preceptiva mercantil, siguiendo en este caso la tradición de la ley de Instrumentos Negociables, acepta que un título-valor pueda ser girado con espacios en blanco y han sido llamados por la doctrina instrumentos o títulos-valores “empezados”, “principiados” o “incoados” pues dice el artículo 622 del Código de Comercio: “Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora”.

De suerte que el instrumento incoado es aceptado por el derecho cambiario, pero también éste le resta toda eficacia jurídica cuando se sale de las marcas de la autorización, por lo cual expresa el mismo mandato que se viene citando: “Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los

que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello”.

De tal manera que no basta con probarse que las letras de cambio adjuntas fueran expedidas en blanco en cuanto a la fecha de expedición y que fue llenado este espacio por el tenedor, porque éste es precisamente uno de los derechos que la ley cambiaría le otorga al tenedor legítimo. La alteración material sólo ocurre cuando el espacio se llena contraviniendo la autorización dada por el aceptante, es decir, cuando se infringe el acuerdo que se hace cuando se suscribe el respectivo título-valor.

Esta prueba le corresponde a la parte excepcionante, pues aun cuando es una negación, no lo es en forma indefinida. Así, la parte actora también puede afirmar y lo ha hecho, que llenó “el instrumento o título-valor de acuerdo con las instrucciones que le fueren dadas”, una afirmación, pero no de carácter indefinido. La Corte al respecto se ha expresado así:

“El que alega un hecho negativo en apoyo de una demanda o de una excepción —dicen Planiol y Ripert, T. VII, núm. 1419— debe probarlo. Este no ofrece ninguna dificultad si el hecho negativo es susceptible de poder ser establecido por medio de la justificación de un hecho afirmativo contrario. Lo mismo sucede si la alegación negativa de un litigante le puede ser reducida a un hecho positivo fácil de probar; la imposibilidad aun absoluta en que se encuentra el demandante (o excepcionante) para justificar los hechos negativos no podría ser motivo para descargarlo de la prueba o imponer ésta al demandado (demandante). Sólo la prueba de las proposiciones no podría constituir el objeto de litigios judiciales”.

Ninguna prueba adujo la parte excepcionante tendiente a configurar la excepción, es decir, que los espacios en blanco fueren llenados contrariando las instrucciones dadas por el suscriptor de los títulos-valores. La señora jueza *a-quo*, al respecto anota con toda razón “Como se anotó anteriormente, hubo de acreditarse en autos que los títulos fueron llenados y ha de entenderse que ello se hizo conforme a las condiciones o indicaciones puestas por el suscriptor, toda vez, que, correspondía a la parte demandada demeritar esta afirmación y no lo hizo”.

(...)

13.2.20 Documento jurídico No. 20

Título: Sentencia de febrero 5 de 1975

Autor: T.S.D.J. de Montería - Sala Civil Laboral

Magistrado ponente: Olimpo Ojeda Martínez

Fuente: Artículo 622 Código de Comercio

Tesis: Los títulos con espacios en blanco deben ser llenados de acuerdo con las instrucciones precisas del creador. Si éstas se contravienen y con posterioridad el título-valor es negociado, será válido y efectivo para el tenedor de buena fe exenta de culpa.

Extracto literal:

(...)

Para la Sala, si bien el título base del recaudo ejecutivo puede tener los antecedentes que relata el excepcionante, es preciso convenir en que el Banco Gaudero es tenedor legítimo del mismo, pues como enseña el artículo 647 del Código de Comercio, "se considerará tenedor legítimo del título a quien lo posee conforme a la ley de su circulación", y esa ley de circulación la constituye el conjunto de normas jurídicas que amparan y prestan eficacia al cheque en su calidad de instrumento negociable, que el cheque de que se trata se firmó en blanco y el tenedor, conforme a las voces del artículo 622 *ibídem*, tenía derecho a llenarlo, pero ateniéndose estrictamente a las instrucciones del suscriptor, es cuestión que no se discute, pero en estos casos esa no es la real situación, sino que, por el contrario, el cheque fue negociado con un tenedor, que lo es de buena fe "exenta de culpa" y desde luego por valor, que le posee "Conforme a su ley de circulación" pues las normas legales por (...) autorizan la negociabilidad de los cheques y amparan las operaciones que con base en ellos se realizan. El artículo 622 del Código de Comercio, ya citado, en su inciso final es terminante sobre la materia: "Si un título de esta clase (entregado en blanco) es negociado, después del llenado a favor de un tenedor de buena fe exento de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas". Para el banco ejecutante, pues, el cheque de que se trata no tiene causa ilícita, sino que la tiene onerosa por cuanto negoció el instrumento, lo tomó por un valor, y como tercero de buena fe exento de culpa, ya que no conocía las relaciones entre el tenedor con quien lo negoció y el girador del instrumento antes de celebrar la operación, sus derechos como tenedor legítimo tienen forzosamente que ser protegidos, pues esta determinación llevaría al fraude y anularía la eficacia del cheque como instrumento negociable legalmente amparado.

(...)

13.2.21 Documento jurídico No. 21

Título: Sentencia de agosto 28 de 1985

Autor: T.S.D.J. de Neiva - Sala Civil

Magistrado ponente: Aura Gutiérrez Duque

Fuente: Artículos 622, 620, 621, 625 Código de Comercio

Tesis: La diferencia entre títulos con espacios en blanco y títulos en blanco radica en que los primeros han sido parcialmente cubiertos, dejando espacios libres para ser llenados por cualquier tenedor legítimo mientras que los segundos apenas tienen la firma del creador, teniendo el tenedor la facultad de llenar lo demás en un solo tiempo o tiempos sucesivos, ajustándose en ambas cosas a las autorizaciones acordadas. La ley protege al tenedor del título estableciendo una presunción de certeza. Corresponde al suscriptor desvirtuarla acreditando que el título fue completado contraviniendo sus instrucciones.

Extracto literal:

(...)

Prevé el artículo 622 del Código de Comercio “Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora”.

Y continúa la norma que “... para que el título, una vez aceptado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello...”.

Algunos requisitos “... pueden ser omitidos porque la ley los presume (artículo 620) y que ella presume el domicilio, la fecha, etc. (621). En el artículo 622 del Código da normas sobre otro fenómeno de singular importancia en derecho cambiario: la posibilidad de llenar algunos requisitos o partes del título-valor

con posterioridad a su emisión. Esto se llama el documento en blanco, el título incoado o incompleto. No porque el papel se dé a la circulación totalmente en blanco, sino sin escribir en él algunos “espacios”, que podrá llenar cualquier tomador legítimo. Todo menos la firma puede entregarse en blanco.” (Eugenio Sanín Echeverry, Títulos-Valores, 4a. edición, pág. 72).

Existe efectivamente una gran diferencia en títulos con espacios en blanco y títulos en blanco. Suponen los primeros que parcialmente han sido cubiertos, dejando espacios libres para ser “... llenados con cláusulas como las del capital o los intereses, lugar de pago o fecha de vencimiento, nombre del beneficiario o del girado, etc...””. Los títulos en blanco “... apenas tienen una firma, la del creador, corriendo a cargo del tenedor llenar lo demás, bien en un solo tiempo o tiempos sucesivos...”. (De los Títulos-Valores, Bernardo Trujillo Calle, pág. 321).

La ley protege al tenedor del título estableciendo una presunción de certeza acerca de él brindándole a su suscriptor la posibilidad de desvirtuarla acreditando que se completó contraviniendo sus instrucciones, pero de acuerdo con la declaración de parte del actor, tenedor legítimo cumplió con los requisitos que la ley comercial establece llenando los espacios en blanco de conformidad a las autorizaciones acordadas.

13.2.22 Documento jurídico No. 22

Título: Sentencia de abril 22 de 1976

Autor: T.S.D.J. de Pasto

Magistrado ponente: Luis A. Fajardo

Fuente: Artículos 622, 784, Código de Comercio

Tesis: La eficacia de los títulos con espacios en blanco y de los títulos en blanco, está condicionada a que el tenedor llene los claros o el cuerpo total del documento, con estricta sujeción a los presupuestos del negocio causal. La omisión implica la insuficiencia del instrumento por falta de requisitos formales, y la alteración de lo pactado conlleva el incumplimiento o la violación del contrato causal, configurándose en ambos casos causales expresas de excepción.

Extracto literal:

(...)

“La ley del comercio permite el giro de un título-valor con espacios en blanco y aun la emisión de éste con sólo la firma de la parte obligada, puesta sobre un papel en blanco; sin embargo, la eficacia de tales instrumentos está condicionada a que tanto los espacios como el cuerpo total del documento en su caso, se llenen “por el tenedor”, con sujeción estricta a los presupuestos del negocio. La omisión implica la insuficiencia del instrumento, por falta de requisitos formales, y la alteración de lo pactado conlleva la violación o el incumplimiento del contrato originario del instrumento. En ambos casos se configuran causales expresas de excepción, de acuerdo con el régimen limitativo consagrado en el artículo 784 del Código del Comercio”.

Se violaron, en forma reiterada, las instrucciones o acuerdos del contrato. Estos hechos son suficientes para fundar en ellos la excepción consagrada en el artículo 784 numeral 13, en armonía con el artículo 622 del Código de Comercio. Por tratarse de una obligación personal cambiaria, no oponible a tercero “tenedor de buena fe exento de culpa”, conviene puntualizar que en los autos, el ejecutante actúa y así lo reconoce en forma reiterada, como apoderado, esto es como endosatario, en representación de la beneficiaria inicial, contra quien proceden eficazmente las impugnaciones nacidas de su relación obligacional con la parte ejecutada.

(...)

13.2.23 Documento jurídico No. 23

Título:	Sentencia de mayo 12 de 1981
Autor:	T.S.D.J. de San Gil - Sala Civil
Magistrado ponente:	Pedro León Niño Mendoza
Fuente:	Artículos 622, 630, 654 Código de Comercio
Tesis:	La entrega de un cheque en blanco para garantizar una negociación, lleva implícita la autorización de llenar los espacios en blanco por cualquier tenedor legítimo en la cantidad que resulte del negocio.

El tenedor del título no puede cambiar la ley de circulación, sin autorización del creador, de donde se colige la necesidad de que a quien se endose en blanco el título, debe llenarlo, con su nombre o el de un tercero antes de presentarlo para el ejercicio del derecho que en él se incorpora.

Extracto literal:

(...)

La segunda excepción titulada de mérito o perentoria por “carencia de toda causa real” se fundamenta principalmente en que la emisión del cheque no se hizo con el ánimo de crear derechos u obligaciones entre girador y beneficiario sino que fue un acto que puede llamarse de confianza y apenas se firmó, sin señalar el nombre del beneficiario ni la cantidad de dinero. A este respecto cabe anotar que el Código de Comercio en su artículo 622 expresa que “si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora” (subraya la Sala).

Se dice que, no se llenaron los espacios de conformidad con las instrucciones del suscriptor, pero cuáles instrucciones si, como se afirma, el cheque se entregó para respaldar un negocio, es decir que no se impartieron concretas instrucciones, dando por sentado, que su entrega fue tal y como lo afirma la parte demandada. Pero es que esta misma norma, luego de reseñar las consecuencias de la firma de un papel en blanco con la finalidad de convertirlo en título-valor estatuye que “si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas”. Las reglas que gobiernan los actos comerciales establecen tal protección a los instrumentos negociables por cuanto ellas tocan con el orden social, pues las cosas que están en el comercio están amparadas por la presunción de la legalidad y por ello quienes de instrumentos de esta naturaleza se valen, tienen bajo su responsabilidad los actos que realicen con los cuales se pueda comerciar. Quizá los títulos-valores mejor protegidos en su negociación son los cheques y por ello los bancos mismos son de sumo cuidado en la suscripción de contratos de cuenta corriente por el peligro que envuelve la entrega de instrumentos negociables en manos de irresponsables.

La letra B) de la excepción segunda se hace consistir en “no haberse confeccionado el cheque girado o firmado en blanco de acuerdo con las instrucciones de la suscriptora”, con el argumento de que la giradora nunca ha mantenido sumas superiores a cinco mil pesos y afirma que la excepción debe prosperar con apoyo en el artículo 622 del Código de Comercio, que, como ya lo vimos, autoriza llenar los espacios en blanco siguiendo las instrucciones del girador, pero es que esta argumentación se destruye con otras que hace el excepcionante, pues se afirma que se giró para garantizar una negociación, vaya a descubrirse por qué valor, o si estaba destinado a garantizar una negociación, llevaba la autorización implícita de llenarlo por tal negociación. ¿Será posible garantizar la adquisición de bienes con un cheque que no indique la cantidad que garantice?

La Sala cree que ello no es posible y nadie aceptaría que en pago de un bien se le entregara un cheque en blanco, cuando para entonces ya se ha convenido en el precio.

Entonces a este respecto necesario es concluir que si la demandada entregó el cheque para que (...) garantizara una negociación, estaba implícita la autorización para llenar los espacios en blanco por la cantidad que surgiera de tal acto comercial.

(...)

13.2.24 Documento jurídico No. 24

Título: Sentencia de agosto 18 de 1989

Autor: T.S.D.J. de San Gil - Sala Civil

Magistrado ponente: Pedro León Niño Mendoza

Fuente: Artículo 622 Código de Comercio

Tesis: Los títulos-valores en blanco y títulos con espacios en blanco solamente nacen a la vida jurídica cuando su tenedor legítimo llene efectivamente los espacios en blanco.

Extracto literal:

(...)

En efecto, el juzgador de instancia para negar dicha excepción tuvo como fun-

damento que el cheque materia de la ejecución fue girado para garantizar obligación anterior contraída por el ejecutado, existiendo acuerdo de voluntades de que la fecha del título se llenaría posteriormente, es decir, no fue girado para su cobro inmediato sino para respaldar o garantizar el pago de un crédito.

Ciertamente se demostró a cabalidad que el cheque por la cantidad de \$1.200.000,00 girado por el ejecutado a la orden del demandante se elaboró en el mes de marzo de 1987, pero acordando las dos partes que se llenaría posteriormente la fecha para el cobro bancario, para cuyo efecto se dejó (sic) espacios en blanco, y que el mencionado título devengaría un interés del 3% mensual en los tres primeros meses. Así mismo se convino que el deudor abonaría a la obligación una suma no inferior a doscientos mil pesos (folio 3 cuaderno número 3).

Si bien es verdad que el cheque será siempre pagadero a la vista y que cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta, siendo pagadero el cheque posdatado a su presentación (artículo 717 del Código de Comercio), también lo es que el artículo 622 ibídem permite la emisión de títulos en blanco o con espacios sin llenar pudiendo hacerlo cualquier tenedor legítimo, conforme a las instrucciones del suscriptor, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Y no otra cosa fue la realizada por el demandante al llenar el espacio en blanco, fijando la fecha del 8 de febrero de 1988, y presentando el cheque para su cobro al día siguiente, no siendo pagado por el Banco por fondos insuficientes y falta de sello ante firma registrada, acreditándose también que, en ningún momento, el demandado tuvo en el Banco fondos suficientes para el pago del título-valor (folio 20 cuaderno número 3). Es decir, si los fenómenos de caducidad y prescripción operan partiendo de la fecha de presentación y protesto del cheque, según pudo observarse anteriormente, y en este caso el título fue presentado para su cobro al día siguiente del señalado en su cuerpo, es obvio que esa es la fecha que debe tenerse en cuenta y no la época en que se creó para respaldar o garantizar obligación contraída entre las partes, porque realmente el mencionado título tan sólo nació a la vida jurídica cuando su tenedor legítimo llenó el espacio en blanco que señalaba el día para el cobro bancario, conforme a instrucciones recibidas del librado de que no lo presentara al Banco por carecer de fondos.

13.2.25 Documento jurídico No. 25

Título: Sentencia de junio 26 de 1991

Autor: T.S.D.J. de San Gil - Sala Civil Laboral

Magistrado ponente: Pedro León Niño Mendoza

Fuente: Artículos 622, 784 numeral 5 Código de Comercio; circulares 075 de 03-10-78 y 010 de 31-05-85 de la Superintendencia Bancaria

Tesis: Tratándose de títulos en blanco y de títulos con espacios en blanco en los que participe una entidad crediticia, en relación con la obligación que tiene el tenedor de completar u ocupar los claros, según el caso, debe sujetarse a las instrucciones impartidas por el creador, las cuales deberán constar siempre por escrito. El llenar el título contrariando las instrucciones respectivas da lugar, además de las responsabilidades civiles y penales, a la excepción de alteración del texto del título, todo lo cual sin que se le reste eficacia ni validez al título. El simple hecho de no constar las instituciones por escrito no le resta validez ni eficacia al título-valor.

Extracto literal:

(...)

Del contenido del citado numeral se infiere que el demandado puede oponer válidamente como excepción cualquier hecho que demuestre que hubo alteración en el texto del título, vale decir, en el documento donde consta la obligación.

En la Ley 45 de 1923 la alteración sustancial hecha sin el consentimiento de todas las partes obligadas producía el descargo del instrumento, es decir lo dejaba sin efecto alguno, excepto contra la parte que había puesto o autorizado o consentido la alteración y contra los endosantes subsiguientes.

En cambio, en el Código actual, surge como primera diferencia, la de que en ningún caso el título alterado deja de producir efectos. No hay descargo de él. Todas las partes siguen vinculadas al pago, aunque no en igual forma, puesto que la norma favorece la seguridad del derecho del tenedor y tutela la buena fe, con lo que se muestra más conforme con los principios que rigen los títulos-valores, o sea los de literalidad, incorporación y autonomía.

En cuanto a quién corresponde probar la alteración del instrumento, debe recordarse que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de que las normas que consagran el efecto que ellas persiguen, tal como lo estatuye el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

La defensa esgrimida por el demandado a fin de enervar la acción incoada la apoya fundamentalmente según el relato contenido en los 10 hechos que la sustenta, en que se vinculó a una obligación con la sucursal de la Caja Agraria del Socorro, en calidad de codeudor solidario de Martha Socorro Barrera Páez, por el valor principal de cuatrocientos noventa y seis mil pesos (\$496.000.00); que firmó en blanco el pagaré ya que entendió, en ese momento, que el documento por él suscrito, iría a ser llenado conforme a las precisas especificaciones del crédito que asumía, esto es que el dinero producto del mutuo, se destinaría por parte de la deudora principal a la compra de un establecimiento de comercio situado en la plaza de mercado del Socorro, y que fue ese destino del crédito el que lo determinó a avalar la citada obligación: habida cuenta que el negocio de comercio que iba a adquirirse se constituiría en la única garantía que la deudora podía otorgar.

Afirma que la Caja Agraria haciendo burla de esas instrucciones, y en conducta que riñe con los postulados de lealtad y honestidad, rectores de las relaciones comerciales, llenó el pagaré suscrito en blanco, desconociendo los términos y condiciones puestos por el codeudor y aceptados por ellas, y en lugar de entregar el dinero del préstamo con destino al establecimiento de comercio en la plaza de mercado del Socorro, otorgó el crédito en la renovación de otra obligación pendiente y vencida de la deudora principal con la misma Caja Agraria, distinguida con el número 22.776, por \$385.000,00, en la cobertura de un saldo insoluto en Credibanco, a cargo de la misma Martha Socorro Barrera Páez, por \$73.169,00, en el pago de intereses sobre el crédito número 22.776, por valor de \$37.851,00, ascendiendo el crédito a la suma total de \$516.020,00, suma que no corresponde al monto del crédito avalado por el codeudor solidario (\$496.000.00).

Asevera también, que la Caja Agraria por conducto de su gerente para urdir la dolosa maniobra en perjuicio de sus intereses, vulneró las órdenes impartidas por la Superintendencia Bancaria en circular número 075 de 3 octubre de 1978, que señala las pautas a las entidades de crédito en relación con la obligación que tiene el tenedor de llenar los espacios en blanco de los título-valores, de conformidad con las instrucciones del suscriptor, las que deberán constar siempre por escrito y que en este caso no se cumplieron.

Recuerda que el inciso 2o. del artículo 622 del Código de Comercio preceptúa que “una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título-valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el título, un vez completado pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello”, preceptos que no cumplió la Caja Agraria en el otorgamiento del crédito materia de esta litis, ya que no sólo infringió la norma sino las claras y terminantes órdenes administrativas, impartidas sobre el particular por la Superintendencia Bancaria, actuación ilegal que hace invertir la carga de la prueba y obliga a la demandante al deber de probar que el texto del pagaré corresponde a la voluntad expresada por el codeudor excepcionante.

Ciertamente la Caja de Crédito Agrario, sucursal del Socorro, al permitir que los dos codeudores firmaran en blanco el pagaré de marras no dio estricto cumplimiento a las circulares emanadas de la Superintendencia Bancaria sobre el particular, concretamente a la número 010 de 1985 de 31 de enero, en la que se exige a las entidades crediticias que cuando utilicen pagarés firmados en blanco, para evitar abusos e irregularidades, el título debe ser llenado de acuerdo con las instrucciones expresas de su creador y no a criterio del tenedor, instrucciones que deben dejarse por escrito y copia de ellas debe quedar en poder de quien las otorga, a la vez que les recuerda “el llenar el título contrariando las instrucciones respectivas puede dar lugar a responsabilidades tanto civiles como penales”.

El hecho de que la Caja Agraria no hubiese cumplido textualmente las indicaciones hechas por la Superintendencia Bancaria respecto a los pagarés firmados en blanco, evidentemente le puede acarrear sanciones de índole civil o penal tal como se anuncia en la circular externa de 31 de enero de 1983, mediante el debido proceso iniciado por quien se siente víctima de esas irregularidades, pero el haber infringido el director o gerente de la Caja esas recomendaciones administrativas no le resta eficacia ni validez al título-valor puesto que fue llenado por la Caja acatando instrucciones de sus ordenantes, según se desprende del acervo probatorio.

13.2.26 Documento jurídico No. 26

Título:	Sentencia de mayo 2 de 1985
Autor:	T.S.D.J. de Santa Rosa de Viterbo - Sala Civil Laboral
Magistrado ponente:	Gloria Rosa Martínez Ojeda

Fuente: Artículo 622, Código de Comercio

Tesis: La ley permite que se convierta en título-valor un documento en blanco suscrito y entregado por el creador, siempre y cuando su tenedor lo llene estrictamente de acuerdo con la autorización dada por aquél.

Extracto literal:

(...)

La ley faculta (artículo 622 Código de Comercio) para que se convierta en título-valor un documento en blanco suscrito y entregado por el firmante por el tenedor del mismo siempre y cuando lo llene estrictamente de acuerdo con la autorización dada por él. (...)

13.2.27 Documento jurídico No. 27

Título: Sentencia de junio 27 de 1986

Autor: T.S.D.J de Valledupar - Sala Civil Laboral

Magistrado ponente: Julio Sierra Pimiento

Fuente: Artículo 622, Código de Comercio

Tesis: Se presume que, para la creación de un título en blanco o con espacios en blanco en cuanto a su naturaleza y términos, existe acuerdo previo, y su entrega legítima al tenedor para llenarlo o completarlo conforme a las instrucciones dadas, lo cual ha de suponerse mientras no se demuestre lo contrario.

Extracto literal:

(...)

La conducta de los ejecutados, cuando aceptan procesalmente haber firmado en blanco el pagaré 11.485, y entregado al Banco del Comercio, sucursal Valledupar, para convertirlo en un título-valor, obliga a entender con certeza que entre los

contratantes hubo un acuerdo para la creación del título en cuanto a su naturaleza y términos, más aún por cuanto la entrega al Banco del documento en blanco, legitimó a su tenedor para llenarlo o completarlo conforme a las instrucciones dadas, y que ha de suponerse son las consignadas en el documento hasta tanto no se demuestre lo contrario por los ejecutados.

El tenedor legítimo del documento, según lo preceptuado por el artículo 622 del Código de Comercio, estaba autorizado para llenarlo según las instrucciones que se supone por mandato legal fueron dadas por los ejecutados, y en cumplimiento a esa facultad quedó legitimado para iniciar la acción ejecutiva cambiaria. Esa presunción del acuerdo de las partes para crear el título, está respaldada probatoriamente, por la firma que como suscriptor de ese documento estamparon los ejecutados **José Guillermo Castro Castro** y **Guillermo Castro Daza**, más aún por cuanto las firmas incorporadas a los títulos-valores se presumen auténticas, otorgándole eficacia al mérito ejecutivo del título fundamento de la acción instaurada.

Está acreditada la existencia de las obligaciones a nombre de la señora **Rosalía Daza de Castro**, **Inversiones Santa Rosalía Limitada**, e intereses de crédito por la Ley 5a. a cargo de **José Guillermo Castro Castro**. Esas obligaciones vencidas, como es la costumbre mercantil, fueron recogidas en una sola obligación para crear el pagaré 11.485 de febrero veintinueve (29) de mil novecientos ochenta (1980) y por razón del acuerdo pactado por las partes y consignado en el mentado pagaré; este último documento se creó para sustituir aquellas obligaciones vencidas con el propósito de que ésta ocupara el lugar de aquéllas; por esa razón los ejecutados firman el documento en blanco y lo entregan al Banco para que fuera llenado o completado de acuerdo con las instrucciones dadas. El convenio o acuerdo de las partes, para recoger obligaciones vencidas, propias o ajenas en una sola obligación, con el propósito de sustituir aquéllas por éstas, según la doctrina y la costumbre mercantil, tiene como única finalidad, el de pagar por otro, eventualidad que es expresamente legal al tenor del artículo 1630 del Código Civil, precepto que consagra que cualquier persona puede pagar por el deudor a nombre de él, sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor.

Con fundamento en lo anotado, es por lo que, no causa extrañeza procesal ni puede entenderse como temeraria la actitud de la entidad crediticia, cuando recoge en una nueva obligación las vencidas con anterioridad. No se requiere solemnidad alguna o autorización por escrito para consumir este acto mercantil. Realizado el convenio o acuerdo entre las partes y firmado el documento en blanco, entendemos que la entrega de ese documento al acreedor firmado por el

deudor o quien quiera pagar por otro, ha de ser exclusivamente para utilizarlo como sustitución de obligaciones vencidas o de créditos otorgados a quien suscribe el documento; pues su entrega no puede ser gratuita o con propósito distinto si no se acredita o pacta otra cosa por el ejecutado. Con ese acto se reconoce no sólo la existencia del acuerdo de sustituir con este nuevo pagaré las obligaciones vencidas, sino que además, se buscó y alcanzó una prórroga en el vencimiento de esa obligación que se cobra; con ese pago la exigibilidad de la nueva obligación se prolongó en el tiempo hasta noviembre veinte (20) de mil novecientos ochenta (1980), vencimiento que obligó a la entidad crediticia a iniciar la correspondiente acción cambiaria ejecutiva, en octubre veintiocho (28) de mil novecientos ochenta y uno (1981).

En renglones anteriores se analizó que la firma estampada en blanco en el documento por los ejecutados, entregado por éstos a la entidad crediticia, para llenarlo o completarlo conforme a las instrucciones dadas, legitimó al ejecutante para hacerlo; y así, por virtud de la intención y consentimiento de los ejecutados, cuyo propósito al otorgar el documento firmando en blanco fue el de transformar las obligaciones vencidas originalmente en una sola, de sustituir aquella por la que se cobra, sin que pueda pensarse que se quiso garantizar. Cuando se crea un documento como garantía, la obligación primera o principal, no muere, no desaparece; persiste con todos sus efectos, aun con los gravámenes que fueron creados para respaldarla. En el asunto *sub-lite*, las obligaciones vencidas y recogidas por el acreedor conforme a lo convenido, y cuyo monto de capital e intereses aparecen consignados en una suma única en el pagaré número 11.485, se extinguieron con ocasión de haberse operado la sustitución de aquellas obligaciones primitivas por el título-valor creado por los ejecutados, y el que conforme a la ley mercantil, vale como pago, al ocupar ésta el lugar de aquéllas.

(...)

13.2.28 Documento jurídico No. 28

Título:	Sentencia de octubre 21 de 1987
Autor:	T.S.D.J. de Valledupar - Sala Civil Laboral
Magistrado ponente:	Glenis Iglesias de López
Fuente:	Artículo 622, Código de Comercio
Tesis:	El tenedor legítimo de un título en blanco o con espacios en blanco, está autorizado para llenarlo según las

instrucciones que se supone por mandato legal fueron dadas por el creador, y en cumplimiento de esa facultad, está legitimado para endosarlo en propiedad.

Extracto literal:

(...)

En el asunto que nos ocupa, los señores **Ciro Monsalvo Riveira** y **Arturo Monsalvo Villazón**, celebraron un negocio jurídico, en virtud del cual el primero giró a favor del segundo una letra de cambio en blanco, la que sería llenada por la suma y en las condiciones que con posterioridad fijaran los señores **Alfonso Monsalvo Riveira** y **Arturo Monsalvo Villazón**, título que fue llenado por el valor de cuatro millones quinientos mil pesos m/cte. (\$4.500.000,00), conforme a las instrucciones dadas, siendo negociado con posterioridad por su tenedor con el señor **Alberto Ortiz**, endoso que se realizó en propiedad, quedando por tanto el actor en calidad de legítimo tenedor de buena fe, exenta de culpa, transmitiéndose el título con todos los derechos principales y accesorios a él incorporado.

La conducta del ejecutado cuando acepta haber firmado en blanco el título-valor para garantizar la obligación contraída por su hermano **Alfonso Monsalvo Riveira** con Asocesar, empresa que a su vez era deudora del endosante, obliga a entender con certeza que entre los señores **Monsalvo Riveira** y **Monsalvo Villazón** hubo un acuerdo previo a la creación del título en cuanto a su naturaleza y términos, más aún por cuanto la entrega al endosante legitimó a su tenedor para llenarlo conforme a las instrucciones dadas, y que ha de suponerse son las consignadas en el documento, hasta tanto no se demuestre lo contrario por el ejecutado.

El tenedor legítimo del documento, según lo preceptuado por el artículo 622 del Código de Comercio, estaba autorizado para llenarlo según las instrucciones que se suponen por mandato legal fueron dadas por el ejecutado, y en cumplimiento a esa facultad quedó legitimado para endosarlo en propiedad en la forma como lo hizo, transmitiendo el título con todos los derechos principales y accesorios a él incorporados, desligándose totalmente de él con lo cual el actor quedó legitimado para incoar la acción ejecutiva cambiaria. Esa presunción del acuerdo entre el señor **Monsalvo Riveira** y **Monsalvo Villazón** para llenar el título está respaldada probatoriamente por la firma que como girador y aceptante del documento estampó **Ciro Monsalvo Riveira**, más aún por cuanto las firmas de los títulos-valores se presumen auténticas otorgándole eficacia al mérito ejecutivo del título fundamento de la acción instaurada.

(...)

BIBLIOGRAFIA

1. DOCTRINA

ARANGO HENAO, Alfonso. Teoría de los Títulos-Valores. Bogotá: Editorial Wilches, 1979.

BONFANTI, Mario y GARRONE, José Alberto. De los Títulos de Crédito. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot S. A., 1976.

CANCINO MORENO, Antonio José. La Falsedad documental en el Nuevo Código Penal. Bogotá: Editores Jurídicos Asociados, 1981.

CASSAGNE, Juan Carlos. El Acto Administrativo. Segunda edición. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot S. A., 1978.

CERVANTES AHUMADA, Raúl. Títulos y Operaciones de Crédito. México, D. F.: Editorial Herrero S. A., 1973.

DE GREIFF RESTREPO, Gustavo. Del pagaré en blanco. En: Revista Derecho Colombiano No. 294. Bogotá: Editorial Librería El Profesional, 1986.

ESCUTTI, Ignacio A. Títulos de Crédito. Segunda edición. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1988.

ESTRADA VELEZ, Federico. Delitos contra la Fe Pública. En: Estudios de Derecho Penal, Cali: Fundación para la Investigación y Estudios Jurídicos, 1981.

FERRI, Giuseppe. Títulos de Crédito. Buenos Aires: Editorial Abeledo - Perrot S. A., 1982.

GOLDSCHMIDT, Roberto. La Letra de Cambio y el Cheque. Caracas: Editorial Frabreton, 1984.

HELLO KATTAH, Luis S. De los Títulos-Valores en general. Bogotá: Editorial Lito-Estudio, 1973.

LEAL PEREZ, Hildebrando. Curso de Títulos-Valores. Tomo II. Bogotá: Ediciones Librería El Profesional, 1989.

LEGON, Fernando A. La Letra de Cambio y el Pagaré. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot S. A., 1984.

LOPERA SALAZAR, Luis Javier. Títulos-Valores. Teoría General y Especial. Medellín: Editorial Servigráficas, 1981.

LOPEZ DE GOICOECHEA, Francisco. La Letra de Cambio. México, D.F.: Editorial Porrúa S. A., 1979.

MANTILLA MOLINA, Roberto L. Títulos de Crédito. Segunda edición. México, D. F.: Editorial Porrúa, MCMLXXXIII.

MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo 6. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas. Europa: América, 1971.

PEÑA CASTRILLON, Gilberto. De los Títulos-Valores en general y de la Letra de Cambio en particular. Bogotá: Editorial Temis, 1981.

POSSE ARBOLEDA, León. Notas sobre Títulos-Valores en el Nuevo Código de Comercio. Tercera edición. Bogotá: Editorial Temis, 1980.

RENGIFO, Ramiro. Letra de Cambio y Cheque. Bogotá: Editorial Pequeño Foro, 1974.

RESTREPO NAVARRO, Gustavo A. Una opinión diferente sobre el pagaré en blanco. En: Revista Derecho Colombiano No. 296. Bogotá: Editorial Librería El Profesional, 1986.

RODRIGUEZ, Gustavo Humberto. Derecho Probatorio Colombiano. Tercera edición. Bogotá: Editorial Ediculco, 1979.

RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios y su significación en América Latina. Segunda edición. Bogotá: Editorial Fabelan, 1979.

RODRIGUEZ R., Libardo. Derecho Administrativo. Sexta edición. Bogotá: Editorial Temis, 1990.

ROMERO SOTO, Luis Enrique. La Falsedad Documental. Tercera edición. Bogotá: Editorial Carvajal, 1982.

SANINECHEVERRY, Eugenio. Títulos-Valores. Segunda edición. Medellín: Editorial Granamericana, 1975.

SUPINO, David y DE SEMO, Jorge. La Letra de Cambio y del pagaré cambiario...

TENA, Felipe de J. Títulos de Crédito. Tercera edición. México, D.F.: Editorial Porrúa S. A., 1956.

TRUJILLOCALLE, Bernardo. De los Títulos-Valores. Tomo I. Sexta edición. Bogotá: Editorial Librería el Foro de la Justicia, 1985.

VIVANTE, César. Tratado de Derecho Mercantil. Volumen III, Primera edición. Madrid: Editorial Reus, 1936.

WILLIAMS Jorge N. La Letra de Cambio y el Pagaré. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot S. A., 1981.

YOUNES MORENO, Diego. Curso Elemental de Derecho Administrativo. Bogotá: Editorial Temis Librería, 1984.

2. LEGISLACION

COLOMBIA. Código Civil y Legislación Complementaria. Bogotá: Editorial Temis, 1986.

COLOMBIA. Código de Comercio. Bogotá: Editorial Temis, 1984.

COLOMBIA. Código de Procedimiento Civil. Bogotá: Editorial Temis, 1989.

COLOMBIA. Presidente de la República. Decreto No. 2282 de 1989 (octubre 7) "por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil" En: Diario Oficial No. 39.013 (sábado 7 de octubre, 1989) Bogotá: Imprenta Nacional. Págs. 1-46.

3. CONCEPTOS

SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular DB-0075. Enero 13 de 1975.

SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular 075. Octubre de 1978.

SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Circular DB-010. Enero 31 de 1985.

SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Documento OJ-075. Octubre 20 de 1987.

SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Concepto OJ-001. Mayo 27 de 1991.

4. JURISPRUDENCIA

COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique Aldana Rozo. Sentencia junio 14 de 1983.

COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Magistrado ponente: Doctor Edgar Saavedra Rojas. Sentencia septiembre 9 de 1988.

COLOMBIA. Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Bogotá: Sentencia. Febrero 22 de 1990.

COLOMBIA. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá: Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Jesús María Carrillo Ballesteros. Sentencia diciembre 6 de 1983.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctora Necty Gutiérrez de Murcia. Sentencia mayo 28 de 1984.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctora Mercedes Labrador de Ospina. Sentencia junio 26 de 1985.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctora María Teresa Plazas Alvarado. Sentencia noviembre 2 de 1990.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Bucaramanga. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Libardo García Romero. Sentencia febrero 28 de 1986.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Cúcuta. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Hernando Camargo. Sentencia abril 15 de 1975.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Cúcuta. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Mario Vásquez Rodríguez. Sentencia marzo 1º de 1984.

- COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Cúcuta. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Juan José García Rivera. Sentencia diciembre 13 de 1984.
- COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Cúcuta. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Mario Vásquez Rodríguez. Sentencia julio 26 de 1985.
- COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Cúcuta. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Evelio Mora Gutiérrez. Sentencia octubre 16 de 1985.
- COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Cúcuta. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Evelio Mora Gutiérrez. Sentencia marzo 29 de 1989.
- COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Ibagué. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Euclides Roa Escobar. Sentencia noviembre 24 de 1986.
- COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Ibagué. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Hernán U. Verástegui García. Sentencia febrero 27 de 1990.
- COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Ibagué. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Hernán U. Verástegui García. Sentencia noviembre 6 de 1990.
- COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Ibagué. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Jesús Antonio García Trujillo. Sentencia marzo 6 de 1991.
- COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Manizales. Sala General. Magistrado ponente: Doctor Evelio Martínez Hurtado. Sentencia febrero 21 de 1989.
- COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Medellín. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Jaime Giraldo Serna. Sentencia agosto 2 de 1982.
- COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Medellín. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctora Beatriz Quintero de Prieto. Sentencia agosto 1º de 1984.
- COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Medellín. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctor Jaime Giraldo Serna. Sentencia de octubre 30 de 1986.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Montería. Sala Civil-Laboral. Magistrado ponente: Doctor Olimpo Ojeda Martínez. Sentencia febrero 5 de 1975.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Neiva. Sala Civil. Magistrado ponente: Doctora Aura Gutiérrez Duque. Sentencia agosto 28 de 1985.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Pasto. Sala Civil. Magistrado ponente: Luis A. Fajardo. Sentencia abril 22 de 1976.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de San Gil. Sala Civil. Magistrado ponente: Pedro León Niño Mendoza. Sentencia mayo 12 de 1981.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de San Gil. Sala Civil. Magistrado ponente: Pedro León Niño Mendoza. Sentencia agosto 18 de 1989.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de San Gil. Sala Civil. Magistrado ponente: Pedro León Niño Mendoza. Sentencia junio 26 de 1991.

COLOMBIA. Tribunal Superior Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. Sala Civil - Laboral. Magistrado ponente: Doctora Gloria Rosa Martínez Ojeda. Sentencia mayo 2 de 1985.

COLOMBIA. Tribunal Superior de Valledupar. Sala Civil - Laboral. Magistrado ponente: Doctor Julio Sierra Pimienta. Sentencia junio 27 de 1986.

COLOMBIA. Tribunal Superior de Valledupar. Sala Civil - Laboral. Magistrado ponente: Doctora Glenis Iglesias de López. Sentencia octubre 21 de 1987.